



**VNiVERSiDAD  
D SALAMANCA**

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL



**1218 - 2018**

ESCUELA DE DOCTORADO 'STUDII SALAMANTINI'  
PROGRAMA DE DOCTORADO  
ESTADO DE DERECHO Y GOBERNANZA GLOBAL

**T E S I S D O C T O R A L**

**Ministerio Público y combate a la  
corrupción política: la relevancia de  
un proceso penal colaborativo**

**ADRIANO MARCUS BRITO DE ASSIS**

**Directores:**

**NICOLÁS RODRÍGUEZ-GARCÍA**

Catedrático de Derecho Procesal – Universidad de Salamanca

**RAFAEL BUSTOS GISBERT**

Prof. Titular de Derecho Constitucional – Universidad de Salamanca

**Salamanca | 2018**





**UNIVERSIDAD  
DE SALAMANCA**

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL



**1218 - 2018**

ESCUELA DE DOCTORADO 'STUDII SALAMANTINI'  
PROGRAMA DE DOCTORADO  
ESTADO DE DERECHO Y GOBERNANZA GLOBAL

**TESIS DOCTORAL**

# **Ministerio Público y combate a la corrupción política: la relevancia de un proceso penal colaborativo**

**ADRIANO MARCUS BRITO DE ASSIS**

Tesis Doctoral presentada para obtener el grado de Doctor por la Universidad de Salamanca (España), dirigida por **NICOLÁS RODRÍGUEZ-GARCÍA** (Catedrático de Derecho Procesal ~ Universidad de Salamanca ~ nicolas@usal.es) y **RAFAEL BUSTOS GISBERT** (Prof. Titular de Derecho Constitucional ~ Universidad de Salamanca ~ frodo@usal.es).

**Salamanca | 2018**



Dedico esta tesis doctoral a todos los que creen que el deseo de aprender es  
una virtud perenne.



## **AGRADECIMIENTOS**

Por la inspiración, paciencia, incentivo y confianza, a los Profesores  
Nicolás Rodríguez-García y Rafael Bustos Gisbert.

A Salamanca, por los años de convivencia, en donde encontré a Daniela.

A mi familia, por el apoyo y amor, siempre.





## ÍNDICE

ABREVIATURAS.....	19
INTRODUCCIÓN .....	21
<b>I. CORRUPCIÓN POLÍTICA, CONTROL DEL PODER Y MINISTERIO PÚBLICO .....</b>	<b>27</b>
<b>1. Corrupción: fenómeno poliédrico y posibles definiciones .....</b>	<b>27</b>
1.1. Un fenómeno antiguo y adaptable a diferentes formas de organización social .....	27
1.2. Un objeto de difícil conceptualización: mejor comprenderlo antes de definirlo.....	36
1.3. Elementos para la definición del concepto de corrupción .....	38
1.4. Corrupción política: comprensión y concepto.....	45
<b>2. Democracia: un marco conceptual para el estudio de la corrupción política .....</b>	<b>50</b>
2.1. Democracia constitucional y representativa .....	50
2.2. Democracia formal y sustancial.....	56
2.3. Repercusiones de la corrupción política sobre la democracia .....	60
2.3.1. Repercusiones sobre la división de poderes y la garantía de los derechos fundamentales.....	60
2.3.2. Repercusiones sobre los ámbitos formal y sustancial de la democracia.....	63
2.3.3. Repercusiones sobre la democracia representativa .....	66
<b>3. Control jurídico del poder y combate a la corrupción: justificativas desde tres esferas.....</b>	<b>68</b>
3.1. Premisas de la democracia representativa .....	68
3.2. Premisas del Estado constitucional de Derecho .....	71
3.3. Premisas del principio republicano .....	74
3.4. Breve excursus sobre la evolución del control jurídico del poder.....	76

3.4.1. Del poder monolítico ilimitado hacia el poder democrático bajo la ley.....	76
3.4.2. La evolución del control jurídico del poder: estímulos y trabas desde tres aspectos.....	81
3.4.2.1. Crecimiento del papel del Estado .....	81
3.4.2.2. Fragmentación normativa en el “mercado de las leyes”... ..	83
3.4.2.3. La concentración de poder en el Poder Ejecutivo .....	85
3.5. Evasivas al control jurídico del poder y su erosión: actitudes claves en la corrupción política.....	88
3.5.1. Evadirse del control jurídico: ilegitimidad democrática electoral y límites a la independencia de las agencias de persecución penal.....	88
3.5.1.1. Mandatos electorales intocables: la supremacía de la accountability vertical electoral.....	88
3.5.1.2. Legitimidad democrática electoral y límites a la independencia de las agencias de persecución penal.....	93
3.5.2. Erosión del control jurídico: transfiguración del Estado de Derecho y debilitación de sus instituciones.....	95
3.5.2.1. La transformación del Estado de Derecho en una fachada .....	95
3.5.2.2. La sustracción de la esencia de las instituciones de control y el entorpecimiento social.....	98
<b>4. Control jurídico del poder y corrupción política: legitimidad, indispensabilidad y complementariedad en tres claves .....</b>	<b>99</b>
4.1. Nuevo entramado institucional y separación de poderes: soporte en contra de la corrupción política.....	99
4.2. Control ciudadano: entre cooperación y limitaciones.....	105
4.3. Una nueva malla institucional para el actual Estado democrático de Derecho: perspectivas para luchar contra la corrupción política .....	109
<b>5. Ministerio Público y control del poder: introducción al tema .....</b>	<b>113</b>
5.1. Encaje de la institución en el nuevo entramado institucional.....	113
5.2. Ubicación constitucional: referencias históricas y algunos debates .....	115
5.2.1. Notas históricas preliminares .....	115
5.2.2. Integración en la Constitución: ¿poder autónomo? Un breve excursus sobre la congruencia o no del debate .....	119
5.2.3. Excurso complementario y final: ¿debate teórico <i>versus</i> visión funcionalista? .....	124

5.2.4. Ministerio Público y su integración en los poderes Ejecutivo o Judicial: ideas preliminares .....	128
5.2.4.1. Naturaleza de las funciones de la institución como referente de razonamiento .....	128
5.2.4.2. Constitución, simbología y comunicación .....	130
<b>II. MINISTERIO PÚBLICO Y ORDEN CONSTITUCIONAL: GARANTÍAS INSTITUCIONALES. RELACIÓN CON LA POLÍTICA Y CON LOS MEDIOS.....</b>	<b>135</b>
<b>1. Garantías normativo-institucionales del Ministerio Público: fundamentos introductorios a partir de su rol en la lucha contra la corrupción política .....</b>	<b>135</b>
1.1. La estatura constitucional: órgano constitucional e institución de Estado.....	135
1.2. Institución de garantía.....	139
1.3. Institución de exoneración y procurador de la confianza en las instituciones .....	141
1.4. Institución de contrapunto a la iniquidad y a la desigualdad .....	144
1.5. Institución de defensa y propulsión de políticas públicas “incómodas” al poder.....	148
1.6. Institución aliada de la buena gobernabilidad y del incremento de la calidad democrática.....	151
<b>2. Las garantías en concreto. La conformación de la libertad de actuar de la institución: autonomía e independencia .....</b>	<b>158</b>
2.1. Autonomía e independencia: consideraciones previas.....	158
2.2. Autonomía: nociones conceptuales .....	162
2.2.1. Implicaciones entre la autonomía del Ministerio Público y la lucha contra la corrupción política .....	165
2.2.2. Dada la premisa anterior: la autonomía del Ministerio Público como garantía contra represalias .....	166
2.2.3. Autonomía administrativa .....	169
2.2.4. Autonomía presupuestaria/financiera .....	172
2.2.5. Dos perspectivas de modelos de Ministerio Público, según el grado de autonomía existente: el “más” y el “menos” autonomista.....	175

2.2.5.1. El Ministerio Público en el modelo más autonomista: trazos demarcadores e implicaciones en la persecución de la corrupción política.....	175
2.2.5.2. Una concepción <i>menos autonomista</i> del Ministerio Público. Cuestión de forma: la vinculación a uno de los poderes del Estado. Cuestión de fondo: su posición en la cadena de ejecución de una política criminal democráticamente formulada .....	181
2.2.5.3. Política criminal, dependencia del Ministerio Público del Gobierno y prioridad de los derechos fundamentales: el debate .....	184
2.2.6. El nombramiento del Jefe de la institución: síntomas y reflejos del modelo de autonomía adoptado. Rendición de cuentas, transparencia y motivación.....	190
2.2.7. Cese del puesto de Jefe del Ministerio Público y modelos de autonomía. La previsión de mandato y la reelección o reconducción. Desincentivos internos al control del <i>agente</i> (Ministerio Público) por el <i>principal</i> (poder político) .....	197
2.2.8. Consideraciones adicionales: reflejos de la autonomía y formas de designación y cese del Jefe sobre la independencia de los fiscales. Legitimidad del modelo institucional más autónomico .	202
2.3. La independencia del fiscal en el marco del diseño institucional del Ministerio Público anticorrupción. Distinción de la autonomía. Algunas puntualizaciones a las críticas contra la independencia del fiscal .....	204
2.3.1. Modelos de relación entre los escalones superior e inferior del Ministerio Público y la (in)dependencia de los fiscales en el proceso: dos dimensiones en comunicación .....	211
2.3.1.1. El modelo de fiscal más independiente: características y algunas observaciones críticas .....	211
2.3.1.2. El modelo de independencia más afín al principio jerárquico: notas típicas y reflexiones críticas .....	218
<b>3. Garantías del Ministerio Público e interferencia de factores externos de influencia .....</b>	<b>223</b>
3.1. Consideraciones preliminares.....	223
3.2. La política como un factor externo de influencia: el uso del Estado de Derecho como arma política a través del Ministerio Público .....	230

3.2.1. Una distinción necesaria: políticos criminales y criminalizar la política.....	234
3.2.2. El sometimiento político del Ministerio Público: sustracción de la Justicia de los asuntos incómodos al poder, control y tergiversación de la verdad procesal.....	241
3.3. La influencia de los medios en la actividad persecutoria.....	245
3.3.1. Introducción: formación multilateral de la agenda de información y de debate en la arena pública y la indiscutible supremacía de las libertades.....	245
3.3.2. Corrupción política: asunto complejo de interés público y límites del proceso judicial como lenguaje de comunicación.....	249
3.3.3. Los juicios paralelos mediáticos y los juicios oficiales: independencia e injerencia en la actividad de persecución penal del Ministerio Público.....	254
3.3.4. El Ministerio Público y las dinámicas de información y comunicación de la actualidad: una primera aproximación con una postura institucional adecuada.....	265
3.3.5. Ministerio Público, combate a la corrupción política y relación con los medios: aspectos positivos. Una segunda aproximación acerca de una postura dirigida a la prevención de daños.....	268
3.3.6. Corrupción política y libertad de comunicación en el contexto de los asuntos políticos: contornos y límites.....	273
<b>III. MINISTERIO PÚBLICO, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y PROCESO PENAL.....</b>	<b>283</b>
<b>1. Sistema institucional no elegido: entre sumisión y embate con la política.....</b>	<b>283</b>
<b>2. El proceso como monopolio estatal para aplicación de penas.....</b>	<b>292</b>
2.1. Elementos de tensión en la configuración del proceso sancionador. Proceso penal, Constitución y Estado.....	292
2.2. Matices históricos del proceso: concepciones alrededor del rol del juez en el proceso.....	298
2.2.1. El proceso civil entre <i>garantía</i> y <i>publicismo</i> .....	299
2.2.1.1. Proceso civil garantista y publicista: ambigüedades y disfunciones.....	303

2.3. El proceso penal y sus idiosincrasias conceptuales: la aplicación del Derecho Penal por los tribunales. Las tipologías de un <i>no proceso</i> y de un <i>proceso verdadero</i> .....	308
3. Contradicciones del proceso penal en el mundo actual.....	317
3.1. Miedo, enemigo, incertidumbre y eficiencia económica.....	317
3.2. El contrabalanceo de la cultura de los derechos humanos .....	323
3.3. Proceso penal y prejuicios semánticos: las garantías y sus “dos caras” .....	326
<b>4. Proceso penal e interés público indisponible: la caída de viejas máximas y la emergencia de la voluntad como factor relevante .....</b>	<b>327</b>
4.1. Breve introducción: el cambio en la concepción de indisponibilidad del interés público. Un evento más allá del proceso penal .....	327
4.2. Proceso penal y consenso: de la antigua dicotomía obligatoriedad/opportunidad hacia la sofisticación de la intervención de la voluntad en los institutos procesales .....	335
4.3. La migración de la obligatoriedad hacia la oportunidad de la acción penal: matices de ese recorrido y sobre la realidad.....	341
4.4. Ciclo de integración de la responsabilidad penal y de nuevos papeles <i>del y en el</i> proceso penal. Incidencia en la persecución de la corrupción política.....	347
4.4.1. Teoría de la pena y del delito en un Estado de libertades de PAWLIK: aplicación a ese nuevo proceso penal .....	353
4.4.2. Puesta en jaque del totalismo jurisdiccional y redistribución de responsabilidades procesales entre sujetos privados y públicos. Algunos ejemplos de la relevancia de la voluntad en el proceso penal.....	357
<b>5. Proceso penal contemporáneo y corrupción política .....</b>	<b>364</b>
5.1. Introito .....	364
5.2. Responsabilidades del proceso penal actual .....	367
5.2.1. Garantía <i>versus</i> eficacia: un falso antagonismo .....	367
5.2.2. Delitos causantes de daños de larga escala ( <i>social harms</i> ) y el desafío de combatir la corrupción política.....	370
5.3. Corrupción política, proceso penal y separación de responsabilidades: política y jurídica .....	377
5.3.1. Un choque práctico: las “governabilidades diversas” que juegan en la “arena política de la calle” .....	377

5.3.2. Corrupción política: encuentros y desencuentros en la tarea de responder jurídica y políticamente al fenómeno .....	381
5.3.3. Responsabilidad jurídica versus responsabilidad política: riesgos y consecuencias del obviar la distinción.....	383
5.3.4. Preservar los marcos distintivos de las responsabilidades política y jurídica: una tarea que interesa al Ministerio Público.....	387
5.3.5. ¿Qué es responsabilidad? La elección necesaria de un parámetro de comprensión del término para situarlo en su aspecto político o jurídico.....	388
5.3.6. La responsabilidad política: definición y características distintivas .....	390
5.3.7. La responsabilidad penal y sus notas conceptuales y distintivas .....	392
5.3.8. Proceso penal y límites frente a los principios de la desconfianza y de presunción de inocencia .....	395
5.3.9. Por un combate a la corrupción política integral y adecuado. Proceso penal, responsabilidad política y Ministerio Público. Precauciones ante los “juicios políticos” .....	401
6. Proceso penal y corrupción política: posibilidades concretas de un buen combate .....	408
6.1. Derecho Penal y proceso penal: un descompás indeseable, pero ajustable .....	408
6.2. Posibilidades del proceso penal frente a la corrupción política: el paradigma de la Operación Lava Jato en Brasil.....	411
7. Proceso civil y lucha contra la corrupción: posibles interfaces con el proceso penal y provechos mutuos .....	423
<b>IV. COMBATE A LA CORRUPCIÓN POLÍTICA Y COOPERACIÓN PROCESAL PENAL .....</b>	<b>431</b>
<b>1. Combate a la corrupción política y la cooperación procesal penal mediante la justicia negociada: un antídoto eficaz a las preferencias de endurecimiento penal sustantivo .....</b>	<b>431</b>
<b>2. Cooperación procesal penal mediante el consenso penal y el rol del Ministerio Público: una agenda en crecimiento .....</b>	<b>434</b>
2.1. El consenso penal y <i>the american dream</i> : ideas esenciales sobre un modelo influyente y algunos aspectos críticos de esta forma cooperación procesal penal.....	434

2.2. La justicia penal negociada como un camino cooperativo sin regreso.....	446
2.2.1. Los <i>non-prosecution agreements</i> (NPA) y los <i>deferred prosecution agreements</i> (DFA): notas conceptuales y distinciones con el <i>plea bargaining</i> . El carácter cooperativo como determinante de la opción por el acuerdo .....	446
2.2.2. Justicia negociada entre obligatoriedad y oportunidad de la acción penal: superando el conservadurismo dogmático y las teorías no funcionales .....	450
2.3. El Ministerio Público en la justicia penal negociada: ¿Más libertad o más responsabilidad? .....	454
2.3.1. Se abre un paréntesis: el ejemplo del CPS .....	455
2.3.2. Se cierra el paréntesis: reflexionándose sobre la relación justicia penal negociada versus responsabilidades del Ministerio Público.....	457
2.4. Justicia no solo negociada, sino también cooperativa.....	460
2.4.1. Colaboración procesal penal mediante el consenso penal: ámbito normativo internacional y los roles del Ministerio Público y del juez en el marco de un proceso penal garante .....	464
2.5. Colaboración, consenso penal y combate a la corrupción política en el marco del proceso penal: dificultades y ventajas .....	472
2.5.1. Las hipótesis de conflicto, quasi-conflicto y no conflicto penal .....	480
2.5.2. Consenso penal, congestión de procesos y previsibilidad jurídica.....	481
2.6. El consenso penal en los distintos sistemas jurídicos: una muestra de las facultades del Ministerio Público en el <i>common law</i> y su contraste con el modelo continental europeo.....	483
2.6.1. Consenso penal en el <i>common law</i> : notas a partir del CPS.....	483
2.6.2. Consenso penal en el <i>civil law</i> : notas sobre el modelo francés.	486
2.6.3. La asunción cultural de mecanismos cooperativos en el marco del consenso penal: un adelanto de la realidad a la normativa .....	489
2.6.4. Consenso penal y Iberoamérica: entrada por la oportunidad de la acción penal y glocalización.....	492
2.7. Evolución y ascenso cualitativo del consenso penal. Efectos cooperativos en el combate a la corrupción: algunas notas sobre Europa y América Latina .....	495



2.7.1. Cooperación y consenso penal en el paradigma de la <i>Operación “Lava Jato”</i> .....	505
2.8. Cooperación procesal y justicia penal negociada desde un marco institucional transnacional y revolucionario: el Ministerio Público Europeo.....	511
<b>3. Cooperación procesal penal individual protegida: el <i>whistleblowing</i> y la denuncia anónima</b> .....	524
3.1. Cooperación individual “externa” al proceso penal: fundamentos y utilidad .....	524
3.2. Deshaciendo confusiones: breves apuntes sobre distinciones terminológicas necesarias .....	529
3.3. <i>Whistleblowing</i> y denuncia anónima: dimensión material, normativa internacional y responsabilidad individual para el combate a la corrupción .....	530
3.4. <i>Whistleblowing</i> : mecanismo de fomento a la cooperación individual donde la corrupción sucede. Características, experiencia y normativa internacionales .....	532
3.5. Denuncia anónima y corrupción en el marco participativo democrático y cooperativo procesal penal.....	545
<b>4. Cooperación interna e internacional en red: integración del Ministerio Público como una exigencia metodológica para afrontar la corrupción política</b> .....	554
4.1. Cooperación en red: el difícil problema de la definición del tamaño y competencias de las agencias de control del poder.....	557
4.2. Problemas y ventajas en la cooperación en red interna .....	562
4.2.1. Vacíos normativos y barreras culturales a la cooperación en red interna.....	562
4.2.2. La racionalización del trabajo, la disminución de costes y la mejora de la eficiencia preventiva .....	569
4.2.2.1. Cooperación en red interna en el ámbito público, Ministerio Público y reflejos en el proceso penal .....	303
4.3. La cooperación jurídica internacional: indispensabilidad en el mundo actual y obstáculos a superar .....	573
4.3.1. Buenas prácticas en cooperación internacional: la orden de detención europea, los procedimientos de entrega entre Estados miembros y la Orden Europea de Investigación en materia penal .....	583

CONCLUSIONES.....	589
BIBLIOGRAFÍA .....	599
<i>ANEXO para la obtención del título de Doctor con “Mención Internacional”</i> .....	657

## ABREVIATURAS

ADIN	Ação Declaratória de Inconstitucionalidade
ADR	Alternative Dispute Resolution
Art.	Artículo
C.E.	Constitución Española
Cap.	Capítulo
CEDH	Convenio Europeo de Derechos Humanos
CJIP	Convención Judicial de Interés Público
coord.	coordinador
coords.	coordinadores
CPP	Código Procesal Penal Italiano
CPS	Crown Prosecution Service
CRPC	Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité
DPA	Deferred Prosecution Agreements
ed.	editor
eds.	editores
EEUU	Estados Unidos de América
GRECO	Grupo de Estados Contra la Corrupción del Consejo de Europa
HC	Habeas Corpus
LECRIM	Ley de Enjuiciamiento Criminal
n.	Número
NPA	Non-Prosecution Agreements
npp	Nota pie de página
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OEA	Organización de Estados Americanos
OEI	Orden Europea de Investigación en materia penal
op. cit.	obra citada
org.	organizador
orgs.	organizadores
pp.	páginas
ss.	siguientes

STC	Sentencia del Tribunal Constitucional de España
STF	Supremo Tribunal Federal de Brasil
TEDH	Tribunal Europeo de Derechos Humanos
UE	Unión Europea

## INTRODUCCIÓN

En 1988, entró en vigor la “Constitución ciudadana”<sup>1</sup> de Brasil. Nuevas instituciones fueron creadas y muchas de las antiguas renovadas. A partir de ese momento, se impuso a las Administraciones Públicas el objetivo de guiarse por los principios constitucionales de legalidad, publicidad, impersonalidad, moralidad, eficiencia<sup>2</sup>, motivación<sup>3</sup> y probidad<sup>4</sup>. Además de ello, resurgió el Ministerio Público con garantías que lo protegen de las influencias del poder político, el Poder Judicial se fortaleció y los Tribunales de Cuentas adquirieron competencias antes inexistentes.

Fue en este contexto en el que se inició hace más de veinte años nuestra trayectoria profesional en el Ministerio Público del Estado brasileño de Bahía. Desde el principio, fue evidente el contraste entre las *promesas constitucionales* y la *realidad*, escenario que fue posible experimentar tanto en los pequeños pueblos del interior como en las grandes ciudades, donde las prácticas nepotistas, amiguistas, clientelistas y corruptas en general estaban normalizadas. Los gobernantes seguían sistemas normativos no coincidentes con la Constitución para servir a intereses distintos del bien público. En la práctica, el Poder Judicial estatal dependía del apoyo administrativo de la alcaldía local, sufría con la congestión de procesos y la insuficiente formación de su personal para tratar de los complicados casos de corrupción. Esa realidad nos motivó la búsqueda de claridad sobre el fenómeno de la corrupción, sus causas, dinámicas y consecuencias.

La inicial enseñanza académica basada en la lógica “buenos *versus* malos” y circunscrita al Derecho Penal, no fue suficiente para colmar las lagunas respecto al tema. El “Máster Universitario en Corrupción y Estado de Derecho”

---

<sup>1</sup> Expresión acuñada por el entonces presidente de la Asamblea Constituyente, Diputado Federal Ulisses Guimarães.

<sup>2</sup> Art. 37, *caput*.

<sup>3</sup> Art. 93, X.

<sup>4</sup> Sometiendo, incluso, al Presidente de la República a un escrutinio por crimen de responsabilidad cuando viola tal principio (art. 85.V).

de la Universidad de Salamanca, en el seno del “Programa Oficial de Posgrado en Estado de Derecho y Buen Gobierno”, nos proporcionó la oportunidad de estudiar la corrupción como un fenómeno universal, globalizado, multidisciplinar y en búsqueda continua de perfeccionamiento de soluciones.

Un producto de ese Programa fue el Trabajo de Fin de Máster intitolado “El Ministerio Público en el combate a la corrupción política: entre deficiencias, incomprensiones, límites y posibilidades”, donde fue desarrollada una investigación que siguió un abordaje multidisciplinar del tema corrupción —en particular de la corrupción política— y del papel del Ministerio Público en sus variantes conformaciones, como responsable de la persecución penal de esa clase de ilícito. Así, fue posible analizar esos temas desde la Ciencia Política, la Economía, las diversas ramas del Derecho y la Filosofía, entre otros campos del conocimiento.

Ese trabajo nos llevó a otras observaciones. Quedó claro que, así como en Brasil y América Latina<sup>5</sup>, en Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, España y Estados Unidos de América (EEUU), países más desarrollados, existe la preocupación con este tema, que afecta la confianza en la democracia y en las instituciones en general<sup>6</sup>. De la misma manera, se constató que es universal la dificultad de concretar la legalidad penal con relación a los sujetos públicos y privados poderosos, aspecto dependiente, en alguna medida, de la configuración adoptada para el Ministerio Público de cada país. Por fin, se percibieron las transformaciones profundas que viene experimentando el proceso penal, lo cual despertó interés en la evolución de los instrumentos de cooperación interna e internacional y sus posibilidades para el combate a la corrupción política.

---

<sup>5</sup> Así nos demuestra el “*Latinobarómetro: informe 2017*”, publicado en octubre de 2017 y disponible en <http://www.latinobarometro.org/LATDocs/F00006433-InfLatinobarometro2017.pdf>.

<sup>6</sup> En cuanto a Europa, consúltense, por ejemplo, los datos recogidos en el “*Eurobarómetro: fichas informativas nacionales sobre actitudes ante la corrupción*”, publicado en 20.02.2018 y disponible en [https://ec.europa.eu/home-affairs/news/eurobarometer-country-factsheets-attitudes-corruption\\_en](https://ec.europa.eu/home-affairs/news/eurobarometer-country-factsheets-attitudes-corruption_en). Respecto a Estados Unidos, véanse los datos presentes en la encuesta “*US Corruption Barometer 2017*”, de Transparencia Internacional, publicada en 12.12.2017 y disponible en [https://www.transparency.org/news/pressrelease/nearly\\_six\\_in\\_ten\\_americans\\_believe\\_the\\_us\\_became\\_more\\_corrupt\\_in\\_2017](https://www.transparency.org/news/pressrelease/nearly_six_in_ten_americans_believe_the_us_became_more_corrupt_in_2017).

Esta Tesis Doctoral constituye un paso hacia adelante en el desafío de profundizar la investigación sobre los temas mencionados anteriormente. No se pretende ofrecer soluciones absolutas para todos los problemas apuntados en este trabajo. Ni se aspira trabar una lucha quijotesca contra molinos de viento o encaminarse hacia el peligroso terreno de las *cruzadas morales* o del *buenismo*<sup>7</sup> en contra de la corrupción política.

Esta tesis tiene como foco el Estado constitucional democrático de Derecho como principal *víctima* de la corrupción política. Examinando elementos de ese Estado ha sido posible encaminar conjuntamente reflexiones teóricas y prácticas sobre los dos principales ejes de la investigación: el Ministerio Público y el proceso penal, así como las implicaciones de ambos en el combate a la corrupción política.

Los objetivos trazados han sido dos. Por un lado, plantear el diseño institucional de un modelo de Ministerio Público que se considere capaz de hacer frente a la corrupción de los sujetos políticos. Por otro lado, encontrar elementos para sostener el carácter imprescindible de un proceso penal cooperativo, donde la *voluntad* ejerce un papel fundamental en la decisión de los rumbos concretos del proceso.

Para cumplir estos objetivos de la investigación doctoral, hemos estudiado con mayor profundidad la literatura europea y americana; asimismo, hemos examinado algunas ideas y prácticas existentes en otros continentes. También ha sido realizada una revisión narrativa, a través de medios físicos y virtuales, consultando fuentes bibliográficas varias como monografías, libros, artículos de revistas, artículos de periódicos y encuestas de organismos internacionales públicos y privados. El encuentro con parte de las fuentes señaladas se dio en la Universidad de Salamanca y en la *Facoltà di Giurisprudenza di Trento* durante una estancia de investigación bajo la tutoría del profesor Roberto Toniatti.

Como marco conceptual inicial para la investigación, fue elegido un concepto de corrupción que, aun cuando hincado en claros elementos centrales, es dotado de la flexibilidad necesaria para adaptarse a las influencias sociales, históricas, culturales y normativas que inevitablemente lo condicionan. En coherencia con esa perspectiva, se asumió un marco definitorio de corrupción política que tiene en cuenta la doble responsabilidad, jurídica y política,

---

<sup>7</sup> BUSTOS GISBERT (2010: 69).

que puede incidir sobre los gobernantes corruptos y las repercusiones de las prácticas políticas corruptas sobre la democracia.

A continuación, consideramos relevante comprender, en líneas generales, el proceso que llevó a la construcción de instituciones y medidas de control del poder y cómo estas se han desarrollado. Ese recorrido, por un lado, proporciona un marco teórico para entender el estado del arte en materia de control de los gobernantes. Por otro lado, despeja zonas grises acerca de la ejecución de las triples funciones estatales y de la insuficiencia de ese esquema tripartido para contestar las demandas actuales.

De la ruta referida se llega al examen del Ministerio Público como un actor central en la contención de los abusos de poder representados por la corrupción política. A partir del estudio del origen de esta institución, se ingresa en la investigación de las distintas garantías que pueden asegurar su autonomía y la independencia de sus miembros. Unas garantías que son puestas en debate cuando se contrastan las relaciones del Ministerio Público con el poder político y la libertad de prensa.

Posteriormente, habrá que poner como objeto de verificación el aspecto procesal del combate a la corrupción. En principio, un examen más teórico, donde se traen indagaciones e intentos de respuesta a los cambios habidos en el proceso penal a lo largo de los dos últimos siglos. Un análisis de los influjos de la noción de interés público y del conexo papel de los jueces en el proceso penal adquiere relevancia para comprender las alternativas al proceso penal tradicional enmarcadas por una mayor disponibilidad de la acción penal, la ampliación de la discrecionalidad del Ministerio Público y la mayor cooperación entre distintos actores procesales incorporados como instrumentos de búsqueda de mejores resultados concretos. El proceso es evaluado según la óptica de Pawlik<sup>8</sup> sobre el deber de cooperación en la teoría de la pena y del delito en un Estado de libertades. Además, se tendrá que contextualizar el rol del proceso penal en supuestos que caracterizan la responsabilidad política.

Sobre el tema antes mencionado, se elabora sobre la posición del Ministerio Público en cuestiones claves respecto a la corrupción política. También se realizará el análisis del comportamiento adecuado de esa institución en los casos en que la responsabilidad jurídica no excluye la política y de las precauciones necesarias para la preservación de su legítimo papel institucional.

---

<sup>8</sup> PAWLIK (2016).



Ahora con foco en aspectos prácticos, deberemos interrogar acerca de las aptitudes del proceso penal frente a la corrupción política. En esa línea de razonamiento, se indagará respecto del compromiso de armonía que debe haber entre Derecho Penal y proceso penal. A modo de ilustración, serán colocados ejemplos concretos de la aplicación de un proceso penal más cooperativo producidos en el marco de la *Operación Lava Jato*, el conocido asunto de corrupción que tiene lugar en Brasil y que ha derivado en numerosas investigaciones y juicios en varios países americanos y de otros continentes. Igualmente, se reflexionará sobre la necesidad de utilizar el proceso civil como un posible mecanismo capaz de generar impactos positivos en la lucha contra la corrupción política.

Dando énfasis al aspecto de la cooperación en el proceso penal, invocaremos razones teóricas y prácticas con relación a formas específicas de colaboración, importantes, en particular, para la persecución penal de la corrupción política. Serán consideradas hipótesis de cooperación desde diversos puntos de vista y ejecutadas por diversos actores procesales, con la producción de diferentes consecuencias en el proceso penal. La tensión entre eficacia y garantías procesales será puesta en discusión. Esos instrumentos son también debatidos teniendo en cuenta las diferencias entre los ordenamientos del *common law* y del *civil law*.

Finalmente, hay que mencionar que la hipótesis de este trabajo va a tener una línea crítica, pero también propositiva, ratificando modelos normativos ya existentes e indicando alternativas posibles para la consecución de las aspiraciones del Ministerio Público y del proceso penal. Es por el empeño a lo largo de años de profesión y el esfuerzo empleado en esta investigación que se espera, con esta tesis, contribuir para el debate y la consolidación de mecanismos institucionales más adecuados para la protección del Estado democrático de Derecho ante los daños causados por la corrupción política.

## CONCLUSIONES

**PRIMERA.** Disponer de un concepto jurídico de corrupción política es esencial para poder delimitar el ámbito de incidencia de la normatividad: sirve de parámetro para la puesta en marcha de la persecución penal a través de Ministerio Público, así como para la operatividad de las garantías procesales en el marco de realización de la responsabilidad jurídica de los sujetos políticos. Sin embargo, es innegable reconocer la limitación de todo concepto de corrupción, debido a que el mismo da cobijo a determinadas situaciones y a la vez excluye otras, cuyo contenido ético es más que dudoso. La política conforma el Derecho y la exclusión de las normas jurídicas de ciertas conductas apartadas de paradigmas éticos exigibles a los políticos revela una contradicción de difícil solución.

Por otra parte, el hecho de que el concepto de corrupción política sea de aquellos susceptibles de recibir fuertes influencias de sistemas normativos no jurídicos, posibilita su adecuación a las nuevas realidades. La asunción de esa adecuación por el Derecho depende de la disposición de los sujetos políticos y de los incentivos —muy inciertos— para que ello suceda, tanto en un sentido positivo (que abarque prácticas impropias en el campo de los ilícitos) como negativo (que relaje aún más el control jurídico sobre el poder político). Esos contextos excluidos no siempre se insertan en ámbitos de amplia discrecionalidad de los sujetos públicos y configuran evidentes conflictos de interés, privilegios y poderes abusivos forjados bajo una discutible legalidad. La fijación de una verdadera responsabilidad política es un aliado importante para suplantar las limitaciones resultantes de un concepto jurídico de corrupción política.

**SEGUNDA.** El concepto de corrupción en general y el de corrupción política en particular, tiene en el sustrato económico un elemento central. Aún cuando el beneficio obtenido por el corrupto —o por el corruptor— no tenga inmediata dimensión financiera y económica, mediatamente los efectos del acto de corrupción se realizan con esa perspectiva de obtener una utilidad.

De otra parte, si no se cumple la condición anterior, de todos modos, el aspecto económico informa la lógica transaccional bajo la cual ese concepto es determinado. Ese condicionante, por consiguiente, confina las posibilidades de que la lucha contra la corrupción política alcance las verdaderas raíces del problema. Respetada esa limitación, cuya superación depende de un cambio profundo en las sociedades, el combate a esa corrupción en el modo en que está configurado su concepto requiere que el foco de atención del Derecho y de las agencias de control del poder sea dirigido no solo hacia los sujetos políticos, sino que también hacia las conductas de los sujetos privados.

**TERCERA.** El Estado democrático de Derecho es la mayor víctima de la corrupción política. Esta máxima, por sí misma considerada, legitima el esfuerzo social amplio en el sentido de su prevención y represión. Las dimensiones formal y sustancial del Estado democrático de Derecho se erosionan profundamente cuando este fenómeno impera en una sociedad. La receptibilidad de las demandas sociales por los sujetos políticos se debilita y, en cambio, se refuerza hacia el cumplimiento de los acuerdos con los corruptores. En términos prácticos, sucede la sustracción de derechos de los ciudadanos. La formación de una identidad en la ciudadanía respecto de su condición de víctima de la corrupción puede generar movimientos colectivos de indignación y movilización, impulsores de cambios políticos y jurídicos. El empeño ciudadano es indispensable para que el Derecho otorgue reconocimiento a los nuevos postulados políticos de responsabilidad de los sujetos políticos. Esa certeza que el Derecho brinda es importante, habida cuenta de la dificultad de mantenerse una permanente movilización de las personas como medio de control y vigilancia del poder. De ahí el rol de una ciudadanía educada, informada y activa.

**CUARTA.** El alcance del concepto de corrupción política no puede ser expandido con el objetivo de suplir los vacíos de la ejecución de la responsabilidad política. La expansión del Derecho Penal en ese supuesto sería aniquiladora de la esfera política y de su capacidad de conformar decisiones discrecionales. El camino más adecuado para el cambio del comportamiento de los sujetos políticos puede devenir de reformas en la regulación de los partidos políticos y en la normativa del sistema político en general que permita la presencia más acentuada de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones y de fiscalización de los negocios públicos. Un sistema de múltiples

incentivos debe ser elaborado con tal finalidad. El refuerzo de instrumentos individuales y, en particular, colectivos de exigencia de receptibilidad de las demandas ciudadanas por los políticos debe ser incrementado. De esta manera, se echa mano de alternativas a la mera responsabilidad de los sujetos políticos, que debe quedar reservada para las situaciones dotadas de mayor gravedad, aumentando, por consiguiente, la calidad de la democracia.

**QUINTA.** El control del poder político no puede quedar exclusivamente en manos del cuerpo electoral. La legitimidad de éste para el escrutinio de los gobernantes es incuestionable, debiendo mantenerse permanentemente vigilante con relación al proceder de los sujetos políticos y ejercitar la legítima desconfianza respecto de sus representantes. Empero, la existencia de un aparato institucional estatal eficiente para contrastar la corrupción política es indispensable y se legitima democráticamente. Existen varias restricciones para la actuación de control vertical del poder por el cuerpo electoral. Es por esto que instituciones expertas y profesionales que cooperan entre sí son fundamentales como complemento indispensable del proceso de fiscalización y responsabilidad de los sujetos políticos.

**SEXTA.** Hacer frente a la corrupción política es una tarea ardua, susceptible de múltiples barreras y represalias a quien se atreve a llevarla a cabo. Cuando resulta infringida la legalidad penal, deben existir en el ordenamiento jurídico y en el cuadro institucional de un Estado mecanismos aptos para responder adecuadamente a esa vulneración. El Ministerio Público, en cuanto institución de persecución de ilícitos penales de corrupción, debe ser dotado de garantías idóneas para protegerse de influencias gubernamentales, de la captura partidista y de represalias derivadas de los inconformismos con su actuación. Tales garantías deben ser regidas normativamente a partir de la Constitución y extenderse desde el proceso de selección de sus miembros hasta la seguridad de la autónoma administración y el dominio de la gestión financiera. No deben ser olvidados regímenes protectores de la institución con relación a los procesos de nombramiento y cese del Fiscal General y al mecanismo de relación interna entre los fiscales y los escalones superiores. El principio de jerarquía debe ser instituido básicamente en cuestiones administrativas que no tengan implicaciones directas o indirectas con el ejercicio de las actividades típicas de fondo de los fiscales. La actuación

procesal, en consecuencia, no puede ser dejada al sabor de maniobras administrativas para alejar al fiscal de un determinado asunto. El control directo de la jefatura ejercitado mediante instrumentos excepcionales como la avocación debe ser limitado a situaciones extremas y motivadas y no como una potestad discrecional e injustificada.

**SÉPTIMA.** La autonomía del Ministerio Público y la independencia de los fiscales no son incompatibles con el principio de la legitimidad democrática. Es perfectamente viable la rendición de cuentas política y jurídica de la jefatura institucional y de los fiscales individualmente considerados. El control por el poder político de las potestades de cambio de las normativas, de nombramiento de magistrados de las altas cortes y de determinación de la política criminal son algunos de los muchos ejemplos de contraste a un tendencial ejercicio de poder arbitrario por el Ministerio Público. El discurso de la ilegitimidad democrática suena más bien como pretexto para asegurar la impunidad de quienes se involucran en supuestos de corrupción política y rechazan cualquier forma de responsabilidad. Democracia y responsabilidad no son excluyentes, todo el contrario. El poder elegido, deshonesto e irresponsable, se deshace de su legitimación democrática.

**OCTAVA.** Los juicios de corrupción, por su alto nivel de interés público, despiertan en el medio político y de las comunicaciones intenciones divergentes de la mera fiscalización de los procedimientos jurisdiccionales y de la publicidad. El Ministerio Público, por ello, debe mantenerse estrictamente dentro de los límites de la información imparcial y desinteresada al lidiar con tales juicios. Debe rechazar cualquier intento de utilizarse como instrumento de propósitos políticos y de estímulo a la mercantilización del proceso penal como noticia. Detrás de los juicios, siempre habrá un sujeto de derechos y todo su entorno. Una postura equidistante de la cuestión política confiere credibilidad a la institución y genera la confianza en la ciudadanía en el sentido de que el Ministerio Público actúa con imparcialidad y dirigido exclusivamente a la realización del interés público. La autonomía institucional y la independencia de los fiscales, igualmente, cumple una función en ese sentido, al igual que la adopción de políticas específicas de formación de su personal y de comunicación.

**NOVENA.** La conformación del concepto de interés público y, por consiguiente, de las formas de resolver los conflictos relacionados con él vienen pasando por serias transformaciones. Actualmente, es posible, siguiendo criterios normativos preestablecidos, hacer uso de esquemas que permiten la negociación, la transacción, el arbitraje y otras formas similares de intervención de la voluntad de los sujetos interesados en la construcción de soluciones, como forma de resolver casos de conflictos que involucran el interés público. La eventual exclusión o reducción del papel de las entidades públicas y del Poder Judicial como medios de canalización de los procesos de solución referidos no significa *tout court* la consumación de perjuicios, potenciales o concretos, al interés público.

**DÉCIMA.** El cambio referido anteriormente ha influido en el rol que los jueces y fiscales desarrollan en el proceso penal. Ello no entraña necesariamente la violación de garantías procesales. El Ministerio Público contemporáneo ostenta la imparcialidad como uno de sus principios orientadores. Una imparcialidad que no se confunde con la de la actividad jurisdiccional, la que se acciona en otro momento, con otras condiciones y elementos reunidos y con finalidad propia. La actividad de persecución penal se despliega en el sentido de encontrar elementos objetivos y racionalmente justificables, según los criterios previstos en la normativa, que demuestren la comisión de un ilícito. La propia valoración de los hechos perseguibles no es libre, circunscribiéndose a los parámetros legales, doctrinales y de la jurisprudencia de los tribunales. El presupuesto de sus iniciativas no es la defensa del un interés propio, sino que del interés público: la aplicación de la legalidad penal a través de una buena prestación de justicia. La institución custodia los valores del Estado democrático de Derecho que inciden en toda la actividad de persecución penal. Esa intrínseca naturaleza de sus actividad y deberes retira parte del riesgo de que se desempeñe arbitrariamente.

**UNDÉCIMA.** El deber de imparcialidad del Ministerio Público en nuestros días debe incluir la obligación de audiencia de la parte investigada, sobre la cual puede incidir el *ius puniendi*. Ello contiene la obligación de tener en cuenta pruebas en contra de la versión que legitimó al principio la iniciativa persecutoria. Esa obligación debe respetar las circunstancias fácticas y temporales que condicionan la realización de las pruebas, a fin de que no se procrastine indebidamente y por mala fe, la actividad de persecución y no se

pierdan los elementos probatorios susceptibles de desaparición. La normativa debe regular esa obligación, reservando, cuando fuere el caso, para la instrucción oral en juicio el ejercicio de tal derecho por la defensa.

**DUODÉCIMA.** El hecho de que el proceso penal puede contemplar alguna forma de cooperación, negociación o colaboración entre los sujetos procesales que pueda representar la abreviación o resolución del asunto no significa que el Ministerio Público tiene que buscar irreflexivamente la condena o la peor condición jurídica para el investigado. La presunción de que estos sujetos procesales de antemano entrarán desprotegidos en el proceso penal se desmiente por la asistencia técnica jurídica obligatoria de que disfrutan y por los deberes señalados al Ministerio Público. Contrariamente, la presunción más intuitiva es la de que las partes son las que mejor conocen sus condiciones jurídicas actuales y tienen la capacidad de proyectar los posibles escenarios futuros con respecto a sus derechos. La seguridad de que errores o abusos no van a sacrificar los valores superiores del ordenamiento jurídico debe devenir de la previsión normativa de pautas para el ejercicio de esas formas de intromisión de la voluntad en el proceso penal y de mecanismos de revisión preventivos o correctivos, el principal de ellos la propia jurisdicción.

**DÉCIMO TERCERA.** La cooperación en el proceso penal es un camino consolidado. La jurisdicción penal moderna debe contar con unos mecanismos de colaboración que contribuyen para la aplicación de la mejor justicia. La sociedad compleja en que vivimos requiere de la participación de todos, en todos los dominios de la gobernabilidad social —incluida la esfera de la Administración de Justicia— cuando se trate de resolver cuestiones enmarañadas y de trascendente interés público como es la corrupción política. Con relación a ésta, esa perspectiva de la cooperación procesal es muy pertinente. La investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción política es asunto de indudable interés colectivo. La aclaración de los hechos de esa naturaleza concierne a toda la ciudadanía, así como los resultados de la persecución, de manera que la cooperación en el proceso penal no debe excluir los mecanismos que acojan la colaboración de terceros para que se realice el principio de justicia.

**DÉCIMO CUARTA.** El Estado de Derecho no debe ser visto como una esfera apartada de la sociedad, un conjunto de principios e instituciones que se justifican solamente por su propia existencia. Él está para responder a las necesidades sociales, que a día de hoy son muy distintas de las que se presentaron en su origen. Por esa razón, la verdadera realización de ese Estado de Derecho es una tarea de todos y el Derecho debe diseñar las formas de integración de la ciudadanía en esa tarea. Ello incluye atribuir formas de integración al ciclo subjetivo de realización de la Administración de Justicia a través del proceso penal.

**DÉCIMO QUINTA.** La democracia presupone la responsabilidad jurídica y política de los gobernantes. Son esferas que se comunican sin que se yuxtapongan. Puede haber coincidencia de oportunidad en la incidencia de ambas. Sin embargo, la responsabilidad jurídica, delimitada por el derecho, es más restricta que la política. El desfase en la ejecución de la responsabilidad política no puede llevar a la indebida flexibilización de la responsabilidad jurídica. El ámbito de la política se gobierna por principios, tiempos, mecanismos, dinámicas y objetivos muy propios. Por más corruptas y perennes que sean las prácticas de gobierno en una concreta sociedad, no será la responsabilidad jurídica la que vaya a sanar esos problemas. Esa clase de respuesta no está conformada para reemplazar la acción política. Los resultados de ese intento pueden ser, entre otros, la flexibilización de los contornos del Derecho Penal y de las garantías provenientes del Derecho Procesal penal y, al fin y al cabo, el incremento de la desconfianza y desafección hacia las instituciones y de la frustración social.

**DÉCIMO SEXTA.** Los diversos sistemas jurídicos no son impermeables a influencias externas. Los institutos del Derecho europeo continental y del Derecho anglosajón son susceptibles de tener interacciones recíprocas y asunciones de instituciones de uno hacia otro. Así, es natural la trasposición de mecanismos de índole negociada propios del *common law* para los sistemas basados en el *civil law*. Esa transposición, empero, no puede ser realizada de forma absoluta e incondicionada. Cada sistema jurídico debe buscar los límites y reservas que representen su visión acerca de la compatibilidad interna y seguridad jurídica. No suena ser adecuada tampoco la presunción de que los modelos, con sus ajustes, van a presentar los mismos resultados y



los mismos problemas. La formación de los profesionales de las ciencias jurídicas, la normativa local y el desarrollo de las prácticas en torno a los institutos señalados, según las peculiaridades de cada realidad, son dinámicas condicionantes de cómo institutos similares previstos en diferentes ordenamientos alcanzarán su punto de equilibrio óptimo de funcionamiento.

**DÉCIMO SÉPTIMA.** La previsión de una política de incentivos para los cooperantes en el proceso penal no es, de por sí, un aspecto que desfigura las garantías procesales o induce de modo insuperable al error —o abuso— en la resolución de los conflictos penales. En los casos de corrupción política, los incentivos son importantes, en particular, aquellos que representan garantías al cooperante con relación a su vida laboral o empresarial. La normativa debe prever los requisitos para la admisión de la cooperación, para la actuación de los incentivos y para la responsabilidad en caso de mala fe. Los incentivos son fundamentales para la consecución de mejores resultados por la Administración de Justicia. Esta no se mueve solamente por exigencias de eficiencia y de utilidad, pero son sí importantes los resultados prácticos traducibles en recuperación de recursos públicos y de reparación de daños colectivos causados por la corrupción política. El Derecho no puede cerrar los ojos a esa circunstancia.

**DÉCIMO OCTAVA.** La corrupción política se enmarca en un ambiente de canalización de los recursos públicos y privados involucrados en su dinámica para destinos supranacionales distintos y bajo diferentes estrategias de ocultación. Si se quiere una verdadera persecución de la corrupción política, la cooperación internacional aparece como una etapa del proceso penal indispensable. Una cooperación que debe contar con garantías de su fluidez y eficacia. La intervención de terceros intermediadores de su trámite, vinculados a los gobiernos, solamente se justifica con un carácter meramente burocrático. Cualquier apreciación de fondo de esos órganos en cuanto a los procedimientos de cooperación internacional es contraria a la independencia de la jurisdicción. Eso porque, en tales supuestos, el control de la prestación jurisdiccional penal dependiente de la cooperación internacional para su deslinde se desplaza para las manos del Poder Ejecutivo. Desde otro punto de vista, cuando los sujetos públicos son el blanco de las medidas de cooperación solicitadas, la intervención del Poder Ejecutivo puede significar la posible impunidad de esos criminales.

**DÉCIMO NOVENA.** El Estado democrático de Derecho, en cuanto una de las más importantes conquistas civilizadoras, no puede ser reducido a una cuestión penal. Así, si bien la política no puede ser criminalizada, a su vez los políticos deben ser castigados por sus excesos criminales.

**VIGÉSIMA.** Todos los diseños institucionales, arquetipos de sistemas de gobierno y ordenamientos jurídicos, son lo que son por la acción humana, para bien y para mal. Es a través del perfeccionamiento de la formación, de los valores y compromisos de ese elemento humano que los errores y abusos se volverán cada vez más una excepción.



## BIBLIOGRAFÍA

- AGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONSEJO DE EUROPA (2016): *Manual sobre el Derecho europeo relativo al acceso a la justicia*. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea [[http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra\\_uploads/fra-ecthr-2016-handbook-on-access-to-justice\\_es.pdf](http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-ecthr-2016-handbook-on-access-to-justice_es.pdf)].
- AGUIAR CORRÊA, E. P. de (2016): “Conexión Derecho Penal: la reconfiguración subjetiva, normativa y funcional de la política criminal en la sociedad red”. En: PÉREZ CEPEDA, A. I. (coord.): *Política criminal ante el reto de la delincuencia transnacional*. Valencia: Titant lo blanch [35-71].
- AGUIAR CORRÊA, E. P. de (2017): *Politica criminal transnacional na sociedade em rede*. Rio de Janeiro: Lumen Juris.
- AGUIAR, R. y MACIEL, J. F. R. (2010): *História do Direito*. São Paulo: Saraiva.
- AGUILERA MORALES, M. (2016) “Justicia penal y unión europea: un breve balance en clave de derechos (1)”, *Diario La Ley*, N.º 8883.
- ALAIN (2016): *El ciudadano contra los poderes*. Madrid: Tecnos.
- ALCÁNTARA SAÉZ, M. (2004): *¿Instituciones o máquinas ideológicas? Origen, programa y organización de los partidos latinoamericanos*. Barcelona: ICPS.
- ALCÁNTARA SAÉZ, M. (2012): *El oficio del político*. Madrid: Tecnos.
- ALEGRE, C. P. (2013): “Cooperación Jurídica Internacional”. En: GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, N. (dir.), SANZ HERMIDA, Á. M. y ORTIZ PRADILLO, J. C. (coords.): *Problemas actuales de la justicia penal: Secreto profesional, cooperación jurídica internacional, víctimas de delitos, criminalidad organizada, personas jurídicas, eficacia y licitud de la prueba, prueba y derechos fundamentales*. Madrid: Cóllex [33-80].
- ALONSO MOREDA, N. (2016): *Cooperación judicial en materia penal en la Unión Europea: la “euro-orden”, instrumento privilegiado de cooperación*. Cizur Menor, Navarra: Thomson Reuters Aranzadi.

- ALSCHULER, A. (1975): "The Defense Attorney's Role in Plea Bargaining". *Yale Law Journal*, Number 6, May 1975, 84, pp. 1179-1314.
- ALSCHULER, A. (1979): "Plea Bargaining and Its History". *Columbia Law Review*, 79, 1, pp. 1-43.
- ALT, E. (2012): "El estado de coma irreversible del Ministerio Fiscal francés". *Jueces para la democracia. Información y debate*, n. 74, julio, pp. 126-130.
- ÁLVAREZ MARTÍN, J. A. (2008): "Releyendo a Max Weber: políticos, política, ética, administración y corrupción". *El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados*, N.º 18, Sección Colaboraciones, Quincena del 30 Sep. al 14 Oct., Ref. 3045/2008, pág. 3045, tomo 2, Editorial La Ley 40037/2008.
- ALVES, J. C. (2017): "Justiça consensual e *plea bargaining*". En: SANCHES CUNHA, R., DIRCEU BARROS, F., SOUZA y R. DO Ó (edits.): *Acordo de não persecução penal. Resolução n. 181/2017 do CNMP*. Salvador: Juspodium [191-214].
- AMODIO, E. (2003): *Processo penale, diritto europeo e common law. Dal rito inquisitorio al giusto processo*. Milano: Giuffrè;
- AMODIO, E. (2004): "I due volti della giustizia negoziata nella riforma del patteggiamento". *Cassazione penale*, v. 44, f. 2, pp. 700-709.
- AMOEDO, D. (2017): "Elementos esenciales para un sistema de protección de denunciantes". *R.I.T.I.* n. 4, pp. 1-8.
- ANCELOT, L. y DORIAT-DUBAN, M. (2010): "Analyse économique du plaider coupable". *Revue économique*, vol. 61, n. 2, pp. 237-262.
- ANDRADE AZEVEDO, E. de. (1999): "Autonomia administrativa e financeira do Ministério Público". *Justitia 60 anos*, pp. 1107-1011.
- ANDRÉS IBAÑEZ, P. (1994): "La corrupción en el banquillo: jurisdicción penal y crisis del Estado de derecho". *Clave de razón práctica*, n. 40, pp. 2-11.
- ANDRÉS IBAÑEZ, P. (1995): "El poder judicial en momentos difíciles". *Claves de Razón Práctica*, n. 56, pp. 2-13.
- ANDRÉS IBAÑEZ, P. (1997) "La corrupción en el banquillo: jurisdicción penal y crisis del Estado de Derecho". En: LAPORTA, F. J., ÁLVAREZ, S. (edits.): *La corrupción política*. Madrid: Alianza, D.L. [211-234].
- ANDRÉS IBAÑEZ, P. (2005): "Por un Ministerio Público 'dentro de la lega-

- lidad””. En: MUHM, R. y CASELLI, G. C. (eds.): *Il ruolo del Pubblico Ministero. Esperienze in Europa*. Roma: Vecchiarelli [111-148].
- ANDRÉS IBÁÑEZ, P. (2015): *Tercero en discordia. Jurisdicción y juez del estado constitucional*. Madrid: Trotta.
- ANECHIARICO, F. (2017a): “What’s corrupt?”. En: ANECHIARICO, F. (edit). *Legal but corrupt: a new perspective on public ethics*. Lanham, Md: Lexington Books [1-14];
- ANECHIARICO, F. (2017b): “Conclusion: Accountability and the Reform of Legal Corruption”. En: ANECHIARICO, F. (edit). *Legal but corrupt: a new perspective on public ethics*. Lanham, Md: Lexington Books [121-140].
- ANECHIARICO, F. y JACOBS, J. B. (1996): *The pursuit of absolute integrity: how corruption control makes government ineffective*. Chicago: The University of Chicago Press.
- ANSELMO, M. (2009): “L’impero del calcestruzzo in Terra di Lavoro: le trame dell’economia criminale del clan dei casalesi”. En: GRIBAUDI, G. (a cura di): *Traffici criminali. Camorra, mafie e reti internazionali dell’illegalità*. Torino: Bollati Boringhieri [505-537].
- APONTE CARDONA, A. (2005): *Derecho Penal del enemigo o Derecho Penal del ciudadano? Günther Jakobs y las tensiones de un Derecho Penal de la enemistad*. Bogotá: Temis.
- APONTE CARDONA, A. (2009): *Guerra y Derecho Penal de enemigo: reflexión crítica sobre el eficientismo penal de enemigo*. Bogotá: Grupo Editorial Ibañez.
- ARAGONESES ALONSO, P. (1983): *Instituciones de derecho procesal penal*. Madrid: Rubi Artes Gráficas.
- ARANGUENA FANEGO, C. (2017): “Orden Europea de Investigación: próxima implementación en España del nuevo instrumento de obtención de prueba penal transfronteriza”. *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, 58, pp. 905-939.
- ARANTES, R. B. (2015): “Rendición de cuentas y pluralismo estatal en Brasil: Ministerio Público y Policía Federal”. *Desacatos*, n. 49, septiembre-diciembre, pp. 28-47.
- ARAS, V. (2016): “O réu colaborador como testemunha”. En: RESENDE SALGADO, D. de y PINHEIRO DE QUEIROZ, R.: *A prova no enfrentamento à macrocriminalidade*. Salvador: Juspodium. [211-229].

- ARAS, V. (2017): “Acordos penais no Brasil: uma análise à luz do direito comparado”. En: SANCHES CUNHA, R., DIRCEU BARROS, F. y SOUZA, R. DO Ó (edits.): *Acordo de não persecução penal. Resolução n. 181/2017 do CNMP*. Salvador: Juspodium [249-299].
- ARAÚJO CINTRA, A. C., GRINOVER, A. P. y DINAMARCO, C. R. (2010): *Teoria Geral do Processo*. São Paulo: Malheiros.
- ARAÚJO, G. R. B. de (2016): “Delação premiada, valor probatório e corrupção”. En: CUNHA FILHO, A. J. C., ARAÚJO, G. R. B. de, LIVIANU, R., PASCOLATI, JUNIOR, U. A. (coords.): *48 visões sobre a corrupção*. São Paulo: Quartier Latim [749-779].
- ARLACCHI, P. (2009): *L'inganno e la paura. Il mito del caos globale*. Milano: Il Saggiatore.
- ARMENTA DEU, T. (1995): *Principio acusatorio y derecho penal*. Barcelona: J.M. Bosch.
- ARMENTA DEU, T. (2012): *Sistemas procesales penales (La justicia penal en Europa y América)*. Madrid: Marcial Pons.
- ARMENTA DEU, T. (2015): “Debido proceso, sistemas y reforma del proceso penal”. *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, Porto Alegre, vol. 1, n. 1, pp. 121-139.
- ARMENTA DEU, T. y GASCÓN, F. (coords.) (2006): *El Derecho Procesal penal en la Unión Europea. Tendencias actuales y perspectivas de futuro*. Madrid: Colex.
- AROCA, J. M. (1997): *Principios del proceso penal. Una explicación basada en la razón*. Valencia: Tirant le Blanch.
- AROCA, J. M. (2011): “El proceso civil llamado ‘social’ como instrumento de ‘justicia’ autoritaria”. En: AROCA, J. M. (coord.): *Proceso civil e ideología. Un prefacio, una sentencia, dos cartas y quince ensayos: Moción de Valencia (2006), Declaración de Azul (2008)*. Valencia: Tirant lo Blanch [137-172].
- AROCA, J. M. (2014): *La Paradoja Procesal del Siglo XXI. Los poderes del juez penal (libertad) frente a los poderes del juez civil*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- ASHWORTH, A. (2000): “Developments in the Public Prosecutor's Office in England and Wales”. *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, vol.8/3, pp. 257–282.
- ASSOCIAÇÃO DE DELEGADOS DE POLÍCIA FEDERAL (2012): *Carta*

- do Congresso Nacional. Rio de Janeiro. [<http://s.conjur.com.br/dl/carta-rio-2012-congressonacional.pdf>].
- ASSOCIATION OF CERTIFIED FRAUD EXAMINERS (2010): “Report to the Nations on occupational fraud and abuse, [[http://www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE\\_Website/Content/documents/rtn-2010.pdf](http://www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/documents/rtn-2010.pdf)].;
- AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (2015): “Segnalazione di illeciti e tutela del dipendente pubblico: l’Italia investe nel *whistleblowing*, importante strumento di prevenzione della corruzione”. [[https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Anticorruzione/SegnalIllecitoWhistleblower/\\_presentPrimoMonitoraggioNaz](https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Anticorruzione/SegnalIllecitoWhistleblower/_presentPrimoMonitoraggioNaz)].
- AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (2017): PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2017): “Segnalazione di illeciti e tutela del dipendente pubblico: presentazione del secondo monitoraggio nazionale sull’applicazione del *whistleblowing*”. [[https://web.unicroma1.it/trasparenza/sites/default/files/WB.Rapporto.2017\\_ANAC.pdf](https://web.unicroma1.it/trasparenza/sites/default/files/WB.Rapporto.2017_ANAC.pdf)].
- AZEVEDO MARQUES NETO, F. (2010): “Entre Independência Institucional e Neopatrimonialismo: a Distorção da Doutrina do Promotor Natural”. En: ALVES RIBEIRO, C. V. (org.): *Ministério Público: reflexões sobre princípios e funções institucionais*, São Paulo: Atlas [156-163].
- AZEVEDO, N. (1946): “Dos Deveres dos Juizes, Advogados e Promotores no Processo Criminal”. *Revista Forense*, Rio de Janeiro, v. 43, n.106, pp. 235-242.
- BALSAMO, A. y TRIZZINO, L. (2011): “Il rapporto tra indipendenza del pubblico ministero e tutela della libertà personale nella giurisprudenza della corte europea dei diritti dell'uomo”. *Cassazione Penale*, 3, pp. 1226-1238.
- BALTAZAR JR., J. P. (2010): *Crime organizado e proibição de insuficiência*, Porto Alegre: Livraria do Advogado.
- BARATTA, A. (2004): *Criminología y sistema penal*. Montevideo/Buenos Aires: IBdeF.
- BARBOSA MOREIRA, J. C. (1977): “A ação popular do direito brasileiro como instrumento de tutela jurisdicional dos chamados ‘interesses difusos’”. *Temas de direito processual*. São Paulo: Saraiva [110-123].



- BARGIS, M. (2004): “Il pubblico ministero nella prospettiva di un ordinamento europeo”. *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, julio-septiembre, fasc. 03, pp. 745-788.
- BARJA DE QUIROGA, J. L. (2010): *Tratado de derecho procesal penal*. Cizur Menor: Thomson Aranzadi.
- BARONA VILAR, S. (2006): “Conformidad del acusado, paradigma de eficiencia de la justicia penal”. En: GÓMEZ COLOMER, J. L. y GONZÁLEZ CUSSAC, J. L. (coords.) *Terrorismo y proceso penal acusatorio*. Valencia: Tirant lo Blanch [399-434].
- BARONA VILAR, S. (2011): *Mediación penal: fundamento, fines y régimen jurídico*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- BARONA VILAR, S. (2015): “Mediación penal. Integración de la mediación en la justicia penal. Supuestos especiales”. En: PARDO IRANZO, V. (dir.): *La mediación: algunas cuestiones de actualidad*. Valencia: Tirant lo Blanch [253-301].
- BARONA VILAR, S. (2016): “Justicia integral y justicia sin proceso”. En: HERRERO PEREZAGUA, J. F. (dir.). *Las transformaciones del proceso civil*. VVAA., Cizur Menor (Navarra): Aranzadi [19-43].
- BARONA VILAR, S. (2017): *Proceso penal desde la historia. Desde su origen hasta la sociedad global del miedo*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- BARRIO ANDRÉS, M. (2011): “La huida del Derecho Administrativo y sus nefastas consecuencias para las Administraciones Públicas”. *La Ley*, N.º 7664, 1 Jul., año XXXII.
- BARROS CARVALHO, P. de (2010): “O preâbulo e a prescritividade constitutiva dos textos jurídicos”. *Revista Direito GV*, n.º11, São Paulo, pp. 295-312,.
- BASTARRECHE BENGOA, T. (2010): *Constitución y ministerio público: Holanda, Italia y España*. Cizur Menor: Aranzadi.
- BAUMAN, Z. (2001): *La globalización: consecuencias humanas*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- BAUMAN, Z. y BORDONI, C. (2016): *Estado de Crisis*. Barcelona-Buenos Aires México, Paidós.
- BAYON, J. C. (2008): “¿Democracia más allá del estado?”. *Isonomía*, n.º 28, pp. 27-52.
- BECCARIA, C. (1964): *Dei delitti e delle pene*. Milano: Giuffrè.
- BECCARIA, C. (1996): *De los delitos y de la pena*. Madrid: Alianza.

- BECK, U. (2015): *La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad*. Barcelona: Paidós.
- BECKER, G. S. (1968): "Crime and punishment: an economic approach". *Journal of Political Economy*, v. 76, January/February, pp. 169-217;
- BECKER, G. S. (1993): *The Economic Approach to Human Behavior*. Chicago: University of Chicago Press.
- BEDAQUE, J. R. S. (2001): *Poderes instrutórios do juiz*. São Paulo: Revista dos Tribunais.
- BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. y FABIÁN CAPARRÓS, E. (2009): "Corrupción y Derecho Penal: nuevos perfiles, nuevas respuestas". *Revista Brasileira de Ciências Criminais*, n.º 81, pp. 7-35.
- BERLINGUER, A. (2013): "Hacia un modelo europeo de mediación". *Revista Aranzadi Doctrinal*, núm. 5, pp. 195-203.
- BERMEJO VERA, J. (1984): "El interés general como parámetro de la jurisprudencia constitucional". *Revista Vasca de Administración Pública*, 10, 2, pp. 103-138.
- BERTOLINO, P. J. (2000): *El juez de garantías en el Código procesal penal de la provincia de Buenos Aires*. Buenos Aires: Depalma.
- BETANCOR, A. (2017): "Corrupción: conceptos, tipos, perjuicios, causas, consecuencias, reacciones y autoridades". En: BETANCOR, Andrés (dir.), *Corrupción, corrosión del Estado de Derecho*. Cizur Menor: Civitas [31-153].
- BIBAS, S. (2004): "Plea Bargaining Outside the Shadow of Trial". *Harvard Law Review*, v. 117, n. 8, jun., pp. 2463-2547.
- BIGNOTTO, N. (2011): "Corrupção e opinião pública". En: AVRITZER, L. y FILGUEIRAS, F. (orgs.): *Corrupção e sistema político no Brasil*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011 [15-42].
- BILBAO UBILLOS, J. M. (2010): "Encuesta: corrupción política y derecho público". *Revista Teoría y Realidad Constitucional*, Madrid, n. 25, pp. 15-55.
- BIN, R. (2004): *Lo Stato di diritto. Come imporre regole al potere*. Bologna: il Mulino.
- BINDER, A. (2017): *Fundamentos para a reforma da Justiça Penal*. Florianópolis: Empório do Direito.
- BOBBIO, L. (2010): "Democrazia e nuove forme di partecipazione". En: BOVERO, Michelangelo y PAZÉ, Valentina (coords.): *La Democrazia in*

- nove lezioni*. Roma-Bari: Laterza [46-63].
- BOBBIO, N. (1984): *Il futuro della democrazia*. Torino: Einaudi;
- BOBBIO, N. (1991): *El tiempo de los derechos*. Madrid: Sistema, D.L.
- BOBBIO, N. (2003): *Teoría general de la política*. Madrid: Trotta, D.L.
- BOBBIO, N. (2004): *Dizionario di política*. Torino: UTET.
- BOBBIO, N. (2007): *El futuro de la democracia*. México: Fondo de Cultura Económica.
- BÖCKENFÖRDE, E. W. (2000): *Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia*. Madrid: Trotta.
- BOERSMA, M. (2012): *Corruption: a violation of human rights and a crime under international law?* Cambridge; Antwerp; Portland: Intersentia.
- BONETE PERALES, E. (2014): *Poder político: límites y corrupción*. Madrid: Cátedra.
- BONIFASSI, S. y MASSOULIER, G. (2017): “La nouvelle procédure de “Convention Judiciaire d’Intérêt Public””. *Journal des Sociétés*, n. 149, pp. 38-42.
- BOTTINI, P. C. (2013): “Enfrentamento de excessos não autoriza uso arbitrário das leis”. *Conjur*, 17 de outubro. [<http://www.conjur.com.br/2013-out-17/pierpaolo-bottini-enfrentamento-excessos-nao-autoriza-uso-arbitrario-leis>].
- BOTTINO, T. (2016): “Colaboração Premiada e incentivos à Cooperação no Processo Penal: Uma Análise Crítica dos Acordos Firmados na “Operação Lava Jato””. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*, São Paulo, Ano 24, vol. 122, pp. 359-390.
- BOVERO, M. (2000): *Contro il governo dei peggiori. Una grammatica della democrazia*. Roma-Bari: Laterza.
- BOVINO, A. (2005): *Justicia penal y derechos humanos*. Buenos Aires: Del Puerto.
- BOWLES, R. (2000): “Corruption”. En: BOUCKAERT, B., DE GEEST, G. *Encyclopedia of Law and Economics, Volume V. The Economics of Crime and Litigation*. Cheltenham, UK: Edward Elgar [460-491].
- BRANCACCIO, A. (1990): “Giustizia e democrazia”. *Cassazione penale*, v. 30/I, n.1, pp. 516-523.
- BRANDÃO, R. (2017) *Supremacia Judicial Versus Diálogos Constitucionais*. Rio de Janeiro: Lumen Juris.

- BRANDÁRIZ GARCÍA, J. A. (2014): *El gobierno de la penalidad: la complejidad de la política criminal contemporánea*. Madrid: Dykinson.
- BRINDEIRO, G. (2016): “Delação premiada e plea bargain agreement”. *O Estado de São Paulo*, 6 de febrero, [<http://opinioao.estadao.com.br/noticias/geral,delacao-premiada-e-plea-bargain-agreement,10000015508>].
- BRIOSCHI, C. A. (2010): *Breve historia de la corrupción. De la Antigüedad a nuestros días*. Madrid, Taurus.
- BROWN, J. (1988): “Meriti e limiti del patteggiamento”. En: AMODIO, E. y BASSIOUNI, M. C. (edits.): *Il processo penale negli Stati Uniti d’America*. Milano: Giuffrè [131-149].
- BROWN, W. W. y REYNOLDS, M. O. (1973): “Crime and ‘punishment’: Risk implications”. *Journal of Economic Theory*, 6, issue 5, pp. 508-514.
- BRUGUÉ, Q. (2009): “Una Administración que habla es una Administración que piensa”. En: AA.VV., *Participación Ciudadana para una Administración Deliberativa*. Zaragoza: Gobierno de Aragón [55-72].
- BUJOSA VADELL, L. (2015): “Oficialidad o discrecionalidad en el inicio de la investigación penal”. En: MORENO CATENA, V. (dir.), RUIZ LÓPEZ, C. y LÓPEZ JIMÉNEZ, R. (coords.): *Reflexiones sobre el nuevo proceso penal. Jornadas sobre el borrador del nuevo Código Procesal Penal. 25 y 26 de abril de 2013*. Valencia: Tirant lo Blanch [33-47].
- BUJOSA VADELL, L. (coord.) (2008): *Hacia un verdadero espacio judicial europeo* Granada: Comares.
- BUSTOS GISBERT, R. (2004): “La recuperación de la responsabilidad política en la lucha contra la corrupción de los gobernantes: una tarea pendiente”. En: GARCÍA RODRÍGUEZ, N. y FABIÁN CAPARRÓS, E. (eds.): *La corrupción en un mundo globalizado: Análisis interdisciplinar*. Salamanca: Ratio Legis [67-85].
- BUSTOS GISBERT, R. (2001): *La responsabilidad política del gobierno: ¿realidad o ficción?: la necesaria reformulación de un principio esencial del sistema parlamentario*. Madrid: Colex.
- BUSTOS GISBERT, R. (2007): “Corrupción de los gobernantes, responsabilidad política y control parlamentario”. *Revista Teoría y Realidad Constitucional*, n. 19, pp. 135-161.
- BUSTOS GISBERT, R. (2009): “Los derechos de libre comunicación en una

- sociedad democrática”. En: GARCÍA ROCA, F. J. y SANTOLAYA MACHETTI, P. (coords.): *La Europa de los Derechos: el Convenio Europeo de Derechos Humanos* [591-628].
- BUSTOS GISBERT, R. (2010): “Corrupción política: un análisis desde la teoría y la realidad constitucional”. *Revista Teoría y Realidad Constitucional*, Madrid, n. 25, pp. 69-109;
- BUSTOS GISBERT, R. (2013): “Corrupción y Derecho”. En: BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. y BECHARA, A. E. L. S. (coords.): *Estudios sobre la corrupción: una reflexión hispano brasileña* [57-72].
- BUSTOS GISBERT, R. (2017). *Calidad democrática: reflexiones constitucionales desde la teoría, la realidad y el deseo*. Marcial Pons.
- CABEZUDO RODRÍGUEZ, N. (1996): *El Ministerio Público y la justicia negociada en los Estados Unidos de Norteamérica*. Granada: Comares.
- CABEZUDO RODRÍGUEZ, N. (2008): “Sobre la conveniencia de atribuir la instrucción penal al ministerio fiscal”. *Revista Jurídica de Castilla y León*, núm. 14, pp. 185-221.
- CABEZUDO RODRÍGUEZ, N. (2011): “El último (y controvertible) credo en materia de política criminal. Justicia restaurativa y mediación penal”. *La Ley Penal*, N.º 86.
- CABRAL, R. L. F. (2017): “Um panorama sobre o acordo de não persecução (art. 18 da Resolução 181/17-CNMP)”. En: SANCHES CUNHA, R., DIRCEU BARROS, F. y SOUZA, R. DO Ó (edits.): *Acordo de não persecução penal. Resolução n. 181/2017 do CNMP*. Salvador: Juspodium [22-48].
- CACIAGLI, M. (1996): *Clientelismo, corrupción y criminalidad organizada: evidencias empíricas y propuestas teóricas a partir de los casos italianos*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
- CALAMANDREI, P. (1936): *Elogio de los Jueces escrito por un Abogado*. Madrid: Góngora.
- CALDERÓN CUADRADO, M. P. e IGLESIAS BUHÍGUES, J. L. (coord.) (2009): *El Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia. Avances y derechos fundamentales en materia procesal*. Cizur Menor: Aranzadi.
- CANIVET, G. (2003): “La conception française de la déontologie des magistrats” *Esprit*, v.11, n. 299, novembre, pp. 5-22.
- CANOTILHO, J. J. G. (2003): *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*. Coimbra: Almedina.

- CAPPELLETTI, M. (1974): *Proceso, ideologías, sociedad*. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América.
- CARNELUTTI, F. (1946): *Lezioni sul processo penale*. Roma: Ateneo, vols. I y II.
- CARNELUTTI, F. (1953): “Mettere il pubblico ministero al suo posto”. *Rivista di diritto processuale*, Padova, Cedam, v. VIII, Parte I, pp. 257-264.
- CARNELUTTI, F. (1959): *Las miserias del proceso penal*. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América.
- CARPIO DELGADO, J. Del (2007) “Los testigos anónimos en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en la de los Tribunales Penales Internacionales ‘ad-hoc’”. *Revista Penal*, n. 19, pp. 35-51.
- CARRETERO SÁNCHEZ, S. (2012): “Democracia virtual y participación ciudadana en la Legitimidad del Poder Político”. *Actualidad Administrativa*, N.º 7, Sección a Fondo, Quincena del 1 al 15 Abr., tomo 1, Editorial La Ley 2919/2012.
- CARULLI, N. (1967): *Il diritto di difesa dell'imputato*. Napoli: Eugenio Jovene.
- CARVALHO, R. M. U. de (2009): *Curso de Direito Administrativo*. Salvador: Juspodium.
- CASCAJO-CASTRO, J. L. (1973): “Consideraciones sobre el Estado de Derecho”. *Revista de Estudios Políticos*, núms. 189-190, Madrid, pp. 81-100.
- CASTILLO CÓRDOVA, L. (2007): “El derecho fundamental al juez imparcial: influencias de la jurisprudencia del TEDH sobre la del Tribunal Constitucional Español”. *Anuario de Derecho Constitucional latinoamericano*, v. 1, pp. 121-145.
- CAVALCANTI, F. de Q. B. (2009): “Reserva de densificação normativa da lei para preservação do princípio da legalidade”. En: BRANDÃO, C.; CAVALCANTI, F. de Q. B.; ADEODATO, J. (coords.): *Princípio da legalidade: da dogmática jurídica à teoria do direito*. Rio de Janeiro: Forense [221-234].
- CECANESE, G. (2017): *Le “aporie” del patteggiamento*. Napoli: Editoriale Scientifica.
- CERVINI, R. y TAVARES, J. (2000): *Princípios de cooperação judicial penal internacional no Protocolo do Mercosul*. São Paulo: Revista dos Tribunais.
- CHAZARRA QUINTO, M. A. (2016): “El delito de financiación ilegal de

- partidos políticos: un hito más en la corrupción política y su tratamiento jurídico-penal”. En: LÓPEZ ÁLVAREZ, A. y GARCÍA NAVARRO, J. J. (coords.): *La corrupción política en España: una visión ética y jurídica*. Cizur Menor, Navarra: Aranzadi [63-80].
- CHEIBUB J. A. y PRZEWORSKI, A. (1999): “Democracy, elections and accountability for economic outcomes”. En: MANIN, B., PRZEWORSKI, A. y STOKES, S. C.: *Democracy, Accountability and Representation*. Cambridge: Cambridge University Press [222-250].
- CHERMAK, S. (2005): “La rappresentazione giornalistica del terrorismo”. En: FORTI, G. y BERTOLINO, M. (orgs.): *La televisione del crimine*. Milán: Vita e Pensiero [471-495].
- CHIAVARIO, M. (1994): “Obbligatorietà dell'azione penale: il principio e la realtà”. En: FILIPPI, C. (edit.): *Il pubblico ministero oggi*. Milano: Giuffrè [67-99].
- CHIAVARIO, M. (1995): *L'azione penale tra diritto e politica*. Padova: Cedam.
- CHIAVARIO, M. (2006): “La fisionomia del titolare dell'azione penale, tema essenziale di dibattito per la cultura del processo”. En: *Pubblico ministero e riforma dell'ordinamento giudiziario. Atti del convegno. Udine, 22-24 ottobre 2004*. Milano: Giuffrè [11-34].
- CHICHE, J., LE 9HAY, V., CHANVRIL, F. y LASCOUMES, P. (2010): “Du favoritisme à la corruption les définitions concurrentes de la probité publique”. En: LASCOUMES, P. (dir.): *Favoritisme et corruption à la française. Petits arrangements avec la probité*. Paris: Presses de Sciences Po [73-106].
- CHOCLÁN MONTALVO, J. A. (2000): *La organización criminal: tratamiento penal y procesal*. Madrid: Dykinson.
- CHOZAS ALONSO, J. M. (2013): “La conformidad penal española y el patteggiamento italiano. Breve estudio de derecho comparado (1)”. *La Ley Penal*, N.º 104, Sección Artículos, Septiembre-Octubre, Editorial LA LEY.
- CIPRIANI, F. (2011): “El proceso civil italiano entre revisionistas y negacionistas”. En: AROCA, J. M. (coord.): En: AROCA, J. M. (coord.): *Proceso civil e ideología. Un prefacio, una sentencia, dos cartas y quince ensayos: Moción de Valencia (2006), Declaración de Azul (2008)*. Valencia: Tirant lo Blanch [59-72].

- CIRNE LIMA, R. (1937): *Princípios de Direito Administrativo Brasileiro*, Porto Alegre, Editora Livraria Globo.
- CLEANGOV BIZ y OCDE (2012): *Whistleblower protection: encouraging reporting* [<http://www.oecd.org/cleangovbiz/toolkit/50042935.pdf>].
- COBACHO LÓPEZ, Á. (2016): “Democracia, libertad de expresión y ética social”. En: LÓPEZ ÁLVAREZ, A. y GARCÍA NAVARRO, J. J. (coords.): *La corrupción política en España: una visión ética y jurídica*. Cizur Menor, Navarra: Aranzadi [ 97-110].
- COBAS COBIELLA, M. E. (2015): “Resolución extrajudicial de conflictos en la era de la modernización de la justicia. Algunas reflexiones sobre la mediación”. En: PARDO IRANZO, V. (dir.): *La mediación: algunas cuestiones de actualidad*. Valencia: Tirant lo Blanch [17-45].
- COCCIOLO, E. E. (2008): “Las mutaciones del concepto de corrupción. *Revista de Llengua i Dret*, n. 50, pp. 15-51.
- CODERCH, P. S. (1993): *El derecho de la libertad*, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
- COING, H. (1961): *Fundamentos de filosofía del derecho*. Barcelona: Ariel.
- COLEMAN, S. (2003): “L’avenir de l’Internet et de la démocratie: pour une politique qui transcende les métaphores”. En: *Promesses et limites de la démocratie électronique: les défis de la participation citoyenne en ligne*. Paris: OCDE [157-168].
- COMPARATO, F. K. (1998): “Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas”. *Revista de Informação Legislativa*, v. 35, n. 138, pp. 39-48.
- CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C. (1983): “La naturaleza y los principios rectores del MF en la Constitución y el nuevo Estatuto orgánico”. En: AGÚNDEZ FERNÁNDEZ, A. et al: *El Poder Judicial*. Madrid: Dirección General de lo Contencioso. Instituto de Estudios Fiscales, vol. I [843-890].
- CORRAL ESCARIZ, V. (2017): “Las oficinas de recuperación de activos como instrumento de lucha contra el crimen organizado y la corrupción”. En: CASTRO MORENO, A., OTERO GONZÁLEZ, P. (dirs.) y GARROCHO SALCEDO, A.M. (coord.): *Corrupción y delito: aspectos de derecho penal español y desde la perspectiva comparada*. Madrid: Dykinson, D.L. [155-202].
- CORREIA, C. (2016): *Vítimas Esquecidas. a ineficácia dos instrumentos de*



- reparação*. Rio de Janeiro: Lumen Juris.
- CORRERA, M. M. y RIPONTI, D. (1990): *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale: un approccio criminológico*. Padova: Cedam.
- COSTA, A. T. M. (2011): “É possível uma política criminal? A discricionariedade no sistema de justiça criminal do DF”. *Sociedade e Estado*, v. 26, n. 1, pp. 97-114.
- COSTABILE, A. y LICURSI, S. (2004): “Politica e magistratura”. En: GAMBINO, S. (edt.): *La magistratura nello stato costituzionale. Teoria ed esperienze a confronto*. Milano: Giuffrè [361-373].
- COUSO, J. (2004): “Consolidación democrática y Poder Judicial: los riesgos de la judicialización de la política”. *Revista de Ciencia Política*. Vol. JVCNXXV. n.2, pp. 29-48.
- CROCKER, D. A. (2016): “Enfrentando la desigualdad y la corrupción: Agencia, empoderamiento y desarrollo democrático”. *Veritas*, Valparaíso, n. 34, pp. 63-74.
- CROZIER, M. (1974): *El fenómeno burocrático: ensayo sobre las tendencias burocráticas de los sistemas de organización modernos y sus relaciones con el sistema social y cultural*. Buenos Aires: Amorrortu, v. II.
- CUADRADO SALINAS, C. (2010): *La investigación en el proceso penal*. Madrid: La Ley-Actualidad.
- CUERDA-ARNAU, M. L. (1995): *Atenuación y remisión de la pena en los delitos de terrorismo*. Madrid: Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia.
- CUESTA ARZAMENDI, J. L. de la. (2013): “La corrupción ante el Derecho y la Justicia”. *Diario La Ley*, N.º 8153, Año XXIV, Ref. D-315, Editorial LA LEY.
- CURRELI, C. y MINISCI, F. (2011): *Il pubblico ministero. Compiti e poteri nelle indagini e nel processo*. Milano: Giuffrè.
- DA SILVA ARAÚJO FILHO, L. P. (2004): “El anteproyecto de Código de proceso civil colectivo modelo para Iberoamérica y los intereses o derechos individuales homogéneos. En: GIDI, A. y FERRER MAC-GREGOR, E. (coords.): *La tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos. Hacia un Código modelo para Iberoamérica*. México: Porrúa-Instituto Iberoamericano de derecho procesal [81-103].
- DAHL, R. (1971): *A. Polyarchy. Participation and Opposition*. New Haven/London: Yale University Press.

- DAHL, R. (2012): *A democracia e seus críticos*. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes.
- DAHLSTRÖM, C. y LAPUENTE, V. (2017): *Organizing Leviathan. Politicians, bureaucrats, and the making of good government*. Cambridge, UK, Cambridge University Press.
- DALEY, R. M. (1988): “Il plea bargaining: uno strumento di giustizia senza dibattito”. En: AMODIO, E. y BASSIOUNI, M. C. (edits.): *Il processo penale negli Stati Uniti d’America*. Milano: Giuffrè [152-177].
- DALLAGNOL, D. (2017): *A Luta Contra A Corrupção. A Lava Jato e o Futuro de Um País Marcado Pela Impunidade*. Rio de Janeiro: Sextante.
- DALLARA, C. (2010): *L’Unione Europea e la promozione della rule of law in Romania, Serbia e Ucraina. Le riforme dei sistemi giudiziari e le politiche anti-corruzione nei tre paesi*. Bologna: Dupress.
- DANTAS, B. (2018): “O risco de ‘infantilizar’ a gestão pública”. *O Globo*, 06 de enero [<https://oglobo.globo.com/opiniaao/o-risco-de-infantilizar-gestao-publica-22258401>].
- DE GIORGI, A. (2006): *A miséria governada através do sistema penal*. Rio de Janeiro: Revan.
- DE PRADA RODRIGUEZ, M. y CONDE, A. Z. (2015): “La Fiscalía Europea: una realidad cada vez más cercana”. *Diario La Ley*, N.º 8641.
- DE PRADA RODRIGUEZ, M. y CONDE, A. Z. (2016): “Reflexiones sobre la transacción en el marco de una Fiscalía Europea”. *Diario La Ley*, N.º 8862.
- DE PRADA RODRIGUEZ, M. y CONDE, A. Z. (2017): “El nuevo diseño institucional de la fiscalía europea (EPPO) y el procedimiento simplificado de acusación o acuerdo”, en CEFLegal: revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos, n.º. 197, pp. 103-128.
- DEL MORAL GARCÍA, A. (2016): “Justicia penal y corrupción: análisis singularizado de la ineficiencia procesal”. En: CASTRO MORENO, A., OTERO GONZÁLEZ, P. (dirs.) y GRAFFE GONZÁLEZ, L. V.: *Prevención y tratamiento punitivo de la corrupción en la contratación pública y privada*. Madrid: Dykinson [51-81].
- DEL RÍO, C. A. (2015): “Aspectos positivos y negativos del Tribunal provincial de instancia en la investigación y enjuiciamiento de la corrupción en el ámbito público”. *Cuadernos penales José María Lidón*, n. 11, Bilbao, pp. 145-164.

- DEL VECCHIO, G. (2015): “A Luta contra o Crime”. *Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro*, Edição Comemorativa, pp. 1417-1422.
- DELGADO, J. A. (2003): “Foro por prerrogativa de função. Conceito. Evolução histórica. Direito comparado. Súmula 349 do STF. Cancelamento. Enunciados”. En: PEREIRA, A. C. A., MELLO, C. R. D. de A. (Org.): *Estudos em Homenagem a Carlos Alberto Menezes Direito*. Rio de Janeiro: Renovar [327–373].
- DELGADO, J. F. (1999): *La denuncia anónima*. Buenos Aires: Fabián J. di Plácido.
- DELLA PORTA, D. (2001): “A judges' revolution? Political corruption and the judiciary in Italy”. *European Journal of Political Research*, 39, pp. 1-21.
- DELLA PORTA, D. y VANUCCI, A. (2002): “Los recursos de la corrupción algunas reflexiones sobre el caso italiano”. *Zona Abierta*, n. 98-99, pp. 85-118.
- DELMAS-MARTY, M. (dir.) (2000): *Procesos penales de Europa: (Alemania, Inglaterra y País de Gales, Bélgica, Francia, Italia)*.
- DELMAS-MARTY, M. (2006): *Le Pluralisme ordonné. Les Forces imaginantes du droit*. 2. Paris: Seuil.
- DELMAS-MARTY, M. (2009): “Violenza e massacri: verso un diritto penale dell'inumano?”, *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, anno LII, pp. 753-766.
- DERVAN, L. E. y EDKINS, V. A. (2013): “The innocent defendant's dilemma: an innovative empirical study of plea bargaining's innocence problem”. *Journal of Criminology Law & Criminology*, v. 103, n. 1, pp. 1-48.
- DEVEAUX, M. (2003): *A Deliberative Approach to Conflicts of Culture*. *Political Theory*, 31 (6), pp. 780-807.
- DI FEDERICO, G. (2004): *Manuale del Ordinamento Giudiziario*. Padova: CEDAM.
- DI FRANCESCO MAESA, C. (2017): “Repercussions of the Establishment of the EPPO via Enhanced Cooperation EPPO's. Added Value and the Possibility to Extend Its Competence”. *European Criminal Law and the Protection of Financial Interests of the EU – EUCRIM-*, Max Planck Society for the Advancement of Science c/o Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law n. 3, pp. 156-160.

- Di GREGORIO, A. (2010): “Un ombudsman sui generis?: la protezione dei diritti dei cittadini ad opera della Prokuratura in Russia, tra permanenza del modello sovietico ed elementi di originalità”. *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. IV, pp. 1411-1438.
- Di PIETRO, M. S. Z. (2010): “Constitucionalização do direito administrativo. Reflexos sobre o princípio da legalidade e a discricionariiedade administrativa”. En: DI PIETRO, M. S. Z.; RIBEIRO, C. V. A. (coords.): *Supremacia do interesse público*. São Paulo: Atlas [175-196].
- DIAS, J. de F. (1974): *Direito Processual Penal*. Coimbra editora: Coimbra. (reimp., 2004).
- DIAS, J. de F. (2011): *Acordos sobre a sentença em processo penal: o “fim” do estado de direito ou um novo “princípio”?* Porto: Conselho Distrital do Porto da Ordem dos Advogados, D.L.
- DÍAZ, E. (2009): “Estado de Derecho y legitimidad democrática”. En: CARBONELL, M. y VAZQUEZ, R. (comps.): *El Estado de Derecho. Dilemas para América Latina*. Lima: Palestra Editores.
- DÍEZ RIPOLLÉS, J. L. (2009): “Agentes sociales relevantes en la toma de decisiones legislativas penales en Iberoamérica (2000-2006)”. En: CARBONELL MATEU, J. C.; GONZÁLEZ CUSSAC, J. L.; y ORTS BERENGUER E. (dirs); CUERDA ARNAU, M. L. (coord.): *Constitución, derechos fundamentales y sistema penal (Semblanzas y estudios con motivo del setenta aniversario del profesor Tomás Salvador Vives Antón)*. Tomo I. Valencia: Tirant lo Blanch.
- DÍEZ-PICAZO, L. M. (1993): “Los Preámbulos de las leyes”. En: por GÓMEZ ÁLVAREZ, U. (coord.): *Estudios de Derecho Público en homenaje a Ignacio de Otto*. Oviedo: Servicio de publicaciones de la Universidad de Oviedo [167-208].
- DÍEZ-PICAZO, L. M. (1996): *La criminalidad de los Gobernantes*. Barcelona: Crítica;
- DÍEZ-PICAZO, L. M. (2000): *El poder de acusar: Ministerio Fiscal y constitucionalismo*. Barcelona: Ariel.
- DINO, A. (2009): “Mafia e libertà di informazione”. En: DINO, A. (edit.): *Criminalità dei potenti e metodo mafioso*. Milán: Mimesis [179-207].
- DIVAN, G. A. (2015): *Processo penal e política criminal: uma reconfiguração da justa causa para ação penal*. Porto Alegre: Elegancia Juris.

- DUMORTIER, F. (2009): “Facebook y los riesgos de la ‘descontextualización’ de la información”. *IDP. Revista de Internet, Derecho y Política*, n. 9, pp. 25-41.
- ECHAZARRA, A. (2014): *La delincuencia en los barrios Percepciones y reacciones*. Barcelona: Fundación “la Caixa”.
- EDWARDS, J. L. J. (1964) *The law officers of the Crown: a study of the offices of Attorney-General and Solicitor-General of England, with an account of the office of the Director of Public Prosecutions of England*. London: Sweet & Maxwell.
- EIDE, Erling (2000): “Economics of Criminal Behavior”. *Encyclopedia of Law and Economics*, v. 5, n. 2, pp. 345-89.
- ELLIS, M. J. (2012): “The Origins of the Elected Prosecutor”. *Yale Law Journal* [serial online]. April; 121(6), pp.1528-156.
- EMERSON, R. W. (2014): *Ensayos*. Madrid: Cátedra.
- ESPINA RAMOS, J. A. (2010): “¿Hacia una Fiscalía Europea?”. En: ARANGÜENA FANEGO, C. (dir.): *Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia: Últimos avances en cooperación judicial penal*. Valladolid: Lex Nova [101-120].
- ESTEFANÍA, J. (2010): “Introducción”. En: Latorre, I. (edit.), ORTIZ, J. y EMBID, J.: *Informe sobre la democracia en España. La erosión de la confianza y el bienestar. Contra la desafección ciudadana*. Madrid: Fundación Alternativas [13-32].
- ESTÉVEZ MENDOZA, L. (2017): “La instauración de la fiscalía europea como cooperación reforzada: Problemas orgánicos y procesales” *Revista de estudios europeos*, n.º extraordinario monográfico 1, pp. 106-122.
- ETXEBERRÍA GURIDI, J. F. (2009): “El modelo francés de mediación penal”. En: BARONA VILAR, S. (coord.): *La mediación penal para adultos. Una realidad en los ordenamientos jurídicos*. Valencia: Tirant lo Blanch [181-234].
- EUBEN, P. (1995): “Corruption”. En: BALL, T., FARR, James, HANSON, R. L. (edits.): *Political innovation and conceptual change*. Cambridge: Cambridge University Press [221-246].
- FABIAN CAPARRÓS, E. A. (1998): *El delito de blanqueo de capitales*. Madrid: Colex.
- FABIAN CAPARRÓS, E. A. (2003): *La corrupción de agente público extranjero e internacional*. Valencia: Tirant lo Blanch.

- FACHINELLI, G. B. N. (2008) “A mitigação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública”. *Revista UNIJUS*, v. 11, n. 15, nov., pp. 209–228.
- FAGGIANI, V. (2016): “El principio de reconocimiento mutuo en el espacio europeo de justicia penal. Elementos para una construcción dogmática”. *Revista general de Derecho europeo* (38), pp. 73-107.
- FAIRÉN GUILLÉN, V. (1991): “Tendencias actuales de derecho procesal penal”. *Justicia: revista de derecho procesal*, N.º 2, pp. 263-276.
- FALCONI, G. (2010): *La posta in gioco. Interventi e proposte per la lotta alla mafia*. Milano: BUR.
- FANCHIOTTI, V. (1984): “Origini e sviluppo della “giustizia contrattata nell'ordinamento statunitense”. *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, v. 27, gen./mar., pp. 56–101.
- FANCHIOTTI, V. (1988): “Spunti per un dibattito sul plea bargaining”. En: AMODIO, E. y BASSIOUNI, M. C.: *Il processo penale negli Stati Uniti d'America*. (edits.). Milano: Giuffrè, [271-297].
- FARRALES, M. J. (2005): “What is Corruption?: A History of corruption studies and the great definitions debate” [<https://ssrn.com/abstract=1739962>].
- FAZZIO JÚNIOR, W. (2012): *Improbidade administrativa: doutrina, legislação e jurisprudência*. São Paulo: Atlas.
- FEELEY, M., (2009): “Plea bargaining and the structure of the Criminal Process”. *The Justice System Journal*, V. 7, N. 3, pp. 338-354.
- FEELEY, M. y RUBIN, E. (1998): *Judicial policy making and the modern state: how the courts reformed America's prisons*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- FELDENS, L. (2009): “Ministério Público, processo penal e democracia: Identidade e desafios”. En: PRADO, Geraldo; MALAN, Diogo Rudge (coords.). *Processo penal e democracia: estudos em homenagem aos 20 anos da Constituição da República de 1988*. Rio de Janeiro: Lumen Juris [321-342].
- FELDMAN, E. A. (2000): *The Ritual of Rights in Japan: Law, Society, and Health Policy*, Cambridge: Cambridge University Press.
- FERGUSON, C. H. (2013): *O sequestro da América. Como as corporações financeiras corromperam os Estados Unidos*. Rio de Janeiro: Zahar.
- FERGUSON, G. (2017): *Global corruption: law, theory and practice*. United

- Nations Office of Drugs and Crime (UNODC) [<https://track.unodc.org/Academia/Pages/TeachingMaterials/GlobalCorruptionBook.aspx>].
- FERNÁNDEZ AJENJO, J. (2007): *La Intervención General de la Administración del Estado y el deber de colaboración con la justicia*. Madrid: Ministerio de Economía y Hacienda.
- FERNÁNDEZ AJENJO, J. A. (2011): *El control de las administraciones públicas y la lucha contra la corrupción: especial referencia al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General de la Administración del Estado*. Madrid: Civitas.
- FERNÁNDEZ PASARÍN, A. M. (2018): “Euroorden: apunte técnico y mirada política”. *Agenda Pública*, 17 abril [<http://agendapublica.elperiodico.com/euroorden-apunte-tecnico-mirada-politica/>].
- FERNÁNDEZ TERUELO, J. G. (2015): “El fenómeno de la corrupción en España: respuesta penal y propuestas de reforma”. En: AA.VV., *Economía y derecho penal en Europa: una comparación entre las experiencias italiana y española: actas del congreso hispano-italiano de Derecho penal económico (Università degli Studi di Milano, Milano, 29-30 de mayo de 2014)*. A Coruña: Universidade da Coruña, Servizio de Publicacións [55-76].
- FERRAJOLI, L. (1988): “Justicia penal y democracia. El contexto extraprocesal”. *Jueces para la democracia*, n. 4, pp. 3-7.
- FERRAJOLI, L. (1995): *Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal*. Madrid: Trotta.
- FERRAJOLI, L. (1996): “El Estado constitucional de Derecho hoy: el modelo y su divergencia en la realidad”. En: ANDRÉS IBÁÑEZ, P. (ed.). *Corrupción y Estado de Derecho. El papel de la jurisdicción*. Trotta: Madrid [15-29].
- FERRAJOLI, L. (2003): “Pasado y Futuro del Estado de Derecho”. En: CARBONELL, Miguel (org.). *Neoconstitucionalismo(s)*. Madrid: Trotta.
- FERRAJOLI, L. (2004): *Epistemología jurídica y garantismo*. México, D.F.: Fontamara.
- FERRAJOLI, L. (2006): *Garantismo. Una discusión sobre Derecho y democracia*. Madrid: Trotta.
- FERRAJOLI, L. (2007): *Principia iuris: teoria del diritto e della democrazia*.

- V. 1, *Teoria del diritto*. Roma-Bari: Laterza.
- FERRAJOLI, L. (2009a): *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia. V. II, Teoria della democrazia*. Roma-Bari: Laterza.
- FERRAJOLI, L. (2009b): *Los retos de la procuración de justicia en un mundo globalizado*. México: Ubijus.
- FERRAJOLI, L. (2010a): “Democrazia e paura”. En: BOVERO, Michelangelo y PAZÉ, Valentina (coords.): *La Democrazia in nove lezioni*. Roma-Bari: Laterza [115-135].
- FERRAJOLI, L. (2010b): “Las fuentes de legitimidad de la jurisdicción”. *Reforma Judicial: Revista Mexicana de Justicia*, N.º. 15-16, pp. 3-18.
- FERRAJOLI, L. (2010c): *Derechos y garantías: la ley del más débil*. Madrid: Trotta.
- FERRAJOLI, L. (2011a): *Poteri Selvaggi. La crisi della democrazia italiana*. Roma-Bari: Laterza.
- FERRAJOLI, L. (2011b) “Costituzione e globalizzazione”. En: BOVERO, M. (dir.): *Il futuro di Norberto Bobbio*. Roma-Bari: Laterza [118-133].
- FERRAJOLI, L. (2012): “Per un pubblico ministero come istituzione di garanzia”. En: *Questione Giustizia*, n. 01, pp. 31-43.
- FERRAJOLI, L. (2014a) “Criminología, crímenes globales y Derecho Penal. El debate epistemológico en la criminología contemporánea”. En: RIVERA BEIRAS, I. (coord.): *Delitos de Los Estados, de los Mercados y daño social. Debates en Criminología crítica y Sociología jurídico-penal*. 1ª ed., Barcelona, Anthropos [81-96].
- FERRAJOLI, L. (2014b): *La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto político*. Madrid: Trotta.
- FERRAJOLI, L. (2017a) “Los espacios y los tiempos de la política y de los derechos”. *Jueces para la Democracia*, n.º 88, págs. 5-19.
- FERRAJOLI, L. (2017b): *La lógica del derecho. Diez aporías en la obra de Hans Kelsen*. Madrid: Trotta.
- FERRAZ JÚNIOR, T. S. (2013): *Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação*. São Paulo: Editora Atlas.
- FERREIRA, F. (2013): “Visibilidade do Supremo mais que duplica no ano passado”. *Folha de S. Paulo*, 13 de enero, Poder, p. A10.
- FILGUEIRAS, F. (2008): *Corrupção, democracia e legitimidade*. Belo Horizonte, Editora UFMG.



- FISCHER, D. (2010): “O que é garantismo penai (integrai)?”. En: CALABRISH, B.; FISCHER, D.; PELELLA, E. (orgs.): *Garantismo penai integral: questões penais e processuais penais, criminalidade moderna e a aplicação do modelo garantista no Brasil*. Salvador: JusPodivm [25-48].
- FISCHER, D. (2016): “Sobre a compatibilização da ampla defesa, do *nemo tenetur se detegere*, da boa-fé objetiva, do devido processo legal (penal) em prazo razoável e da cooperação: influências principiológicas da Constituição da República e do Novo CPC no processo penal”. En: PASSO CABRAL, A. do, PACELLI, E. y SCHIETTI CRUZ, R. (orgs.): *Coleção Repercussões do Novo CPC. V.13 - Processo Penal*. Salvador: Juspodivm [49-65].
- FISMAN, R. y GOLDEN, M. A. (2017): *Corruption: What Everyone Needs to Know*®. New York: Oxford University Press.
- FLORES PRADA, I. (1999): *El Ministerio Fiscal en España*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- FLORIAN, E. [1934]: *Elementos de Derecho Procesal Penal*. Barcelona: Bosch.
- FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (2018): *Review of 1997 Guidance Note on Governance - A Proposed Framework for Enhanced Fund Engagement* [<https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/04/20/pp030918-review-of-1997-guidance-note-on-governance>].
- FONSECA MORILLO, F. J. (2003): “La orden de detención y entrega europea”. *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, Año n.º 7, N.º 14, pp. 69-95.
- FONTE, F. de M. (2016): *Jurisdição Constitucional e Participação Popular. O Supremo Tribunal Federal na era da TV Justiça*. Rio de Janeiro: Lumen Juris.
- FOUCAULT, M. (1979): *Microfísica do poder*. Rio de Janeiro, Edições Graal.
- FOUCAULT, M. (2005): *A verdade e as formas jurídicas*. Rio de Janeiro: Nau.
- FREDERICO MARQUES, J. (1980): *Tratado de Direito Processual Penal*. São Paulo: Saraiva.
- FREEMAN, S. (1994): “Democracia y control jurídico de la constitucionalidad”. *Lua Nova*, n. 32, del San Paolo, CEDEC, pp. 181-199.
- FREIRE JUNIOR, A. B. (2017): “O acordo de não persecução penal: permissões e vedações”. En: SANCHES CUNHA, R., DIRCEU BARROS,

- F. y SOUZA, R. DE Ó (edits.): *Acordo de não persecução penal. Resolução n. 181/2017 do CNMP*. Salvador: Juspodium [303-312].
- FREYESLEBEN, M. L. C. (1993): *O Ministério Público e a polícia judiciária*. Belo Horizonte: Del Rey.
- FRIDRICZEWSKI, V. (2016): *Ação de Improbidade Administrativa e Tutela do Meio Ambiente*. Belo Horizonte: Arraes.
- FUENTES SORIANO, O. (2012): “¿Puede mantenerse la actual vinculación entre ministerio fiscal y Poder Ejecutivo si el ministerio fiscal asume la instrucción? ¿Hay modelos mejores, en qué consisten y qué posibilidades de adaptación a nuestro ordenamiento tendrían?”. En: PEITEADO MARISCAL, P. y GASCÓN INCHAUSTI, F. (dirs.): *La atribución en la dirección de la investigación penal al Ministerio Fiscal. Reflexiones y debates al hilo de un Libro Verde*. Madrid: Dykinson [73-77].
- GABARDO, E. (2017): “princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado como fundamento do Direito Administrativo Social”. *Revista de Investigações Constitucionais*, Curitiba, vol. 4, n. 2, pp. 95-130.
- GALANTINI, N. (2006): “*Plaider coupable e giustizia negoziata: due riti a confronto*”. En GALANTINI, N. et al: *Studi in onore di Giorgio Marinucci. III - Parte speciale del Diritto Penale e legislazione speciale, Diritto Processuale Penale, Diritto, Storia e Società*. Milano: Giuffrè [2765-2782].
- GALBRAITH, J. K. (1984): *La anatomía del poder*. Barcelona: Plaza & Janes,
- GALGANI, B. (2012): “26 - Si actualmente las medidas cautelares más graves sólo se adoptan a instancia de parte para no comprometer las funciones del juez instructor, ¿compromete la función del fiscal instructor ser él quien inste tales medidas?”. En: PEITEADO MARISCAL, P. y GASCÓN INCHAUSTI, F. (dirs.): *La atribución en la dirección de la investigación penal al Ministerio Fiscal. Reflexiones y debates al hilo de un Libro Verde*. Madrid: Dykinson [361-362].
- GALLINO, L. (2013): *Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi*. Torino: Einaudi.
- GAMBETTA, D. (2002): “Corruption: An Analytical Map”. En: KOTKIN, S., SAJ, A. (eds.). *Political corruption in transition: A skeptic's handbook*. Central European University Press [33-56].
- GANDINI, F. (2011): “Il *whistleblowing* negli strumenti internazionali in

- materia di corruzione”. En: FRASCHINI, G., PARISI, N. Y RINOLDI, D.: *Il whistleblowing. Nuovo strumento di lotta alla corruzione*. Roma: Bonanno-Acireale [85-94].
- GARAPON, A. (1997): *Juez y Democracia. Una reflexión muy actual*. España: Flor del Viento ediciones.
- GARAPON, A. y MIGNON COLOMBET, A. (2016): “D’un droit défensif à un droit coopératif: la nécessaire réforme de notre justice pénale des affaires”. *Revue internationale de droit économique*, 2016/2 (t. XXX), pp. 197-215.
- GARCÍA DE ENTERRÍA, E. (1999): *La lengua de los derechos. La formación del Derecho Público Europeo tras la Revolución Francesa*. Madrid: Alianza.
- GARCÍA DE ENTERRÍA, E. (2009): *Democracia, Jueces y control de la Administración*. Cizur Menor: Thomson Civitas.
- GARCÍA LÓPEZ, E. (2010): “Istorie Fiorentini de Maquiavelo: una primera definición moderna de corrupción”. *Revista Teoría y Realidad Constitucional*, n. 25, pp. 57-67.
- GARCÍA MORENO, J. M. (2013): “La cooperación judicial penal en el ámbito iberoamericano”. *Elderecho.com*, 19 de diciembre [[http://www.elderecho.com/tribuna/penal/cooperacion\\_judicial\\_penal-ambito\\_iberamericano\\_de\\_justicia\\_11\\_627430004.html](http://www.elderecho.com/tribuna/penal/cooperacion_judicial_penal-ambito_iberamericano_de_justicia_11_627430004.html)].
- GARCÍA MORILLO, J. (1996) *La democracia en España*. Madrid, Alianza Editorial.
- GARCÍA PASCUAL, M. C. (1997): *Legitimidad democrática y Poder Judicial*. Valencia: Alfons el Magnànim.
- GARCÍA-PANASCO MORALES, G. (2013): “Nuevos instrumentos para los nuevos desafíos del Ministerio Fiscal”. *Diario La Ley*, N.º 8071, Sección Tribuna, 26 Abr.
- GARCÍA-PELAYO, M. (1985): *Las Transformaciones del Estado Contemporáneo*. Madrid: Alianza Editorial.
- GARCIA, E. (2008): *Ministério Público - Organização, Atribuições e Regime Jurídico*. Rio de Janeiro, Lumen Juris.
- GARCIA, E. (2016): “Promoção e Proteção dos Direitos Fundamentais na Constituição de 1988”. *Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro*, vol. 60, pp. 119-127.
- GARCIA, E., e PACHECO, R. (2017): *Improbidade administrativa*. São Paulo: Saraiva.

- GARDINER, J. (2002): "Defining corruption". En: HEIDENHEIMER, A. J., JOHNSTON, M. (edits.): *Political corruption: concepts & contexts*. New Brunswick; London: Transaction Publishers [25-40].
- GARGARELLA, R. (coord.) (2012): *El castigo penal en sociedades desiguales*. Buenos Aires: Miño y Dávila Editores.
- GARLAND, D. (1999): *Castigo y sociedad moderna. Un estudio de teoría social*. Madrid: Siglo XXI.
- GARRETÓN, M. A. (2006): "Os direitos humanos nos processos de democratização". En: JELIN, E. y HERSHBERG, E. (orgs.): *Construindo a democracia: direitos humanos, cidadania e sociedade na América Latina*. São Paulo: Edusp [71-94].
- GARZÓN VALDÉS, E. (1989): "Representación y democracia". *Doxa*, n. 06, pp. 143-163.
- GARZÓN VALDÉS, E. (1997): "Acerca del concepto de corrupción". En: LAPORTA, F. J., ÁLVAREZ, S. (edits.): *La corrupción política*. Madrid: Alianza, D.L. [39-70].
- GASCÓN INCHAUSTI, F. (2007): "En torno a la creación de un derecho procesal penal europeo". *Revista Española de Derecho Europeo*, núm. 23, pp.371- 417.
- GERACI, R.M. (2011): *L'appello contro la sentenza che applica la pena su richiesta*. Padova: CEDAM.
- GIDDENS, A. (2000): *Il mondo che cambia. Come la globalizzazione ridisegna la nostra vita*. Bologna: Il Mulino.
- GIL VILLA, F. (2008): *La cultura de la corrupción*. Madrid: Maia Ediciones.
- GIMENO SENDRA, J. V. (2006): "La reforma de la LECRIM y la posición del M.F. en la investigación penal". En: GIMENO SENDRA, V. (dir.): *El ministerio fiscal-director de la instrucción*. Madrid: Iustel [23-47].
- GIMENO SENDRA, J. V. (2007); *Derecho Procesal Penal*. Madrid: Colex.
- GIMENO SENDRA, J. V. (2015): *Manual de Derecho Procesal Penal*: Madrid: Castillo de Luna.
- GIMENO SENDRA, J. V. (2016): "El principio de oportunidad y el M.F. (1)". *Diario La Ley*, N.º 8746, Sección Doctrina.
- GIMENO SENDRA, J. V., MORENO CATENA, V., CORTES DOMÍNGUEZ, V. (1993): *Derecho Procesal. Proceso Penal*, Tirant lo Blanch: Valencia.

- GIRGINOV, A. y HANCOCK, B. (2008): “Report on the Crown Prosecution Service of England and Wales”. En: AAVV., *Promoting prosecutorial accountability, independence and effectiveness*. Open Society Institute Sofia [143-174].
- GOEL, R. K. y NELSON, M. A. (1998): “Corruption and government size. A desegregated analysis”. *Public Choice*, v. 97, p.107-120.
- GOLDSTEIN, A.S. (1981): *The passive judiciary: prosecutorial discretion and guilty plea*. Baton Rouge: Louisiana State University Press.
- GOMES, L. F. (2011): “A Impunidade da macrodelinquência Econômica desde a perspectiva criminológica da Teoria da Aprendizagem”. *Revista dos tribunais*, v. 100, n. 906, abr., pp. 232–251.
- GOMES, L. F. (2017): *O jogo sujo da corrupção. Pela implosão do sistema político-empresarial perverso. Em favor da Lava jato, dentro da lei, e pela reconstrução do Brasil*. Bauru-SP: Astral Cultural.
- GÓMEZ COLOMER, J. L. (2013). *El proceso penal constitucionalizado*. Editorial Ibañez. Colombia.
- GÓMEZ COLOMER, J. L. (2017): “El proceso penal español a comienzos del siglo XXI”. *InDret: Revista para el Análisis del Derecho*, pp. 1-59.
- GÓMEZ DE LIAÑO FONSECA-HERRERO, M. (2004): *Criminalidad organizada y medios extraordinarios de investigación*. Madrid: Cóllex.
- GÓMEZ DE LIAÑO FONSECA-HERRERO, M. (2010): “El agente encubierto como medida de investigación del terrorismo en el contexto internacional. En: SERRANO-PIEDRECASAS, J. R., DEMETRIO CRESPO, E (dirs.): *Terrorismo y Estado de Derecho*. Madrid: Iustel [417-434].
- GÓMEZ RIVERO, M. del C. (2017): “Derecho Penal y corrupción: acerca de los límites de lo injusto y lo permitido”. *Estudios Penales y Criminológicos*, vol. XXXVII, pp. 249-306.
- GÓMEZ-ALLER, J. D. (2015): “Aproximación a las necesidades de reforma legal en relación con la respuesta penal a la corrupción política”. *Cuadernos penales José María Lidón*, n. 11, Bilbao, pp. 257-284.
- GONZÁLEZ CANO, M. I. (2015): *La mediación penal: hacia un modelo de ADR integrado en el sistema procesal penal: (fundamentos, principios, manifestaciones y perspectivas de futuro)*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- GONZÁLEZ ENCINAR, J. J. (1985): *El Estado unitario-federal: la autonomía como principio estructural del estado*. Madrid, Tecnos, D.L.

- GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J. (2000): “El fraude, en la red de la delincuencia organizada y transnacional sus conexiones con la corrupción y el blanqueo de dinero; la Oficina Europea de Lucha Antifraude (OLAF) como instancia comunitaria de investigación del fraude y la corrupción”. *Estudios jurídicos, Ministerio Fiscal*, n.º 4, pp. 25-40.
- GONZÁLEZ MONJE, A. (2017): *Cooperación jurídica internacional en materia penal e intervención de comunicaciones como técnica especial de investigación*. Albolote (Granada): Comares.
- GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, N., (2015): “Halcones y Palomas: la persecución penal de la corrupción y de la delincuencia económica”. En: ORTIZ PRADILLO, J. C.; DEMETRIO CRESPO, E. y GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, N. (dirs.): *Halcones y Palomas: corrupción y delincuencia económica*. Madrid: Ediciones Jurídicas Castillo de Luna [507-542].
- GORDILLO, A. (2003): *Tratado de Derecho Administrativo*. Tomo 1, 8ª edición, Buenos Aires: F.D.A.
- GRAMCKOW, H. (2008): “Prosecutor organization and operations in the United States”. En: AA.VV., *Promoting prosecutorial accountability, independence and effectiveness*. Open Society Institute Sofia [387-432].
- GRANADOS PÉREZ, C. (1997): *Pasado, presente y futuro del Ministerio Fiscal*. *Revista del Ministerio Fiscal*, n. 4. Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, pp. 7-21.
- GRANADOS, F. (1989): *El Ministerio Fiscal. Del presente al futuro*. Madrid: Tecnos.
- GRAU, M. (2011): “El marco teórico de la gobernanza multi-nivel”. En: STAVRIDIS, S., CANCELA OUTEDA, C., PONCE DE LEÓN, C., GUARDATTI, G. A.: *Gobernanza global multi-nivel y multi-actor: ejemplos de Europa, el Mediterráneo y América Latina*. Zaragoza: Pressas Universitarias de Zaragoza [25-32].
- GRAY, J. (2013): *Cachorros de palha*. Rio de Janeiro: Record.
- GRINOVER, A. P. (1990): “A tutela jurisdiccional dos interesses difusos no direito comparado”. En: GRINOVER, A. P.: *Novas tendências do direito processual - de acordo com a Constituição de 1988*. Rio de Janeiro: Forense Universitária.
- GRINOVER, A. P. (1996) *O processo em evolução*. Rio de Janeiro: Forense Universitária.

- GROHMANN, L. G. M. (2001): “A Separação de poderes em países presidencialistas: A América Latina em perspectiva comparada”. *Revista de Sociologia e Política*, n. 17, nov., pp. 75-106.
- GROPPI, T. (2004): “La legittimazione della giustizia costituzionale. Una prospettiva comparata”. En: GAMBINO, S. (edit.): *La magistratura nello stato costituzionale. Teoria ed esperienze a confronto*. Milano: Giuffrè [297-312].
- GUARNIERI, C. y PEDERZOLI, P. (1999): *Los jueces y la política. Poder Judicial y democracia*. Madrid: Taurus.
- GUIBERT OVEJERO-BECERRA, S. G. (2017): *El Ministerio Fiscal en el siglo XXI*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- GUTIÉRREZ DE CABIEDES HIDALGO DE CAVIEDES, P. (2006): “Derecho procesal constitucional y protección de los intereses colectivos y difusos”. En FERRER MAC-GREGOR, E. (coord.), *Derecho procesal constitucional*. Tomo III. México, D.F.: Porrúa.
- GUZMÁN, N. (2011): *La verdad en el proceso penal. Una contribución a la epistemología jurídica*. Buenos Aires: Editores del Puerto s.r.l.
- HABERMAS, J. (1989): *El discurso filosófico de la modernidad*. Madrid: Taurus.
- HABERMAS, J. (1999): *Teoría de la Acción Comunicativa*. Tomo I. Madrid: Taurus.
- HAMPSHIRE, S. (2002): *La justicia es conflicto*. Madrid: Siglo XXI de España.
- HAN, B. C. (2013): *La sociedad de la transparencia*. Barcelona: Herder.
- HASSEMER, W. (2008) *Direito Penal: fundamentos, estrutura, política*. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor.
- HASSEMER, W. (2013) “Desenvolvimentos previsíveis na dogmática do Direito Penal e na Política Criminal”. *Revista Eletrônica de Direito Penal e Política Criminal*, UFRGS, vol. 1, n.º 1, pp. 37-46.
- HAYEK, F. A. (1945): “The Use of Knowledge in Society”. *American Economic Review*, XXXV, n. 4, pp. 519-530 [<http://www.econlib.org/library/Essays/hykKnw1.html>].
- HÉLIE, F. (1845): *Traité de l'instruction criminelle, première partie*. Paris: Charles Hingay.
- HEYDON J.D. (1971): “Obtaining evidence versus protecting the accused:

- two conflicts”. *Crim. Law Rev.*, 13, pp. 13-34.
- HILLYARD, P., PANTAZIS, C., TOMBS, S. y GORDON, D. (2004): *Beyond Criminology: taking harm seriously*. London, Pluto Press.
- HIRSCHL, R. (2004): *Towards juristocracy: the origins and consequences of the new constitutionalism*. Cambridge: Harvard University Press.
- HISPALIS, G. (2005): “Pourquoi tant de loi(s)?”. *Pouvoirs*, n. 114, pp. 101-115.
- HUERGO LORA, A. (2000): *La resolución extrajudicial de conflictos en el derecho administrativo: la transacción, el arbitraje y la reforma de los recursos administrativos*. Bolonia: Real Colegio de España.
- HUERTAS CONTRERAS, M. (1995): *El Poder Judicial en la Constitución española*. Granada: Universidad de Granada.
- IGNATIEFF, M. (2014): *Fuego y cenizas. Éxito y fracaso en política*. Madrid: Taurus.
- INNERARITY, D. (2006): *El nuevo espacio público*. Espasa: Madrid.
- INNERARITY, D. (2013): *Un mundo de todos y de nadie. Piratas, riesgos y redes en el nuevo desorden global*. Barcelona: Paidós.
- INNERARITY, D. (2015): *La política en los tiempos de indignación*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
- JAKOBS, G. (1997): *Estudios de Derecho Penal*. Madrid: UAM: Civitas.
- JIMÉNEZ ASENSIO, R. (2016): *Los frenos del poder. Separación de poderes y control de las instituciones*. Madrid: Marcial Pons.
- JIMÉNEZ ASENSIO, R. (2017): *Cómo prevenir la corrupción. Integridad y transparencia*. Madrid: Catarata.
- JIMÉNEZ DE PARGA, M. (1997): “La corrupción en la democracia”. En: LAPORTA, F. J., ÁLVAREZ, S. (edits.): *La corrupción política*. Madrid: Alianza, D.L. [135-156].
- JIMÉNEZ DÍAZ, J. F. (2016): “Crisis económica, confianza institucional y liderazgos políticos en España. *Barataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales*, n. 15, pp. 125-141.
- JOHNSON, R. A. (2004): *Struggle against corruption: a comparative study*. New York: Palgrave MacMillan.
- JOHNSON, S. (2009): “The quiet coup”. *The Atlantic Online*, mayo [<https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2009/05/the-quiet-coup/307364/>].



- JOS, P. H; TOMPKINS, M. E. (2004): "The accountability paradox in an age of reinvention: the perennial problem of preserving character and judgment". *Administration & Society*, Beverly Hills; 36.3, pp. 255-281.
- JUDICIAL SERVICES OFFICE (2016): *The Federal Court system in the United States. An Introduction for Judges and Judicial Administrators in Other Countries*. Washington, D.C. Department of Program Services Administrative Office of the United States Courts Thurgood Marshall Federal Judiciary Building. 4th Edition.
- KAMISAR, Y., LAFAVE, W. R., & ISRAEL, J. H. (1986): *Modern criminal procedure: Cases, comments, and questions*. St. Paul, Minn: West Pub. Co.
- KELSEN, H. (2002): *Esencia y valor de la democracia*. Granada: Comares.
- KERCHE, F. (2003): *O Ministério Público no Brasil: autonomia, organização e atribuições*. Tese de Doutorado, Dept. Ciência Política, USP.
- KERCHE, F. (2005): "Agências responsáveis pela ação penal: um estudo comparativo". *Revista Brasileira de Ciências Criminais*, São Paulo, SP, v. 54, pp. 127-152.
- KERCHE, F. (2007) "Autonomia e discricionariedade do Ministério Público no Brasil". *Dados*, Rio de Janeiro, v. 50, n. 2, pp. 259-279.
- KERCHE, F. (2009): *Virtude e Limites. Autonomia e atribuições do Ministério Público no Brasil*. São Paulo: Educ.
- KIAI, M. y VIZE, J. (2014). "Three Years after Tunisia: Thoughts and Perspectives on the Rights to Freedom of Assembly and Association from the United Nations Special Rapporteur Maina Kiai". *Journal of Global Ethics*, n. 10 (1), pp. 114-121.
- KIPNIS, K. (1979): "Plea bargaining: a critic's rejoinder". *Law and Society Review*, Beverly Hills, Calif. Vol. 13, n. 2, pp. 555-564.
- KLITGAARD (1991): *Controlling corruption*. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press.
- KOSELLECK. R. (1999): *Crítica e crise: uma contribuição à patogênese do mundo burguês*. Rio de Janeiro: EDUERJ: Contraponto.
- KOSKO, S. J. (2013): *Agency Vulnerability, Participation, and the Self-determination of Indigenous Peoples*. *Journal of Global Ethics*, 9 (3), pp. 293-310.
- KPMG (2007): "Profile of a Fraudster, Survey 2007". Zurich, Switzerland [[http://www.drasmuszodis.lt/sites/default/files/straipsniai/NR.6.Profile\\_of\\_a\\_Fraudster\\_Survey\\_KPMG.pdf](http://www.drasmuszodis.lt/sites/default/files/straipsniai/NR.6.Profile_of_a_Fraudster_Survey_KPMG.pdf)].

- KRASTEV, I. (2004): *Shifting Obsessions: Three Essays on the Politics of Anticorruption*. Budapest: Central European University Press.
- KROEZE, R., VITORIA, A. y GELTNER, G. (2018): "Introduction. Debating corruption and anticorruption in history". En: KROEZE, R., VITORIA, A. y GELTNER, G. (edits.): *Anticorruption in history: from antiquity to the modern era*. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press [1-17].
- KUNICOVA, J. y ROSE-ACKERMAN, S. (2005) "Electoral Rules and Constitutional Structures as Constraints on Corruption". *British Journal of Political Science*, v. 35, n. 4, pp. 573-606.
- LACCHÈ, L. (1988): *Latrocinium: giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime*. Milano: Giuffrè.
- LAMARCA PÉREZ, C. (1985): *Tratamiento jurídico del terrorismo*. Madrid: Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica.
- LAMBSDORFF, J. G. (2007): *The institutional economics of corruption and reform theory, evidence, and policy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- LANGBEIN, J. H. (1979) "Understanding the Short History of Plea Bargaining". *Law and Society Review*, 13, pp. 261-272.
- LANZAROTE MARTÍNEZ, P. A. (2008): *La autonomía del Ministerio Fiscal en el proceso penal y la reforma de su estatuto orgánico*. Madrid: La Ley.
- LANZÓN, J. G. (2005): *Imitación y experiencia*. Barcelona: Crítica.
- LAPORTA, F. J. (1997): "La corrupción política: introducción general". En: LAPORTA, F. J., ÁLVAREZ, S. (edits.): *La corrupción política*. Madrid: Alianza, D.L. [19-38].
- LAPORTA, F. J. (2005): "Globalización e imperio de la ley. Algunas dudas westfalianas". *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*, n. 9, (Ejemplar dedicado a: Globalización y derecho), pp. 177-198.
- LAPUENTE, V. (coord.) (2016): *La corrupción en España: un paseo por el lado oscuro de la democracia y el gobierno*. Madrid: Alianza, D.L.
- LARENZ, K. (1985): *Derecho justo: fundamentos de ética jurídica*. Madrid: Civitas.
- LARKINS, C. M. (1998): "The Judiciary and Delegative Democracy in Argentina". *Comparative Politics*, 30 (July), pp. 423-42.

- LATANZZI, R. (2011): “Riflessioni sul *whistleblowing*. Un modello da replicare ‘a occhi chiuse?’”. En: FRASCHINI, G., PARISI, N. Y RINOLDI, D.: *Il whistleblowing. Nuovo strumento di lotta alla corruzione*. Roma: Bonanno-Acireale [135-169].
- LAZARE, D. (1998): “*America the Undemocratic*”. *New left review*, I/232, November-December, pp. 3-31.
- LEITE, R. V. (2013): *Justiça consensual e efetividade do processo penal*. Belo Horizonte, Del Rey.
- LESSA, L. F. V. C. (2016): “A Cooperação Jurídica Internacional no Novo Código de Processo Civil”. En: PASSO CABRAL, A. do, PACELLI, E. y SCHIETTI CRUZ, R. (orgs.): *Coleção Repercussões do Novo CPC. V.13 - Processo Penal*. Salvador: Juspodivm [83-136].
- LEVENSON, L. L. (2013): “Peeking Behind the Plea Bargaining Process: Missouri v. Frye & Lafler v. Cooper”, *Loyola Law Review*, v. 46, pp. 457-490.
- LEVI, M. y SACKS, A. (2012): “Gobierno Eficaz, consentimiento ciudadano y, quizá, legitimidad”. En: PRZEWORSKI, A. y SÁNCHEZ-CUENCA, I. (eds.): *Democracia y socialdemocracia. Homenaje a Jose Maria Maravall*. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales [61-89].
- LEVINE, D. H. y MOLINA, J. E. (2007): “La calidad de la democracia en américa latina: una visión comparada”. *América Latina Hoy*, 45, pp. 17-46.
- LIJPHART, A. (1998): *Las democracias contemporáneas. Un estudio comparativo*. Barcelona: Ariel.
- LLERA, F. J. (2012). “Crisis y desafección política en la encrucijada andaluza”. *Foro de Expertos (Acta XV)*, Sevilla: Centro de Estudios Andaluces.
- LOEWENSTEIN, K. (1986): *Teoría de la Constitución*. Barcelona: Ariel.
- LOPES JR., A. (2006): *Sistemas de Investigação Preliminar no Processo Penal*. Rio de Janeiro, Lumen Juris.
- LOPES JR., A. y GLOECKNER, R. J. (2014): *Investigação preliminar no processo penal*. São Paulo: Saraiva.
- LOPES MEIRELLES, H. (1983): *Revista Justitia*, Ano 45, vol. 123, pp. 183-210.
- LOPES MEIRELLES, H. (1999) *Direito Administrativo Brasileiro*. São Paulo: Malheiros.
- LOPES, L. P. da M. y FABRICIO, B. F. (2005): “Discurso como arma de

- guerra: um posicionamento ocidentalista na construção da alteridade”. *DELTA*, São Paulo, 21:Especial, pp. 239-283.
- LÓPEZ AGUILAR, J. F. (1996): *La Justicia y sus problemas en la Constitución*. Madrid: Tecnos.
- LÓPEZ CALERA, N. (1997): “Corrupción, Ética y Democracia. Nueve tesis sobre la corrupción política”. En: LAPORTA, F. J., ÁLVAREZ, S. (eds.): *La corrupción política*. Madrid: Alianza, D.L. [117-135].
- LOSANO M. G. (2010): *Sistema e estrutura no direito*. LOSANO. São Paulo: Martins Fontes.
- LUCIANI, M. (2012): “Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo)”. *Rivista telematica giuridica dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, n. 3, pp. 1-22.
- LUHMANN, N. (2007): *La sociedad de la sociedad*. México DF: Herder.
- LUSTY, D. (2002): “Anonymous accusers: an historical and comparative analysis of secret witnesses in criminal trials”. *The Sydney Law Review*, vol. 24, n. 3, sept., pp. 361-426.
- MACFARLANE, B. (2001): “Sunlight and Disinfectants: Prosecutorial Accountability and Independence through Public Transparency”. *Criminal Law Quarterly*, 45, pp. 272-302.
- MADISON, J., HAMILTON, A. y JAY, J. (1993): *Os artigos federalistas, 1787-1788*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
- MAIER, J. B. J. (2000): “El ministerio público: ¿un adolescente?”. En: MAIER, J. B. J. (comp.): *El Ministerio Público en el proceso penal. Ley 23.984. Ubicación institucional. Organización. Facultades. Diseño procesal de la investigación preliminar. Fiscales y política criminal*. Buenos Aires: Ad-Hoc [17-36].
- MAINWARING, S. (2003): “Introduction: Democratic Accountability in Latin America”. En: MAINWARING, S. y WELNA, C. (eds.): *Democratic Accountability in Latin America*. Oxford: Oxford University Press [3-33].
- MAIR, P. (2015): *Gobernando el vacío*, Madrid: Alianza Editorial.
- MALAN, D. R. (2009): *Direito ao confronto no processo penal*. Rio de Janeiro: Lumen Juris.
- MALEM SEÑA, J. F. (1997): “El fenómeno de la corrupción”. En: LAPORTA, F. J., ÁLVAREZ, S. (eds.): *La corrupción política*. Madrid: Alianza, D.L. [71-90].

- MALEM SEÑA, J. F. (2000): “La corrupción política”. *Jueces para la Democracia*, 37, pp. 26-34.
- MALEM SEÑA, J. F. (2002): *La corrupción: aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos*. Barcelona: Gedisa.
- MALEM SEÑA, J. F. (2014): “La corrupción. Algunas consideraciones conceptuales”. *Illes i imperis: Estudios de historia de las sociedades en el mundo colonial y post-colonial*, n.º 16, [Ejemplar dedicado a: Corrupción, codicia y bien público en el mundo hispánico (Siglos XVIII-XX)], pp. 169-180.
- MALEM SEÑA, J. F. (2017): *Pobreza, corrupción, (in)seguridad jurídica*. Madrid: Marcial Pons.
- MALEM SEÑA, J. F. y SELEME, H. O. (2013): “Patologías de la división de poderes. *Doxa: Cuadernos de filosofía del derecho*, N.º 36, pp. 275-296.
- MANCUSO, R. de C. (2010): “A resolução dos conflitos e a função judicial no contemporâneo Estado de Direito (nota introdutória)”. *Processos Coletivos, Porto Alegre, vol. 1, n. 2, 01 jan [http://www.processoscoletivos.com.br/doutrina/19-volume-1-numero-2-trimestre-01-01-2010-a-31-03-2010/93-a-resolucao-dos-conflitos-e-a-funcao-judicial-no-contemporaneo-estado-de-direito-nota-introdutoria]*.
- MANDARINO, R. P. (2016): *Aspectos penais controversos da colaboração premiada*. São Paulo: IASP.
- MANIN, B. (1998): *Los principios del gobierno representativo*. Madrid: Alianza Editorial.
- MANIN, B., PRZEWORSKI, A. y STOKES, S.C. (1999): “Elections and representation”. En: MANIN, B., PRZEWORSKI, A. y STOKES, S.C. (eds.): *Democracy, accountability, and representation*. Nueva York: Cambridge University Press [29-54].
- MANTOVANI, F. (2007): “Il diritto penale del nemico, il diritto penale dell’amico, il nemico del diritto penale e l’amico del diritto penale”. *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, anno L, apr./sett., pp. 470–492.
- MANZANARES SAMANIEGO, J. L. (2007): *Mediación, reparación y conciliación en el Derecho Penal*. Comares: Granada.
- MARAVALL, J. M. (2003): *El control de los políticos*. Madrid: Taurus.
- MARCHISIO, A. (2008): *Principio de oportunidad, Ministerio Público y política criminal*. Buenos Aires: Ad-Hoc.

- MARCOLINI, S. (2005): *Il patteggiamento nel sistema della giustizia penale negoziata: l'accertamento della responsabilità nell'applicazione della pena su richiesta delle parti tra ricerca di efficienza ed esigenze di garanzia*. Milano: Giuffrè.
- MARINONI, L. G., ARENHART, S. C. y MITIDIERO, D. (2017): *Novo Código de Processo Civil Comentado*. São Paulo: Saraiva.
- MARK PAYNE, J., ZOVATTO, D. G., MATEO DÍAZ, M. (2006): *La política importa. Democracia y desarrollo en América Latina*. Washington, D.C.: BID/International IDEA.
- MARQUES NETO, F. de A. (2009): *Agências reguladoras independentes: fundamentos e seu regime jurídico*. Belo Horizonte: Fórum.
- MARQUES, M. C. (coord.) (2016): *Improbidade administrativa: temas atuais e controvertidos*. Rio de Janeiro: Forense.
- MARQUES, R. DO. R. DA C. (2005): *Regulação de Serviços Públicos*. 1. ed. Lisboa: Silabo.
- MARTIN, H-J. (1990): *Storia e potere della scrittura*. Bari: Laterza.
- MARTÍNEZ GONZÁLEZ, V. H. (2009): "Partidos políticos: un ejercicio de clasificación teórica". *Perfiles Latinoamericanos*, n. 33, pp. 39-63.
- MARTINS, P. S. (2011) *Lavagem de dinheiro transnacional e obrigatoriedade da ação penal*. Belo Horizonte: Arraes Editores.
- MARTUCCI P. (2006): *La Criminalità economica. Una guida per capire*. Laterza: Bari-Roma.
- MARZAL FELICI, J. y CASERO RIPOLLÉS, A. (2017): "Editorial. El fotoperiodismo en la era de la posverdad". *adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación*, n.13, pp. 11-17.
- MATTEI, U. y NADER, L. (2008): *Plumber: When the rule of law is illegal*. Oxford: Blackwell.
- MATTEUCCI, N. (1997): *Lo Stato Moderno. Lessico e percorsi*. Bologna: il Mulino.
- MATTEUCCI, N. (2010): *Breve storia del costituzionalismo*. Brescia: Morcelliana.
- MAZZILLI, H. N. (2002): "A natureza das funções do Ministério Público e sua posição no processo penal". *Revista dos Tribunais*, v. 91, n.º 805, nov., pp. 464-471.
- MAZZILLI, H. N. (2007): *A defesa dos interesses difusos em juízo*. São Paulo:

- Saraiva.
- MAZZILLI, H. N. (2012): *Introdução ao Ministério Público*. São Paulo: Saraiva.
- McCONVILLE, M. y MIRSKY, C. (2005): *Jury Trials and Plea Bargaining: A True History*. Oxford: Hart Publishing.
- McLEAN, I. (1996): *The Concise Oxford Dictionary of Politics*. Oxford: Oxford University Press.
- McMILLAN, J. y ZOIDO, P. (2004): “How to Subvert Democracy: Montesinos in Peru”. *Journal of Economic Perspectives*, 18(4), pp. 69-92.
- MEDEF (2017) : *Guide pratique: le dispositif anticorruption de la Loi Sapin II* [<http://www.medef.com/fr/content/guide-pratique-dispositif-anticorruption-de-la-loi-sapin-ii>].
- MEDEIROS, M. L. F. DE. (2017): *Denúncia Anônima: Instrumento de Proteção de Direitos Fundamentais no Brasil*. Belo Horizonte: Del Rey.
- MEDINA OSÓRIO, F. (2013): *Teoria da Improbidade Administrativa: má gestão pública – corrupção – ineficiência*. São Paulo: Revista dos Tribunais.
- MELLO, C. A. B. DE (2016): *Curso de Direito Administrativo*. São Paulo: Malheiros.
- MELO, A. L. A. DE. (2017): “Da não obrigatoriedade da ação penal pública”. En: SANCHES CUNHA, R., DIRCEU BARROS, F. y SOUZA, R. DO Ó (edits.): *Acordo de não persecução penal. Resolução n. 181/2017 do CNMP*. Salvador: Juspodium [149-192].
- MELO, C. (2018): “Relações governamentais: significado, funcionamento e problemas da democracia no Brasil. En: SELIGMAN, M. y MELLO, F. (orgs.): *Lobby Desvendado: democracia, políticas públicas e corrupção no Brasil contemporâneo*. Rio de Janeiro: Record [147-181].
- MENDES, G. F., MÁRTIRES COELHO, I. y GONET BRANCO, P. G. (2009): *Curso de Direito Constitucional*. 4ª. ed. São Paulo: Saraiva.
- MENDES, G. F. y GONET BRANCO, P. G. (2015): *Curso de Direito Constitucional*. 10ª ed. São Paulo: Saraiva.
- MERTON, R. K. (1968): *Social theory and social structure*. New York; London: The Free Press.
- MESSITTE, P. J. (2010): “Plea bargaining in various criminal justice systems” [[https://www.law.ufl.edu/\\_pdf/academics/centers/cgr/11th\\_conference/Peter\\_Messitte\\_Plea\\_Bargaining.pdf](https://www.law.ufl.edu/_pdf/academics/centers/cgr/11th_conference/Peter_Messitte_Plea_Bargaining.pdf)].
- MICHALOWSKI, R. y KRAMER, R. (2007): “State-corporate crime and

- criminological inquiry”. En: PONTELL, H and GEIS, G. (eds.): *International handbook of white-collar and corporate crime*. Boston, MA: Springer [200-219].
- MICHELS, R. (1991): *Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
- MIGUEL BÁRCENA, J. de (2009): *El Consejo de la Unión Europea: poder normativo y dimensión organizativa*. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters.
- MILITELLO, V. (2001) “Iniciativas supranacionales en la lucha contra la criminalidad organizada y el blanqueo en el ámbito de las nuevas tecnologías”. En: ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., MÉNDEZ RODRÍGUEZ, C. y DIEGO DÍAZ-SANTOS, M. R. (coords.): *Derecho Penal, sociedad y nuevas tecnologías*. Madrid: Colex [177-186].
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (2016): “La performance del sistema giudiziario italiano” [[http://www.italiadecide.it/public/documenti/2017/1/23012017\\_La\\_performance\\_del\\_sistema\\_giudiziario\\_italiano\\_v\\_2.0.pdf](http://www.italiadecide.it/public/documenti/2017/1/23012017_La_performance_del_sistema_giudiziario_italiano_v_2.0.pdf)].
- MIRANDA, J. (2016): “Sistema Político e Riscos de Erosão do Regime Democrático”. *Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro*, vol. 62, pp. 81-89.
- MIRANDA, J. (2017): “Constituição e Democracia”. *Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro*, vol. 65, pp. 61-84.
- MISHLER, W. y SHEEHAN, R. S. (1994). “Response: Popular Influence on Supreme Court Decisions”. *The American Political Science Review*, Vol. 88, n. 3, p. 716–724.
- MODESTO, P. (1997): “Reforma administrativa e marco legal das organizações sociais no Brasil. As dúvidas dos Juristas sobre o modelo das Organizações Sociais”. *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, 210, pp. 195-212.
- MOHALLEM, M. F. y RAGAZZO, C. E. J. (2017): *Diagnóstico institucional: primeiros passos para um plano nacional anticorrupção*. Rio de Janeiro: Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas.
- MONTANARI, L. (2011): “L’indipendenza della magistratura in Europa: verso un modello comune di garanzie”. En: MAGRASSI, M. y TONIATTI, R. (orgs.): *Magistratura, giurisdizione ed equilibri*



- istituzionali. Dinamiche e confronti europei e comparati*. Milano: CEDAM [103-128].
- MONTELEONE, G. (2011): “El actual debate sobre las ‘orientaciones publicísticas’ del proceso civil. En: AROCA, J. M. (coord.): *Proceso civil e ideología. Un prefacio, una sentencia, dos cartas y quince ensayos: Moción de Valencia (2006), Declaración de Azul (2008)*. Valencia: Tirant lo Blanch [177-200].
- MONTESQUIEU, C. L. de S. B. de (1972) *Del espíritu de las leyes*, 1689-1755, Madrid: Tecnos, (imp.1980).
- MORAIS DA ROSA, A. y LOPES JÚNIOR, A. (2017): “Saldão penal e a popularização da lógica da colaboração premiada pelo CNMP”. *Conjur*, 22 de septiembre [<https://www.conjur.com.br/2017-set-22/limite-penal-saldao-penal-popularizacao-logica-colaboracao-premiada-cnmp>].
- MOREIRA NETO, D. de F. (1998): *Legitimidade e Discricionariedade: novas reflexões sobre os limites e controle da discricionariedade*. Rio de Janeiro: Forense.
- MORELLO, M. (2000): *Il nuovo processo penale: parte generale*. Padova: CEDAM.
- MORENO CATENA, V. (2005): “La orden europea de detención en España”. *Revista del poder judicial*, n. 78, págs. 11-38.
- MORENO CATENA, V. (2009): “El Ministerio Fiscal y la discrecionalidad en el ejercicio de la acción penal”. En: CARBONELL MATEU, J. C.; GONZÁLEZ CUSSAC, J. L.; y ORTS BERENGUER E. (dirs.), CUERDA ARNAU, M. L. (coord.): *Constitución, derechos fundamentales y sistema penal (Semblanzas y estudios con motivo del setenta aniversario del profesor Tomás Salvador Vives Antón)*. Tomo II. Valencia: Tirant lo Blanch [1423-1448].
- MORENO CATENA, V. (2014): *Fiscalía Europea y Derechos fundamentales*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- MORENO CATENA, V.; CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.; y GIMENO SENDRA, J. V. (1997): *Introducción al Derecho*. Madrid: Colex.
- MORÓN, M. S. (2010): “Legalidad y sometimiento a la ley y al derecho”. En: Pastor, J. A. S. (dir.): *Los principios jurídicos del Derecho Administrativo*. Madrid: La Ley [55-72].
- MOROSINI, P. (2012): *Le mafie, le leggi, i giudici*. En: CICONTE, E.; FOR-

- GIONE, F.; SALES, I. (a cura di): *Atlante delle mafie. Storia, economia, società, cultura. Volume primo*. Soveria Mannelli: Rubbettino [243-281].
- MOROZOV, E. (2011): *The net delusion. The dark side of internet freedom*. New York: Public Affairs.
- MOSSUZ-LAVAU, J. (2010): “Argent, politique et corruption”. En: LASCOUMES, P. (dir.): *Favoritisme et corruption à la française. Petits arrangements avec la probité*. Paris: Presses de Sciences Po [199 a 218].
- MUÑOZ CONDE, F. (2003): *La búsqueda de la verdad en el proceso penal*. Buenos Aires: Hammurabi.
- MUÑOZ CONDE, F. (2008): *De las prohibiciones probatorias al Derecho procesal penal del enemigo*. Buenos Aires: Hammurabi.
- MUÑOZ CONDE, F. y GARCÍA ARÁN, M. (2002): *Derecho Penal: parte general*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- MURCIA RAMOS, B. (2012): *El enriquecimiento ilícito y la extinción de dominio*. Colombia: Grupo Editorial Ibáñez.
- MUSACCHIO, V. (2013): “Corrupción política y criminalidad organizada peligrosas connivencias”. *Revista General de Derecho Penal*, n.º. 20.
- NAÍM, M. (2016): “¿Por qué a los dictadores les gusta parecer demócratas?”. *El País*, 22 de abril [[http://elpais.com/elpais/2017/04/22/opinion/1492876508\\_593229.html](http://elpais.com/elpais/2017/04/22/opinion/1492876508_593229.html)].
- NALINI, J. R. (2004): “Os três eixos da reforma do Judiciário”. *Revista do Advogado*, São Paulo, AASP, n. 75, pp. 67-72.
- NEGRETTO, G. L. (2009): “Hacia una nueva visión de la separación de poderes en América Latina”. En: CARBONELL, M. y VAZQUEZ, R. (comps.): “El Estado de Derecho. Dilemas para América Latina”. Lima: Palestra Editores [183-220].
- NEGRI, D. (2017): “Best Practices and Operational Models in Financial-Economic Investigations in Europe in View of the EPPO”. En: BERNARDI, A. y NEGRI, D.: *Investigating European Fraud in the EU Member States*. Oxford and Portland, Oregon: Hart [149-167].
- NEUMANN, U. (2003): “Alternativas al derecho penal”. En: ARROYO ZAPATERO, L. A., NIETO MARTÍN, A. y NEUMANN, U.: *Crítica y justificación del derecho penal en el cambio de siglo: el análisis crítico de la Escuela de Frankfurt*. Cuenca: Ediciones de la Universidad Castilla-La Mancha [201-214].
- NICOLÁS MARCHAL ESCALONA, A. (2011): *Manual de lucha contra la*

- droga*. Cizur Menor -Navarra: Aranzadi.
- NIETO GARCÍA, A. “Corrupción: delitos y faltas”. *El País*, 5 de junio [[http://politica.elpais.com/politica/2016/06/02/actualidad/1464858085\\_272278.html](http://politica.elpais.com/politica/2016/06/02/actualidad/1464858085_272278.html)].
- NIETO GARCÍA, A. (1991): “La Administración sirve con objetividad los intereses generales”. En: MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, S. (coord.): *Estudios sobre la Constitución española. Homenaje a Eduardo García de Enterría*, vol. III. Madrid: Editorial Civitas [2185-2254].
- NIETO GARCÍA, A. (1997): *Corrupción en la España democrática*. Barcelona: Editorial Ariel.
- NIETO GARCÍA, A. (2003): *La "nueva" organización del desgobierno*. Barcelona: Ariel.
- NIETO GARCÍA, A. (2008): *El desgobierno de lo público*. Barcelona: Editorial Ariel.
- NIETO GARCÍA, A. y GORDILLO, A. (2003): *Las limitaciones del conocimiento jurídico*. Madrid, Trotta.
- NIETO MARTÍN, A. (2015): “Cumplimiento normativo, criminología y responsabilidad penal de personas jurídicas”. En: NIETO MARTÍN, A. (dir.): *Manual de cumplimiento penal de la empresa*. Valencia: Tirant lo Blanch [50-110].
- NIETO MARTÍN, A., (2015): “Investigaciones internas” En: NIETO MARTÍN, A. (dir.): *Manual de cumplimiento penal de la empresa*. Valencia: Tirant lo Blanch [231-274].
- NIETO, A. MARTÍNEZ (1998): “El control de los actos políticos y discrecionales en el nuevo proceso contencioso administrativo”. *Actualidad Administrativa*, Sección Doctrina, n. 47, pp. 1037-1059.
- NIEVA FENOLL, J. (2013): *Proceso penal y delitos de corrupción (Algunas bases para la reforma estructural del proceso penal)*. *Revista para el análisis del derecho InDret*, 2, pp. 1-22.
- NORTH, D. (1991): “Institutions”. *The Journal of Economic Perspectives*, Vol. 5, N. 1. (Winter, 1991), pp. 97-112.
- NORTH, D. (2010): *Understanding the Process of Economic Change*. Princeton: Princeton University Press.
- NOVELINO, M. (2016): “O Supremo Tribunal Federal brasileiro e a opinião pública”. *Revista do Ministério Público*, Portugal, n. 146, pp. 77-107.

- NOVERSA LOUREIRO, F. (2009): “A (i)mutabilidade do paradigma processual penal respeitante aos direitos fundamentais em pleno século XXI”. En: FERREIRA MONTE, M. (coord.): *Que futuro para o direito processual penal? Simpósio em homenagem a Jorge de Figueiredo Dias, por ocasião dos 20 anos do Código de Processo Penal Português*. Coimbra: Coimbra Editora [269-289].
- NUCCI, G. de S. (2008): *Código de Processo Penal Comentado*. São Paulo: Revista dos Tribunais.
- NYE, J. S. (2002): “Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis”. En: HEIDENHEIMER, A. J. y JOHNSTON, M. (eds.): *Political corruption: concepts & contexts*. New Brunswick; London: Transaction Publishers [281-300].
- NYE, J. S. (2004): *Soft Power: the means to success in world politics*. New York: Public Affairs.
- O'DONNELL, G. (1994): “Delegative Democracy”. *Journal of Democracy*, Vol. 5, N. 1. National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press, pp. 55-69;
- O'DONNELL, G. (2004): “Accountability horizontal: la institucionalización legal de la desconfianza política”. *Revista Española de Ciencia Política*, n. 11, pp. 11-31.
- O'DONNELL, G. (2008): “Hacia un Estado de y para la Democracia”. En: MARIANI, R.: *Democracia/Estado/Ciudadanía. Hacia un Estado de y para la Democracia en América Latina*. Serie Contribuciones al Debate. Volumen II. Lima: PNUD [25-62].
- O'TOOLE, L. J. (2005): “Las implicaciones para la democracia de una burocracia en red”. En: I MARTÍNEZ, A. C.: *La gobernanza hoy: 10 textos de referencia*. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) [245-262].
- O'KELLY, C. (2017): “Whose Corruption? Which Law? Law's Authority and Social Power”. En: ANECHIARICO, Frank (edit). *Legal but corrupt: a new perspective on public ethics*. Lanham, Md: Lexington Books [55-79].
- OECD (2016): “Committing to effective whistleblower protection”, 16 de febrero [[https://read.oecd-ilibrary.org/governance/committing-to-effective-whistleblower-protection\\_9789264252639-en#page106](https://read.oecd-ilibrary.org/governance/committing-to-effective-whistleblower-protection_9789264252639-en#page106)].
- OECD. (2017): *Trust and Public Policy: how better governance can help rebuild public trust*. Paris: OECD Publishing.

- OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (2016): *Guía de recursos sobre buenas prácticas en la protección de los denunciantes* [[https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2016/16-02538\\_S\\_ebook.pdf](https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2016/16-02538_S_ebook.pdf)].
- OLIVA SANTOS, A., ARMENTA DEU, T. y CALDERÓN CUADRADO M. P. (coords.) (2007): *Garantías fundamentales del proceso penal en el espacio judicial europeo*. Madrid: Cóllex.
- OLIVEIRA, J. M. F. (2015): “A urgência de uma legislação *whistleblowing* no Brasil”. *Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado*, pp. 1-17 [<https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td175>].
- OLSEN, J. P. (2008): “The ups and downs of bureaucratic organization”. *Annu. Rev. Polit. Sci.*, 11, pp. 13-37.
- ORTIZ PRADILLO, J. C., (2015): “El difícil encaje del delator en el proceso penal”. *Diario La Ley*, n. 5860, pp. 1-10.
- ORTIZ PRADILLO, J. C. (2017): “La delación premiada en España: instrumentos para el fomento de la colaboración con la justicia”. *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, Porto Alegre, vol. 3, n. 1, pp. 39-70.
- OSTI, A. (2010) : “La neo istituita Supreme Court del Regno Unito: il punto di arrivo di una riforma volta a 'dimostrare' l'indipendenza del potere giudiziario”, *Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, N.00 del 02.07 [<file:///Users/adrianoassis/Downloads/Osti001.pdf>].
- OSTROGORSKI, M. (2008): *La democracia y los partidos políticos*. MADRID. Trotta.
- PACE, A. y ANDRÉS IBÁÑEZ, P. (2010): *Inmunidad del poder en Italia*. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo.
- PACELLI, E. y FISCHER, D. (2010): *Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência*. Rio de Janeiro: Lumen Juris.
- PALOMBELLA, G. (2006): “El abuso del derecho, del poder y del Rule of Law”. *Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho*, 29, pp. 33-57.
- PARMENTIER, S., FIJNAUT, C. y VAN DAELE, D. (2000): “From Sisyphus to Octopus: Towards a Modern Public Prosecutor’s Office in Belgium”. *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, Vol. 8/3, 154–186.
- PARRA, J. L. (coord.) (2013): *Study on judicial cooperation, mutual legal as-*

- sistance and extradition of drug traffickers and other drug-related crime offenders, between the EU and its Member States and Latin American and Caribbean (LAC) countries.* Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- PASQUINO, G. (2010): "Democrazia, elezioni, partiti". En: BOVERO, M. y PAZÉ, V. (coords.): *La Democrazia in Nove Lezioni*. Roma-Bari: Laterza [21-45].
- PASQUINO, P. (2009): "Il potere costituente, il governo limitato e le sue origini nel nuovo mondo". *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, 02, pp. 311-324.
- PASSAS, N. (1990): "Anomie and corporate deviance". *Crime, Law and Social Change*, 14(2), pp. 157-178.
- PAVANI, G. y PENNICINO, S. (2011): "Chiave di lettura". En: PEGORARO, L., PAVANI, G. y PENNICINO, S. (orgs.): *Chi controlla le elezioni? Verifica parlamentare dei poteri, Tribunali, Commissioni indipendenti*. Bologna: Bologna University Press [15-17].
- PAWLIK, M. (2016): *Ciudadanía y derecho penal Fundamentos de la teoría de la pena y del delito en un Estado de libertades*. Barcelona: Atelier.
- PEDROSO GOULART, M. (2010): "Princípios institucionais do Ministério Público". En: ALVES RIBEIRO, C. V. (org.): *Ministério Público: reflexões sobre princípios e funções institucionais*, São Paulo: Atlas [164-180].
- PENALVA, E. P. (1996): "Crisis y alternativas en la justicia civil". En: IBÁÑEZ, P. A. (coord.): *Corrupción y Estado de Derecho. El papel de la jurisdicción*. Madrid: Trotta [151-172].
- PEREDA BELTRAN, N. y TAMARIT SUMALLA, J. M. (2013): *Victimología: teórica y aplicada*. Barcelona: Huygens.
- PEREIRA, F. C. (2013): *El agente infiltrado desde el punto de vista del garantismo procesal penal*. Curitiba: Juruá Editora.
- PEREIRA, F. C. (2015): *Crime organizado e sua infiltração nas instituições governamentais*. São Paulo: Atlas.
- PÉREZ LUÑO, A. E. (2004): *Los derechos fundamentales*. 8. ed. Madrid: Tecnos.
- PÉREZ LUÑO, A. E. (2010): *Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución*. Madrid: Tecnos.

- PÉREZ-CRUZ MARTÍN, A., SUÁREZ ROBLEDANO, J. M. (2015): *Independencia Judicial y Consejos de la Judicatura y Magistratura* (Europa, EE.UU. e Iberoamérica). Barcelona: Atelier.
- PERRODET, A. (2001): *Étude pour un Ministère Public européen*. Paris: L.G.D.J.
- PERTENCE, S. (1994): *Revista Trimestral de Jurisprudência*, 147/133, Brasília.
- PETERS, A. (2018): “Corrupción y derechos humanos”. En: TABLANTE, C. y MORALES ANTONIAZZI, M. (dirs.): *Impacto de la corrupción en los derechos humanos*. Querétaro: Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro [23-82].
- PHILP, M. (1987): “Defining Corruption: an analysis of the republican tradition”. *Mesa redonda de investigación de la Asociación Internacional de Ciencias Políticas sobre financiación política y corrupción política*, Bellagio, Italia.
- PHILP, M. (2002): “Conceptualizing political corruption”. En: HEIDENHEIMER, A. J., JOHNSTON, M. (edits.): *Political corruption: concepts & contexts*. New Brunswick; London: Transaction Publishers [41-57].
- PICÓ i JUNOY, J. M (2011): “El derecho procesal entre el garantismo y la eficacia: Un debate mal planteado”. En: AROCA, J. M. (coord.): *Proceso civil e ideología. Un prefacio, una sentencia, dos cartas y quince ensayos: Moción de Valencia (2006), Declaración de Azul (2008)*. Valencia: Tirant lo Blanch [117-137].
- PISARELLO, G. (2009): “Estado de Derecho y crisis de la soberanía en América Latina: algunas notas entre la pesadilla y la esperanza”. En CARBONELL, M. y VAZQUEZ, R. (compiladores): *El Estado de Derecho. Dilemas para América Latina*. Lima: Palestra Editores [223-248].
- PIZZORUSSO, A. (2003): “Public prosecution and politics”, *Conference of Prosecutors General of Europe. 4th session organised by the Council of Europe in co-operation with the Prosecutor General of the Slovak Republic Bratislava, 01 - 03 June* [<https://rm.coe.int/conference-of-prosecutors-general-of-europe-4th-session-organised-by-t/168071c907>].
- POGREBINSCHI, T. (2012): *Judicialização ou representação? Política, direito e democracia no Brasil*. Rio de Janeiro: Elsevier.
- PORRAS RAMÍREZ, J. M. (2010): “Encuesta: corrupción política y derecho

- público”. *Revista Teoría y Realidad Constitucional*, Madrid, n. 25, pp. 15-55.
- PORTANOVA, R. (1999): *Princípios do processo civil*. Porto Alegre: Livraria do advogado.
- POZUELO PÉREZ, L. (2013): *La política criminal mediática. Génesis, desarrollo y costes*. Madrid: Marcial Pons.
- PRAÇA, S. y TAYLOR, M. M. (2014): “Inching Toward Accountability: The Evolution of Brazil's Anticorruption Institutions, 1985–2010”. *Latin American Politics and Society*, n. 56, pp. 27-48.
- PRADEL, J. (2004): “Il ruolo della volontà dell'autore di reato nella decisione sull'esercizio dell'azione penale. Un'analisi di diritto francese”. *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 4, pp. 945-960.
- PRADO, C. A. do. (2005): *Despenalização pela reparação de danos: a terceira via*. Leme: J.H. Mizuno.
- PRADO, L. R. (2010): *Curso de Direito Penal brasileiro*. São Paulo: Revista dos Tribunais.
- PRICE WATERHOUSE COOPERS (2009): “The Global Economic Crime Survey” [<https://www.pwc.com/gx/en/economic-crime-survey/pdf/global-economic-crime-survey-2009.pdf>].
- PRIETO NAVARRO, E. (2003): “Sobre los límites y posibilidades de la respuesta jurídica al riesgo”. En: AGRA, C., DOMÍNGUEZ, J. L., GARCÍA AMADO, J. A., HEBBERTECHT, P., RECASENS, A. (eds.): *La seguridad en la sociedad del riesgo: un debate abierto*. Barcelona: Atelier, D.L. [27-46].
- PRIETO SANCHÍS, L. (1998): *Ley, principios y derechos*. Madrid: Dykinson.
- PRIETO SANCHÍS, L. (2003): *Justicia constitucional y derechos fundamentales*. Madrid: Trotta, D.L.;
- PUBLIC CONCERN AT WORK (1996): “Whistleblowing, fraud & the European Union An analysis of the laws and practices in Europe which affect attitudes toward” [<http://www.pcaw.co.uk/law-policy/document-library?cat=w>].
- RAMÍREZ MURILLO DE LA CUEVA, P. (2010): “Encuesta: corrupción política y derecho público”. *Revista Teoría y Realidad Constitucional*, n° 25, Madrid, pp. 15-55.
- RAMOS MÉNDEZ, F. (2016): *Enjuiciamiento Criminal. Duodécima lectura constitucional*. Barcelona: Atelier.



- RAMOS, A. de C. (2017): “Cooperação jurídica internacional e o diálogo das fontes no direito internacional privado contemporâneo”. *Revista de la Secretaria del Tribunal Permanente de Revisión*, N.º 10; Octubre, pp. 56-72.
- RASSAT, M. L. (1967): *Le Ministère Public entre son passé et son avenir*, París: Bibliothèque de Sciences Criminelles.
- REISMAN, W. M. (1984): *¿Remedios contra la corrupción?: (cohecho, cruzadas y reformas)*. México: Crea.
- RINALDI, S. (2004): “Mafia, economia e istituzioni. Appunti di lavoro”. En: PÉREZ ÁLVAREZ, F. (coord.): *Serta: in memoriam Alexandri Baratta*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca [565-596].
- RIORDAN, S. (2005): “La nueva diplomacia”. *Foreign Policy*, edición española, n. 7, fev./mar., pp. 22-31.
- RITTEL, H.W.J. & WEBBER, M.M. (1973): “Dilemmas in a general theory of planning”. *Policy Sciences* 4, pp. 155-169.
- RIVERA ARDILA, R. (2014): *La extinción de dominio: [un análisis al Código de extensión de dominio]*. Bogotá: Leyer.
- RIVERO ORTEGA, R. (2003): *El Estado de Derecho latinoamericano. Integración económica y seguridad en Iberoamérica*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
- RIVERO ORTEGA, R. (2012): *La necesaria innovación en las instituciones administrativas. Organización, procedimiento, función pública, contratos administrativos y regulación*. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública.
- ROBINSON, P. H. (2012): *Principios distributivos del Derecho Penal: a quién debe sancionarse y en qué medida*. Madrid: Marcial Pons.
- RODRIGUES, J. A. C. (2012): *Um Ministério Público Europeu: algures entre o optimismo e a resistência?* São Paulo: Almedina.
- RODRIGUES, R. de M. (2014): *A Tutela da Vítima no Processo Penal Brasileiro*. Curitiba: Juruá.
- RODRÍGUEZ GARCÍA, N. (1996): “Medios de prueba restrictivos de derechos fundamentales. Las intervenciones telefónicas”. En: DIEGO DÍAZ-SANTOS, M. R., ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L. y FABIÁN CAPARRÓS, E. A.: *Conflicto social y sistema penal: (diez estudios sobre la actual reforma)*. Madrid: Editorial Constitución y Leyes, Colex [39-58].

- RODRÍGUEZ GARCÍA, N. (1997a): *El consenso en el proceso penal español*. Barcelona: José María Bosch.
- RODRÍGUEZ GARCÍA, N. (1997b): *La justicia penal negociada: experiencias de derecho comparado*. Salamanca: Universidad de Salamanca.
- RODRÍGUEZ GARCÍA, N. (2004): “La necesaria flexibilización del concepto de soberanía en pro del control judicial de la corrupción”. En: RODRÍGUEZ GARCÍA, N. y FABIÁN CAPARRÓS, E. A. (coords): *La corrupción en un mundo globalizado: análisis interdisciplinar*. Salamanca: Ratio Legis [241-275].
- RODRÍGUEZ GARCÍA, N. (2005) “Cooperação Judicial penal e Ministério Público Europeu”. *Revista dos Tribunais*, v. 834, págs. 456-467.
- RODRÍGUEZ GARCÍA, N. (2010): “La corrupción de funcionario público extranjero en el Derecho Penal chileno a la luz del convenio de la OCDE de 1997: aspectos procesales”. En: por EMILIO CHEYRE J., OLIVARES TRAMÓN, J. M., RODRÍGUEZ GARCÍA, N. (coords.): *Chile en el club de los países desarrollados*. España, Editorial Pontificia Universidad Católica de Chile [115-144].
- RODRÍGUEZ GARCÍA, N. (2013): “Corrupción, estado de derecho y poder judicial retos y límites de las iniciativas supranacionales e internacionales de asistencia y cooperación judicial penal”. En: BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. y BECHARA, A. E. L. S. (coords.): *Estudios sobre la corrupción: una reflexión hispano brasileña* [135-240].
- RODRÍGUEZ GARCÍA, N. (2017): “Dilemas en el diseño de una estrategia efectiva en la recuperación de activos procedentes de la corrupción”. En: RODRÍGUEZ GARCÍA, N. y RODRÍGUEZ LÓPEZ, F.: *Corrupción y desarrollo*. Valencia: Tirant lo Blanch [353-392].
- RODRÍGUEZ-VERGARA DÍAZ, Á. (2010): “Encuesta: corrupción política y derecho público”. *Revista Teoría y Realidad Constitucional*, n. 25, Madrid, pp. 15-55.
- ROIG TORRES, M. (2000) *La reparación del daño causado por el delito: aspectos civiles y penales*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- ROSANVALLON, P. (2007): *La contrademocracia: la política en la era de la desconfianza*. Buenos Aires: Manantial.
- ROSANVALLON, P. (2010): *La legitimidad democrática. Imparcialidad, reflexividad y proximidad*. Barcelona: Paidós.

- ROSANVALLON, P. (2015): *El buen gobierno*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Manantial.
- ROSE-ACKERMAN, S. (2001): *La corrupción y los gobiernos. Causas, consecuencias y reforma*. Madrid, Siglo XXI de España.
- ROSE-ACKERMAN, S. (2002): “Grand” corruption and the ethics of global business”. *Journal of Banking & Finance*, v. 26, n. 9, pp. 1889–1918.
- ROSE-ACKERMAN, S. (2005): “The challenge of poor governance and corruption”. *Revista Direito GV*, 0, pp. 207-266.
- ROSE-ACKERMAN, S. y BILLA, B. (2008): “Treaties and National Security”. *N.Y.U. J. Int’l L. & Pol.*, v. 40, pp. 437-496.
- ROSENBLOOM, D. H. (1983): “Rosenbloom, David H. “Public Administrative Theory and the Separation of Powers.” *Public Administration Review*, vol. 43, n.º 3, pp. 219–227.
- ROSSI, N. (2010): “Avvocato della polizia? Storia recente e minacce sul futuro del pubblico ministero”. *Questione Giustizia*, 1/2010, pp. 36-49.
- ROTBERG, R. I. (2017): *The corruption cure: how citizens and leaders can combat graft*. Princeton: Princeton University Press.
- ROTHSTEIN, B. y VARRAICH, A. (2017): *Making Sense of Corruption*. Cambridge University Press, New York.
- ROUSSEAU, J. J. (1990): *Contrato social*. Madrid: Espasa-Calpe.
- ROUSSEL, V. (2000): “Scandales politiques et transformation des rapports entre magistrature et politique”. *Droit et Societé*, n. 44/45, pp. 13-39;
- ROUSSEL, V. (2008) “Scandales et redéfinitions de la responsabilité politique. La dynamique des affaires de santé et de sécurité publiques”. *Revue française de science politique*, 2008/6 Vol. 58(6), pp. 953-983.
- ROXIN, C. (1992): “La reparación en el sistema de los fines de la pena”. En: MAIER, J. B. J. (comp.): *De los delitos y de a las víctimas*. Buenos Aires: Ad Hoc. [129-156].
- ROXIN, C. (1997): *Derecho Penal. Parte general*. T. I. Madrid: Civitas.
- ROXIN, C. (1999): “El proceso penal y los medios de comunicación”. *Revista del Poder Judicial*, núm. 55, pp. 73-94.
- ROXIN, C. (2000): *Derecho Procesal penal*. Buenos Aires: Editores del Puerto.
- ROXIN, C. (2003): *Derecho Procesal Penal*. Buenos Aires: Editores del Puerto.

- ROXIN, C. (2008): *Fundamentos político-criminales del Derecho Penal*. Buenos Aires: Editorial Hammurabi, S.L.
- ROXIN, C.; ARTZ, G.; y TIEDEMANN, K. (2007): *Introdução ao Direito Penal e ao Processo Penal*. Belo Horizonte: Del Rey.
- RUIZ RESA, J. D. (2000): “El concepto de interés en Ihering”. *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada*, n. 3, pp. 435-453.
- RUIZ VADILLO, E. (1994): *El principio acusatorio y su proyección en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo*. Madrid: Actualidad Editorial, S.A.
- RUZ GUTIERREZ, P. R. (2015): “Principales problemas procesales en la investigación de los procedimientos por corrupción”. *Cuadernos penales José María Lidón*, núm. 11, pp. 203-234.
- SALINAS JIMÉNEZ, J. y SALINAS JIMÉNEZ, M. del M. (2017): “Causas y efectos económicos de la corrupción”. En: RODRÍGUEZ GARCÍA, N. y RODRÍGUEZ LÓPEZ, F. (coords.): *Corrupción y desarrollo*. Valencia: Tirant lo Blanch [23-43].
- SANBORN., J. B., Jr. (1986): “A historical sketch of plea bargaining”. *Justice Quarterly*, V. 3, Issue 2, pp. 111-138.
- SÁNCHEZ VELARDE, P. (2017): “La colaboración eficaz y su importancia”. *El comercio*, 20 de Junio [<https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/colaboracion-eficaz-importancia-pablo-sanchez-velarde-435874>].
- SANDOVAL, I. E. (2010): “Papel de los informantes internos (*whistleblowers*) en el combate a la corrupción”. En: SILVA, R. M.: *Lo que todos sabemos de la corrupción y algo más*. México, D. F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM [199-210].
- SANTOS, M. P. D. (2016): *Colaboração (delação) premiada*. Salvador: Juspodivm.
- SANZ MULAS, N. (2018): *Política criminal: presente y futuro*. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez.
- SARMIENTO, C. B., CABEZAS, S., FORERO, A., BEIRAS, I. R., TAMAYO, I. V. (2012): “Debate epistemológico sobre el daño social, los crímenes internacionales y los delitos de los mercados”. *Revista de Derecho Penal y Criminología*, año II, N.º 6, pp. 49-73.
- SARTORI, G. (1998): *Homo videns. La sociedad teledirigida*. Madrid: Taurus.
- SARTORI, G. (2000): *Elementos de teoría política*. Madrid, Alianza.

- SARTORI, G. (2005): *Partidos y Sistemas de Partidos*. Madrid: Alianza Universidad.
- SAVIANO, R. (2010): *Vieni via con me*. Milano: Feltrinelli.
- SCARANCE FERNANDES, A. (2005): *Processo penal constitucional*. São Paulo: Revista dos Tribunais.
- SCHMIDT, E. (2008): *Los fundamentos teóricos y constitucionales del Derecho Procesal penal*. Córdoba (Argentina): Lerner.
- SCHOLTE, J. A. (2005): *Globalization. A Critical Introduction*. New York: Palgrave Macmillan.
- SCHUMPETER, J. A. (2006): *Capitalism, socialism and democracy*. Nuova Delhi: Surjeet Publications.
- SCHÜNEMANN, B. (2002): *Temas actuales y permanentes del Derecho Penal después del milenio*. Madrid: Tecnos.
- SCHÜNEMANN, B. (2004): “Cuestiones básicas de la estructura y reforma del procedimiento penal bajo una perspectiva global”. *Derecho Penal y Criminología*, Vol. 25, N.º. 76, pp. 175-198.
- SCHÜNEMANN, B. (2005): “O Direito Penal é a ultima ratio da proteção de bens jurídicos! Sobre os limites invioláveis do direito penal em um Estado de Direito liberal”. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*, ano 13, n. 53. São Paulo: RT, pp. 9-37.
- SCHÜNEMANN, B. (2013): “Um Olhar crítico ao modelo processual penal norte-americano”. En: GRECO, L. (coord.): *Estudos de direito penal, direito processual penal e filosofia do direito*. São Paulo: Marcial Pons [240-264].
- SCHWARTZ, B. (1991): *Administrative law*. Boston y Toronto: Little, Brown and Company.
- SCIANELLA, L. G. (2010): *Immunità Parlamentari. Profili storici e comparativi*. Torino: G. Giappichelli.
- SEN, A. (2010): *L'idea di giustizia*. Milano: Mondatori.
- SERRANO-PIEDECASAS FERNÁNDEZ, J. R. (1988): *Emergencia y crisis del Estado social: análisis de la excepcionalidad penal y motivos de su perpetuación*. Barcelona: PPU.
- SIDOTI, F. (2012): *Il crimine all'italiana. Una tradizione realista, garantista, mite*. Milano: Guerini.
- SILVA, F. R. A., (2016) “A construção de um processo penal cooperativo e a

- instalação do contraditório como direito de influência - aplicabilidade dos arts. 6.º e 10.º do novo Código de Processo Civil”. En: PASSO CABRAL, A. do, PACELLI, E. y SCHIETTI CRUZ, R. (orgs.): *Coleção Repercussões do Novo CPC. V.13 - Processo Penal*. Salvador: Juspodivm [67-80].
- SILVA, M. R. da. (2017) “A colaboração premiada como terceira via do direito penal no enfrentamento à corrupção administrativa organizada. *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, vol. 3, n. 1, jan./abr., pp. 285-314.
- SILVA SÁNCHEZ, J. M., PLANAS, R. R. y PASTOR MUÑOZ, N. (2016): “Estudio introductorio”. En: PAWLIK, M.: *Ciudadanía y derecho penal Fundamentos de la teoría de la pena y del delito en un Estado de libertades*. Barcelona: Atelier [17-32].
- SIMON, D. (1985): *La independencia del juez*. Barcelona: Ariel.
- SINGER, P. (1984): *Ética práctica*. Barcelona: Ariel.
- SLAUGHTER A.M. (2004): “Sovereignty and power in a networked world order”. *Stanford Journal of International Law*, v. 40, pp. 283-327.
- SOLL, J. (2014): *The Reckoning: Financial Accountability and the Rise and Fall of Nations*. New York: Basic Books.
- SOTO RODRÍGUEZ, M. L. (2012): “El arrepentimiento en el delito de tráfico de drogas. Artículo 376 del Código Penal”. *Diario La Ley*, n. 7856, de 11 de mayo.
- SOUZA, R. do Ó y DOWER, P. E. C. (2017): “Algumas respostas sobre o acordo de não persecução penal”. En: SANCHES CUNHA, R., DIRCEU BARROS, F. y SOUZA, R. DO Ó (edits.): *Acordo de não persecução penal. Resolução n. 181/2017 do CNMP*. Salvador: Juspodium [117-148].
- SOUZA, R. T. de. (2013): *Investigação criminal e vedação ao anonimato no sistema jurídico brasileiro*. Curitiba: Juruá Editora.
- STARR, S. (2007): “Extraordinary crimes at ordinary times: International Justice beyond crisis situations”. *Northwestern University Law Review*, Chicago, v. 101, n. 3, Spring, pp. 1257-1314.
- STRADELLA E. (2012): “Protezione dell’hate speech e tutela dell’espressione avente rilevanza pubblica negli Stati Uniti d’America: il caso Snyder vs. Phelps”. *STALS Research Paper*, n. 4.
- STRECK, L. L. (2012): *Verdad y consenso. De la posibilidad a la necesidad de respuestas correctas en Derecho*. Montevideo/Buenos Aires: IBdeF.

- STRECK, L. L. (2017): Interpretação da Constituição e alteração do texto da Constituição por decisão judicial. Ativismo Judicial. En: SALOMÃO LEITE, G., STRECK, L. L. y NERY JR., N. (orgs.): *Crise dos poderes da república. Judiciário, Legislativo e Executivo*. São Paulo: Revista dos Tribunais [209-224].
- SUÁREZ, S. G. (1995): *Los fiscales indianos. Origen y evolución del ministerio público*, Caracas: Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia.
- SUMMERS, R. (2009): “Los principios del Estado de Derecho en América Latina: algunas notas entre la pesadilla y la esperanza”. En: *El Estado de Derecho. Dilemas para América Latina*. CARBONELL, Miguel y VAZQUEZ, Rodolfo (Compiladores), Lima: Palestra Editores [43-72].
- SUNSTEIN, C. (2017): *Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton: Princeton University Press.
- SUXBERGER, A. H. G. (2017): “O acordo de não persecução penal: reflexão a partir da inafastabilidade da tutela jurisdicional”. En: SANCHES CUNHA, R., DIRCEU BARROS, F. y SOUZA, R. DO Ó (edits.): *Acordo de não persecução penal. Resolução n. 181/2017 do CNMP*. Salvador: Juspodium [87-107].
- SVENSSON, J. (2005): “Eight Questions about Corruption”. *Journal of Economic Perspectives*, v. 19, Number 3-Summer 2005-Pages 19-42.
- TABAK, B. M. (2014): “A Análise Econômica do Direito: Proposições Legislativas e Políticas Públicas”. *Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/ Senado*, outubro (Texto para Discussão n.º 157) [[www.senado.leg.br/estudos](http://www.senado.leg.br/estudos)].
- TACITUS, P. C. (2014): *The Annals*. Trad. Alfred John Church y William Jackson Brodribb. Adelaide: University of Adelaide [<https://ebooks.adelaide.edu.au/t/tacitus/t1a/complete.html>].
- TAIBBI, M. (2014): *The divide: American Injustice in the Age of the Wealth Gap*. New York: Spiegel & Grau.
- TAJADURA TEJADA, J. (1995): “Sobre los preámbulos de las leyes”. *Boletín Oficial del Parlamento de Navarra número 10*, de 11 de febrero.
- TAJADURA TEJADA, J. (1997): *La V República francesa*. Pamplona: EUNSA.
- TAJADURA TEJADA, J. (2007): *Cambio político en Francia: ¿Hacia la VI república?* *Revista de Derecho Político*, núm. 70, 2007, pp. 325-343.

- TARELLO, G. (1976). *Storia della cultura giuridica moderna: assolutismo e codificazione del diritto*. Bologna: Il Mulino.
- TAVARES FILHO, N. (2016): “Foro privilegiado: pontos positivos e negativos”. *Brasil: Câmara dos Deputados, julho* [<http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/28740>].
- TAVARES, A. R. (2004): “Democracia e Exercício do Poder: Apontamentos sobre a Participação Política”. *Revista Brasileira de Direito Constitucional*, vol. 3, jan-jun, pp. 351-378.
- TAVARES, A. R. (2011): “La crisi della legittimazione elettorale”. En: En: PEGORARO, L., PAVANI, G. y PENNICINO, S. (orgs.): *Chi controlla le elezioni? Verifica parlamentare dei poteri, Tribunali, Commissioni indipendenti*. Bologna: Bologna University Press [19-30].
- TAYLOR, M. M. y BURANELLI, V. C. (2007). “Ending-up in Pizza: Accountability as a problem of institutional arrangement in Brazil”. *Latin American Politics and Society*, v. 49, Issue 1, pp. 59–87.
- TEACHOUT, Z. (2014): *Corruption in America: from Benjamin Franklin’s snuff box to citizens united*. Cambridge: Harvard University Press.
- TEIXEIRA, C. A. (2000): *Princípio da oportunidade: manifestações e sede processual penal e sua conformação jurídico-constitucional*. Coimbra: Almedina.
- TICHENOR, P. J., DONOHUE, G. A. y OLIEN, C. N. (1970): “Mass media flow and differential growth in knowledge”. *The Public Opinion Quarterly*, 34, n. 2 pp. 159-170.
- TOCQUEVILLE, A. (2010): *La democracia en América*. Madrid: Trotta.
- TOCQUEVILLE, A. (1990) *La democracia en América*. Tomo I. Madrid: Alianza.
- TOMESCU-HATTO, O., LASCOUMES, P., LE HAY, V. y MICHELAT, GUY (2010): Les réactions sociales à la corruption. En: LASCOUMES, P. (dir.): *Favoritisme et corruption à la française. Petits arrangements avec la probité*. Paris: Presses de Sciences Po [219-243].
- TORRE, A. (2004): “Magistratura e potere dello stato: antiche e moderne esperienze britanniche”. En: GAMBINO, S. (edit.): *La magistratura nello stato costituzionale. Teoria ed esperienze a confronto*. Milano: Giuffrè [296-331].



- TORRES-DULCE, E. (2014): *El País*, 24 de abril. [[http://politica.elpais.com/politica/2014/04/23/actualidad/1398277916\\_401318.html?rel=rosEP](http://politica.elpais.com/politica/2014/04/23/actualidad/1398277916_401318.html?rel=rosEP)].
- TORRES, J. V. (1993): *Presunción de inocencia y prueba en el proceso penal*. Madrid: La Ley.
- TRANSPARENCY INTERNATIONAL (2010): *Whistleblowing: an effective tool in the fight against corruption*. Policy Position Report n.º 01/2010. [[http://www.transparency.org/whatwedo/publication/-policy\\_position\\_01\\_2010\\_whistleblowing\\_an\\_effective\\_tool\\_in\\_the\\_fight\\_again](http://www.transparency.org/whatwedo/publication/-policy_position_01_2010_whistleblowing_an_effective_tool_in_the_fight_again)].
- TRANSPARENCY INTERNACIONAL UK (2011a): *Corruption in the UK part two: Assessment of key sectors* [<http://www.transparency.org.uk/publications/corruption-in-the-uk-part-two-assessment-of-key-sectors/#.WvR6ay-PFfQ>].
- TRANSPARENCY INTERNACIONAL UK (2011b): *Corruption in the UK part three: National Integrity System Study* [<https://www.transparency.org.uk/publications/corruption-in-the-uk--part-three---nis-study/#.WvR8Ti-PFfQ>].
- TRANSPARENCY INTERNACIONAL UK (2013): *Anti-Corruption Scorecard — a mid-term assessment of the UK coalition government’s record on tackling corruption* [[http://www.transparency.org.uk/publications/anti-corruption-scorecard/#.WwaGRy\\_5RfQ](http://www.transparency.org.uk/publications/anti-corruption-scorecard/#.WwaGRy_5RfQ)].
- TUCCI, R. L. (2002): *Teoria do Direito Processual Penal - Jurisdição, Ação e Processo Penal (Estudo Sistemático)*. São Paulo: RT.
- TUSHNET, M. V. (2012): *¿Por qué la Constitución importa?* Bogotá: Universidad del Externado de Colombia.
- UBEDA-PORTUGUÉS, J. E. (2009): “Análisis de los efectos negativos de la delincuencia organizada en la sociedad internacional”. *Anales de la Universidad Metropolitana*, vol. 9, n. 2, pp. 63-82.
- URBINATI, N. (2010). *Democrazia rappresentativa. Sovranità e controllo dei poteri*. Roma: Donzelli.
- VALLADÃO, A. (1973): *Ministério Público: quarto Poder do Estado, e outros estudos jurídicos*. Rio de Janeiro: Freitas Bastos.
- VARANO, V. y BARSOTTI, V. (2010): *La tradizione giuridica occidentale*. Volume I. Torino: Giappichelli.
- VARESE, D. A. (1959): *Enciclopedia del Diritto*. Milano: Giuffrè Editore,

- VASCONCELLOS, V. G. de, (2015): *Barganha e justiça criminal negocial*. São Paulo: IBCCRIM.
- VASCONCELLOS, V. G. de y MOELLER, U. (2016): “Acordos no processo penal alemão: descrição do avanço da barganha da informalidade à regulamentação normativa”. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, nueva serie, año XLIX, núm. 147, septiembre-diciembre, pp. 13-33.
- VEGA GARCÍA, P. DE. (2003): “La eficacia frente a particulares de los derechos fundamentales (La problemática de la *Drittwirkung der Grundrechte*)”. *Responso Iurisperitorum Digesta*, Vol. 5, pp. 47-64.
- VEGA GARCÍA, P. de. (2006): “La eficacia frente a particulares de los derechos fundamentales (la problemática de la *Drittwirkung der Grundrechte*)”. En: E. FERRER MAC-GREGOR (coord.). *Derecho procesal constitucional*. Tomo III. México, D.F.: Porrúa.
- VENTURI, E. (2016): “Transação de direitos indisponíveis?” *Revista de Processo*, vol. 251, pp. 391-426.
- VERCHER NOGUERA, A. (2008): “Reflexiones sobre ministerio fiscal y la lucha contra la corrupción en medio ambiente”. En: RODRÍGUEZ GARCÍA, N. Y FABIÁN CAPARRÓS, E. A. (coords.): *Corrupción y delincuencia económica*, Bogotá: Ibáñez [447-466].
- VERNANT, J. P. (2005): *Los orígenes del pensamiento griego*. Barcelona; Buenos Aires; México: Paidós, D.L.
- VERREST, P. (2000). “The French Public Prosecution Service”. *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, v. 8 (3), pp. 210-244.
- VIANA PEIXOTO, M. G. (2016): *Vítimas e Controle Punitivo*. Rio de Janeiro: Lumen Juris.
- VIGANÒ, F. (2012): “Riflessioni de lege lata e ferenda su prescrizione e tutela della ragionevole durata del processo”. *Diritto Penale Contemporaneo*, [<http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1355831179VIGANO%202012a.pdf>].
- VILLAREJO, C. J. (1997): “Nuevas dimensiones de lo judicial: Transnacionalización de la delincuencia y persecución penal”. *Estudios de derecho judicial*, n. 6, pp. 59-106.
- VILLORIA MENDIETA, M. (2000): *Ética pública y corrupción: curso de ética administrativa*. Madrid: Tecnos, D.L.
- VILLORIA MENDIETA, M., e IZQUIERDO SÁNCHEZ, A. (2016): *Ética pública y buen gobierno: regenerando la democracia y luchando contra la*

- corrupción desde el servicio público*. Madrid: Tecnos.
- VILLORIA, M. (2005): “Corrupción y liderazgo público”. En: *VII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración: Democracia y Buen gobierno, gobierno* [[http://www.aecpa.es/uploads/files/congresos /congreso\\_07/area06/GT24/VILLORIA-MENDIETA-Manuel\(URJC\).pdf](http://www.aecpa.es/uploads/files/congresos /congreso_07/area06/GT24/VILLORIA-MENDIETA-Manuel(URJC).pdf)].
- VILLORIA, M. (2016): *El papel de la Administración Pública en la generación de calidad democrática*. Revista del CLAD Reforma y Democracia, n. 65, Jun., pp. 5-38.
- VIVES ANTÓN, T. S. (1995): *La libertad como pretexto*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- WALLACE, K.A (1999): “Anonymity”. *Ethics and information technology*, n.1, pp. 23–35.
- WAPNER, P. (2002): “Introductory essay: Paradise lost? NGOs and global accountability”. *Chicago Journal of International Law*, 3(1), pp.155-160.
- WARREN, M. E. (2005): “La democracia contra la corrupción”. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, enero-marzo, año/vol. XLVII, número 193, Universidad Nacional Autónoma de México Distrito Federal, México.
- WATERS, T. (2008): “Overview: Design and Reform of Public Prosecution Services”. En: AA.VV., *Promoting prosecutorial accountability, independence and effectiveness*. Open Society Institute Sofia [19-79].
- WEBER, M. (1964): *Economía y sociedad. I, Esbozo de sociología comprensiva*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- WEBER, M. (1991): *Escritos políticos*. Madrid: Alianza.
- WEBER, M. (2010): *Ciência e Política: duas vocações*. São Paulo: Cultrix.
- WINTER, L. B. (2015): “The potential contribution of a European Public Prosecutor in light of the proposal for a regulation of 17 July 2013”. *European Journal of Crime, Criminal Law & Criminal Justice*, Vol. 23 Issue 2, pp. 121-144.
- YBARRA BORES, A. (2006): “La implantación del principio de reconocimiento mutuo en el ámbito de las sanciones administrativas pecuniarias en la Unión Europea”. *Revista electrónica de estudios internacionales*, n. 11, pp. 1-26.
- ZAFFARONI, E. R. (2006): *El enemigo en el derecho penal*. Buenos Aires: Ediar, imp.

- ZAFRA ESPINOSA DE LOS MOTEROS, R. (2010): *El policía infiltrado, los presupuestos jurídicos en el proceso penal español*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- ZAGREBELSKY, G. (2003): *El Derecho dúctil: Ley, Derechos, Justicia*. Madrid: Trotta.
- ZAGREBELSKY, G. (2006): “Cinquanta anni di attività della Corte Costituzionale. Discorso del prof. Gustavo Zagrebelsky, Presidente emerito della Corte Costituzionale”. *Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, 27 de abril. [<http://archivio.rivistaaic.it/materiali/speciali/cinquanta/index.html>].
- ZAGREBELSKY, G. (2007). *Imparare la democrazia*. Torino: Einaudi.
- ZAGREBELSKY, G. (2010): *La difficile democrazia*. Firenze: Firenze University Press,
- ZAGREBELSKY, G. (2012): *Simboli al potere. Politica, fiducia, speranza*. Torino: Giulio Einaudi.
- ZAKARIA, F. (1997): “The Rise of Illiberal Democracy”. *Foreign Affairs*, Vol. 76, No. 6, pp. 22-43.
- ZANIER, M. L. (2012): *L'accusa penale in prospettiva socio-giuridica. Ruolo, processi decisionali e modalità d'azione del pubblico ministero*. Milano: Franco Angeli.
- ZANON, N. y BIONDI, F. (2011): *Il sistema costituzionale della magistratura*. Bologna: Zanichelli.
- ZOLO, D. (2007): *La justicia de los vencedores. De Nuremberg a Bagdad*. Madrid: Trotta.
- ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L. (2017): “Tratamiento jurídico penal de las sociedades instrumentales entre la criminalidad organizada y la criminalidad empresarial”. En: ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L. (dir.): *Criminalidad organizada transnacional: una amenaza a la seguridad de los estados democráticos*. Valencia: Tirant lo Blanch [197-246].



ANEXO  
*para la obtención del título de Doctor con  
“Mención Internacional”*

INTRODUÇÃO

Em 1988, a “Constituição Cidadã”<sup>1684</sup> do Brasil entrou em vigor. Novas instituições foram criadas e muitas das antigas foram renovadas. A partir desse momento, se impôs às Administrações Públicas o objetivo de serem guiadas pelos princípios constitucionais de legalidade, publicidade, impessoalidade, moralidade, eficiência<sup>1685</sup>, motivação<sup>1686</sup> e probidade<sup>1687</sup>. Além disso, o Ministério Público ressurgiu com garantias que o protegem da influência do poder político, se fortaleceu o Poder Judiciário e os Tribunais de Contas adquiriram competências antes inexistentes.

Foi nesse contexto que nossa trajetória profissional começou há mais de vinte anos no Ministério Público do Estado da Bahia. Desde o início, era evidente o contraste entre as *promessas constitucionais* e a *realidade*, cenário que foi possível experimentar tanto nas pequenas quanto nas grandes cidades, onde as práticas do nepotismo, compadrio, clientelismo e comportamentos corruptos em geral estavam normalizados. Os governantes seguiam sistemas normativos que não coincidiam com a nova Constituição para servir a interesses diferentes do bem público. Na prática, o Poder Judiciário estadual dependia do apoio administrativo da prefeitura local, sofria com o congestionamento de processos e a formação insuficiente de seus funcionários para lidar com os casos complicados de corrupção. Essa realidade nos motivou a

---

<sup>1684</sup> Expressão cunhada pelo então presidente da Assembleia Constituinte, deputado federal Ulisses Guimarães

<sup>1685</sup> Art. 37, *caput*.

<sup>1686</sup> Art. 93, X.

<sup>1687</sup> Sometendo, incluso, ao Presidente da República a escrutínio por crime de responsabilidade quando viola tal principio (art. 85.V).

buscar a clareza sobre o fenômeno da corrupção, suas causas, dinâmicas e consequências.

A inicial formação acadêmica, baseada na lógica “bom *versus* ruim” e circunscrita ao Direito Penal, não foi suficiente para preencher as lacunas em relação ao assunto. O “Mestrado em Corrupção e Estado de Direito” da Universidade de Salamanca, no seio do “Programa Oficial de Pósgraduação em Estado de Direito e Bom Governo”, forneceu-nos a oportunidade de estudar a corrupção como um fenômeno universal, globalizado, multidisciplinar e em busca contínua do aperfeiçoamento de soluções.

Um produto desse programa foi o trabalho de Dissertação de Mestrado intitulado “O Ministério Público no combate à corrupção política: entre lacunas, mal-entendidos, limites e possibilidades”, em que foi desenvolvida uma pesquisa que seguiu uma abordagem multidisciplinar do tema corrupção —em particular da corrupção política— e o papel do Ministério Público em suas variantes conformações, como responsável pela persecução penal deste tipo de crime. Assim, foi possível analisar esses temas desde a Ciência Política, a Economia, os diversos ramos do Direito e a Filosofia, entre outras áreas do conhecimento.

Esse trabalho nos levou a outras observações. Ficou claro que, como no Brasil e na América Latina<sup>1688</sup>, na Alemanha, França, Inglaterra, Itália, Espanha e Estados Unidos da América, países mais desenvolvidos, há uma preocupação com essa questão, que afeta a confiança na democracia e nas instituições em geral<sup>1689</sup>. Da mesma forma, constatou-se que é universal a dificuldade de se concretizar a legalidade penal em relação aos poderosos sujeitos públicos e privados, aspecto dependente, até certo ponto, da configuração adotada pelo Ministério Público de cada país. Por fim, foram percebidas as

---

<sup>1688</sup> Assim mostra o “*Latinobarómetro: informe 2017*”, publicado em Outubro de 2017 e disponível em <http://www.latinobarometro.org/LATDocs/F00006433-InfLatinobarometro2017.pdf>.

<sup>1689</sup> Em quanto a Europa, consulte-se, por exemplo, os dados recolhidos no “*Eurobarómetro: fichas informativas nacionais sobre atitudes ante a corrupção*”, publicado em 20.02.2018 e disponível em [https://ec.europa.eu/home-affairs/news/eurobarometer-country-factsheets-attitudes-corruption\\_en](https://ec.europa.eu/home-affairs/news/eurobarometer-country-factsheets-attitudes-corruption_en). Respeito dos Estados Unidos, viam-se os dados presentes na pesquisa “*US Corruption Barometer 2017*”, de Transparência Internacional, publicada em 12.12.2017 y disponível em [https://www.transparency.org/news/pressrelease/nearly\\_six\\_in\\_ten\\_americans\\_believe\\_the\\_us\\_became\\_more\\_corrupt\\_in\\_2017](https://www.transparency.org/news/pressrelease/nearly_six_in_ten_americans_believe_the_us_became_more_corrupt_in_2017).

profundas transformações que o processo penal vem vivenciando, o que despertou o interesse pela evolução dos instrumentos de cooperação interna e internacional e suas possibilidades no combate à corrupção política.

A presente Tese de Doutorado é um passo adiante no desafio de aprofundar a pesquisa sobre os tópicos mencionados anteriormente. Não se pretende oferecer soluções absolutas para todos os problemas apontados neste trabalho. Nem se pretende engajar em uma luta quixotesca contra os moinhos de vento ou avançar para o perigoso terreno das *cruzadas morais* ou da *bonismo*<sup>1690</sup> contra a corrupção política.

Esta tese tem como foco o Estado constitucional democrático de Direito como a principal vítima da corrupção política. Examinando elementos desse Estado, foi possível articular conjuntamente reflexões teóricas e práticas sobre os dois eixos principais da investigação: o Ministério Público e o processo penal, bem como as implicações de ambos na luta contra a corrupção política.

Os objetivos definidos foram dois. Por um lado, propor o desenho institucional de um modelo de Ministério Público considerado capaz de fazer frente à corrupção dos agentes políticos. Por outro lado, encontrar elementos para apoiar o caráter essencial de um processo penal cooperativo, onde a *vontade* exerce um papel fundamental na decisão dos rumos concretos do processo.

Para cumprir esses objetivos da pesquisa de doutorado, estudamos a literatura europeia e americana com maior profundidade; além disso, examinamos algumas ideias e práticas existentes em outros continentes. Uma revisão narrativa também foi realizada através de meios físicos e virtuais, consultando fontes bibliográficas várias, como monografias, livros, artigos de revistas, artigos de jornais e pesquisas de organizações internacionais públicas e privadas. O encontro com parte das fontes mencionadas ocorreu na Universidade de Salamanca e na *Facoltà di Giurisprudenza di Trento* durante uma estadia de pesquisa sob a orientação do professor Roberto Toniatti.

Como marco conceitual inicial para a pesquisa, foi escolhido um conceito de corrupção que, mesmo quando fincado em elementos centrais claros, é dotado da flexibilidade necessária para se adaptar às influências sociais, históricas, culturais e normativas que inevitavelmente o condicionam. Em coerência com essa perspectiva, foi adotado um quadro definidor de

---

<sup>1690</sup> BUSTOS GISBERT (2010: 69).



corrupção política que leva em consideração a dupla responsabilidade, jurídica e política, que pode incidir sobre os governantes corruptos e às repercussões das práticas políticas corruptas sobre a democracia.

Em seguida, consideramos relevante entender, em linhas gerais, o processo que levou a construção de instituições e medidas de controle do poder e como estas se desenvolveram. Este percurso, por um lado, proporciona um quadro teórico para entender o estado da arte em matéria de controle dos governantes. Por outro lado, clareia as zonas cinzentas acerca da execução das tríplexes funções estatais e da insuficiência de este esquema tripartido para responder às demandas atuais.

Seguindo o percurso mencionado, se chega ao Ministério Público considerado um ator central na contenção dos abusos de poder representados pela corrupção política. A partir do estudo da origem desta instituição, entra-se na investigação das diferentes garantias que podem assegurar sua autonomia e a independência de seus membros. Garantias essas que são colocadas em debate quando são contrastadas as relações do Ministério Público com o poder político e a liberdade de imprensa.

Posteriormente, o aspecto processual da luta contra a corrupção é colocado como objeto de verificação. Em princípio, um exame mais teórico, com o qual se trazem indagações e tentativas de respostas às mudanças no processo penal ao largo dos últimos dois séculos. Uma análise das influências da noção de interesse público e do papel relacionado aos juízes no processo penal adquire relevância para compreender as alternativas ao processo penal tradicional conformadas em uma maior disponibilidade da ação penal, a ampliação da discricionariedade do Ministério Público e a maior cooperação entre diferentes atores processuais incorporados como instrumentos de busca de melhores resultados concretos. O processo é avaliado de acordo com a perspectiva de PAWLIK<sup>1691</sup> sobre o dever de cooperação na teoria da pena e do crime em um Estado de liberdades. Além disso, o papel do processo penal em hipóteses que caracterizam a responsabilidade política terá que ser contextualizado.

Sobre a questão supracitada, se elabora acerca da posição do Ministério Público sobre questões-chave relativas à corrupção política. Também será

---

<sup>1691</sup> PAWLIK (2016).

realizada uma análise do comportamento adequado desta instituição nos casos em que a responsabilidade jurídica não exclua a política e as precauções necessárias para a preservação de seu papel institucional legítimo.

Agora com foco nos aspectos práticos, devemos perguntar sobre as aptidões do processo penal diante da corrupção política. Nessa linha de raciocínio, será indagado sobre o compromisso de harmonia que deve existir entre o Direito Penal e o processo penal. A título de ilustração, serão apresentados exemplos concretos da aplicação de um processo penal mais cooperativo produzido no âmbito da *Operação Lava Jato*, a conhecida questão de corrupção que ocorre no Brasil e que tem levado a numerosos investigações e julgamentos em vários países americanos e de outros continentes. Da mesma forma, se refletirá sobre a necessidade de utilizar o processo civil como um possível mecanismo capaz de gerar impactos positivos no combate à corrupção política.

Enfatizando o aspecto da cooperação no processo penal, invocaremos razões teóricas e práticas em relação a formas específicas de colaboração, importantes, em particular, para o persecução penal de corrupção política. Serão consideradas hipóteses de cooperação a partir de diferentes pontos de vista e executadas por diferentes atores processuais, com a produção de diferentes consequências no processo penal. A tensão entre eficiência e garantias processuais será colocada em discussão. Estes instrumentos são também debatidos tendo em conta as diferenças entre os sistemas do *common law* e do *civil law*.

Por fim, cabe mencionar que a hipótese deste trabalho terá uma linha crítica, mas também propositiva, ratificando modelos normativos existentes e indicando possíveis alternativas para alcançar as aspirações do Ministério Público e do processo penal. É devido ao empenho de anos de profissão e ao esforço empregado nesta pesquisa que se espera, com esta tese, contribuir para o debate e a consolidação de mecanismos institucionais mais adequados para a proteção do Estado democrático de direito diante dos danos causados pela corrupção política.

## CONCLUSÕES

**PRIMEIRA.** Dispor de um conceito jurídico de corrupção política é essencial para poder delimitar o âmbito de incidência da normatividade: serve de parâmetro para a implementação da persecução penal através do Ministério Público, bem como para a funcionalidade das garantias processuais dentro do marco de realização da responsabilidade jurídica dos sujeitos políticos. No entanto, é inegável reconhecer a limitação de qualquer conceito de corrupção, devido a que ele protege determinadas situações e, ao mesmo tempo, exclui outras, cujo conteúdo ético é mais do que duvidoso. A política conforma o Direito e a exclusão das normas legais de certos comportamentos apartados dos paradigmas éticos exigíveis dos políticos revela uma contradição que é difícil de resolver.

Por outro lado, o fato de o conceito de corrupção política ser um daqueles suscetíveis a receber fortes influências de sistemas normativos não jurídicos, possibilita sua adequação a novas realidades. A assunção dessa adequação pelo Direito depende da disposição de sujeitos políticos e dos incentivos — muito incertos — para que isso aconteça, tanto em um sentido positivo (que abarque práticas impróprias no campo do ilícito) quanto negativo (que relaxe ainda mais o controle jurídico sobre o poder político). Estes contextos excluídos nem sempre estão inseridos em âmbitos de ampla discricionariedade dos sujeitos públicos e configuram evidentes conflitos de interesses, privilégios e poderes abusivos forjados sob uma legalidade questionável. O estabelecimento de uma verdadeira responsabilidade política é um importante aliado para suplantar as limitações resultantes de um conceito jurídico de corrupção política.

**SEGUNDA.** O conceito de corrupção em geral, e de corrupção política em particular, tem um elemento central no substrato econômico. Mesmo quando o benefício obtido pelo corrupto — ou pelo corruptor — não tenha dimensão financeira e econômica imediata, mediatamente os efeitos do ato de corrupção se realizam com essa perspectiva de obter uma utilidade. Por outro lado, se a condição acima não for satisfeita, em qualquer caso, o aspecto econômico informa a lógica transacional sob a qual esse conceito é determinado. Essa condição, portanto, limita as possibilidades de que a luta contra a corrupção política atinja as verdadeiras raízes do problema. Respeitada essa limitação, cuja melhoria depende de uma profunda

mudança nas sociedades, o combate a essa corrupção, de acordo com o modo em que está configurado o conceito, exige que o foco de atenção do Direito e dos órgãos de controle do poder sejam direcionados não apenas para os sujeitos políticos, mas também para o comportamento dos sujeitos privados.

**TERCEIRA.** O Estado democrático de Direito é a maior vítima da corrupção política. Essa máxima, por si só, legitima o amplo esforço social no sentido de sua prevenção e repressão. As dimensões formal e substancial do Estado democrático de Direito se erodem profundamente quando esse fenômeno impera na sociedade. A receptividade das demandas sociais pelos sujeitos políticos enfraquece e, por outro lado, é reforçada para o cumprimento de acordos com os corruptos. Em termos práticos, acontece a subtração dos direitos dos cidadãos. A formação de uma identidade da cidadania como vítima da corrupção pode gerar movimentos coletivos de indignação e mobilização, motores de mudanças políticas e jurídicas. O empenho cidadão é essencial para que o Direito reconheça os novos postulados políticos de responsabilidade dos agentes políticos. Essa certeza que o Direito prevê é importante, dada a dificuldade de manter uma mobilização permanente das pessoas como meio de controle e monitoramento do poder. Daí o papel de uma cidadania educada, informada e ativa.

**QUARTA.** O alcance do conceito de corrupção política não pode ser expandido a fim de preencher as lacunas na implementação da responsabilidade política. A expansão do Direito Penal em tal caso seria aniquiladora da esfera política e de sua capacidade de moldar decisões discricionárias. A forma mais adequada de alterar o comportamento de sujeitos políticos pode vir de reformas na regulação dos partidos políticos e das regras do sistema político em geral que permita a presença mais acentuada da cidadania no processo de tomada de decisões e de fiscalização dos negócios públicos. Um sistema de múltiplos incentivos deve ser desenvolvido para esta finalidade. Deve ser incrementado o reforço dos instrumentos individuais e, em particular, coletivos de exigência de receptividade das demandas cidadãs pelos políticos. Assim, se criam alternativas à mera responsabilidade dos sujeitos políticos, que deve ser reservada para situações de gravidade maior, aumentando, portanto, a qualidade da democracia.

**QUINTA.** O controle do poder político não pode permanecer exclusivamente nas mãos do corpo eleitoral. A legitimidade deste para o escrutínio dos governantes é inquestionável, devendo persistir permanentemente vigilante em relação à conduta dos sujeitos políticos e exercer a legítima desconfiança de seus representantes. No entanto, a existência de um aparato institucional estatal eficiente para contrastar a corrupção política é democraticamente legitimada e indispensável. Há várias razões que restringem o desempenho do controle vertical de poder pelo corpo eleitoral. As instituições expertas, profissionais e cooperantes entre si complementam satisfatoriamente e indispensavelmente este domínio de fiscalização e responsabilidade dos sujeitos políticos.

**SEXTA.** Fazer frente à corrupção política é uma tarefa árdua, suscetível de múltiplas barreiras e represálias a quem se atreve a levá-la a cabo. Quando é infringida a legalidade penal, deve existir no quadro jurídico e institucional de um Estado mecanismos aptos para responder adequadamente a essa vulneração. O Ministério Público, como instituição de persecução de ilícitos penais de corrupção, deve ser equipado com garantias idôneas para se proteger de influências governamentais, da captura partidária e de represálias decorrentes do inconformismo com seu desempenho. Essas garantias devem ser regidas normativamente a partir da Constituição e estender-se desde o processo de seleção de seus membros até a segurança da administração autônoma e o domínio da gestão financeira. Não devem ser esquecidos regimes de proteção da instituição em relação aos processos de nomeação e de exoneração do Procurador-Geral e o mecanismo de relacionamento interno entre os membros do Ministério Público e os escalões superiores. O princípio da hierarquia deve ser estabelecido basicamente em questões administrativas que não têm implicações diretas ou indiretas com o desempenho das atividades típicas de fundo dos membros do Ministério Público. A atuação processual, portanto, não pode ser deixada ao sabor de manobras administrativas para afastar o membro da instituição de um caso particular. O controle direto da chefia exercido através de instrumentos excepcionais, como a avocação, deve ser limitado a situações extremas e motivado, e não como um poder discricionário e injustificado.

**SETIMA.** A autonomia do Ministério Público e a independência de seus membros não são incompatíveis com o princípio da legitimidade democrática. É perfeitamente viável a rendição de contas política e jurídica da chefia institucional e dos demais membros individualmente considerados. O controle pelo poder político das potestades de mudança das normativas, da nomeação de magistrados das altas cortes e da determinação da política criminal são alguns dos muitos exemplos de contraste a um tendencial exercício de poder arbitrário pelo Ministério Público. O discurso da ilegitimidade democrática soa como pretexto para assegurar a impunidade de quem se envolve em supostos de corrupção política e rechaça qualquer forma de responsabilidade. Democracia e responsabilidade não são excludentes, muito pelo contrário. O poder eleito, desonesto e irresponsável, se desfaz de sua legitimação democrática.

**OITAVA.** Os processos sobre corrupção, por seu alto nível de interesse público, despertam no meio político e das comunicações intenções divergentes da mera fiscalização dos procedimentos jurisdicionais e da publicidade. O Ministério Público, por isso, deve manter-se estritamente dentro dos limites da informação imparcial e desinteressada ao lidar com tais processos. Deve rechaçar qualquer intento de utilizar-se como instrumento de propósitos políticos e de estímulo à mercantilização do processo penal como notícia. Por trás dos processos, sempre haverá um sujeito de direitos e todo seu entorno. Uma postura equidistante da questão política confere credibilidade à instituição e gera a confiança na cidadania no sentido de que o Ministério Público atua com imparcialidade e dirigido exclusivamente à realização do interesse público. A autonomia institucional e a independência dos membros do Ministério Público, igualmente, cumprem uma função nesse sentido, assim como a adoção de políticas específicas de formação de seu pessoal e de comunicação.

**NONA.** A conformação do conceito de interesse público e, por conseguinte, das formas de resolver os conflitos relacionados com ele, vem passando por serias transformações. Atualmente, de acordo com critérios normativos preestabelecidos, é possível fazer uso de esquemas que incluem a negociação, a transação, a arbitragem e outras formas similares de intervenção da vontade dos sujeitos interessados na construção de soluciones, para a resolução de casos de conflitos envolvendo o interesse

público. A eventual exclusão ou redução do papel das entidades públicas e do Poder Judiciário como meios de canalização dos processos de solução referidos, não significa *tout court* a consumação de prejuízos, potenciais ou concretos, ao interesse público.

**DECIMA.** A mudança referida anteriormente influenciou o papel que os juízes e membros do Ministério Público desenvolvem no processo penal. Isto não implica necessariamente a violação de garantias processuais. O Ministério Público contemporâneo ostenta a imparcialidade como um de seus princípios orientadores. Uma imparcialidade que não se confunde com a da atividade jurisdicional, a qual se aciona em outro momento, com outras condições e elementos reunidos e com finalidade própria. A atividade de persecução penal se desdobra no sentido de encontrar elementos objetivos e racionalmente justificáveis, segundo os critérios previstos na normativa, que demonstrem a comissão de um ilícito. A própria valoração dos fatos objeto de persecução não é livre, circunscrevendo-se aos parâmetros legais, doutrinários e da jurisprudência dos tribunais. O pressuposto das suas iniciativas não é a defesa do interesse próprio, e sim do interesse público: a aplicação da legalidade penal através de uma boa prestação de justiça. A instituição custodia os valores do Estado democrático de Direito que incidem em toda atividade de persecução penal. Essa intrínseca natureza de suas atividades e deveres retira parte do risco de que se desempenhe arbitrariamente.

**DECIMA PRIMEIRA.** O dever da imparcialidade do Ministério Público em nossos dias deve incluir a obrigação de audiência da parte investigada sobre a qual pode incidir o *ius puniendi*. Isto contém a obrigação de ter em conta provas contra a versão que legitimou ao princípio a iniciativa persecutória. Essa obrigação deve respeitar as circunstâncias fáticas e temporais que condicionam a realização das provas, a fim de que não se procrastine indevidamente, e por má fé, a atividade de persecução, e não se percam os elementos probatórios susceptíveis de desaparecimento. A normativa deve regular essa obrigação, reservando, quando seja o caso, para a instrução oral em juízo o exercício de tal direito pela defesa.

**DECIMA SEGUNDA.** O fato de o processo penal poder contemplar alguma forma de cooperação, negociação e colaboração entre os sujeitos

processuais que representem a abreviação ou resolução da solução do caso, não significa que o Ministério Público tem que buscar irreflexivamente a condenação ou a pior condição jurídica para o investigado. A presunção de que estes sujeitos processuais de antemão entram desprotegidos no processo penal se desmente pela assistência técnica jurídica obrigatória de que disfrutam e pelos deveres assinalados ao Ministério Público. Contrariamente, a presunção mais intuitiva é a de que as partes são as que melhor conhecem suas condições jurídicas atuais e tem a capacidade de projetar os possíveis cenários futuros com respeito a seus direitos. A segurança de que erros ou abusos não vão sacrificar os valores superiores do ordenamento jurídico deve advir da previsão normativa de pautas para o exercício dessas formas de intromissão da vontade no processo penal e de mecanismos de revisão preventivos ou corretivos, o principal deles a própria jurisdição.

**DECIMA TERCEIRA.** A cooperação no processo penal é um caminho consolidado. A jurisdição penal moderna deve contar com mecanismos de colaboração que contribuam para a aplicação da melhor justiça. A sociedade complexa em que vivemos requer a participação de todos, em todos os domínios da governabilidade social —incluída a esfera da Administração de Justiça— quando se trate de resolver questões emaranhadas e de transcendente interesse público como é a corrupção política. Com relação a esta, essa perspectiva da cooperação processual é muito pertinente. A investigação e o processo de casos de corrupção política são assuntos de indubitável interesse coletivo. A aclaração dos fatos dessa natureza concerne a toda a cidadania, assim como os resultados da persecução, de maneira que a cooperação no processo penal não deve excluir os mecanismos que acolham a colaboração de terceiros para que se realize o princípio de justiça.

**DECIMA QUARTA.** O Estado de Direito não deve ser visto como uma esfera apartada da sociedade, um conjunto de princípios e instituições que se justificam somente por sua própria existência. Ele está para responder às necessidades sociais, que hoje em dia são muito distintas das que se apresentaram na sua origem. Por essa razão, a verdadeira concretização desse Estado de Direito é uma tarefa de todos e o Direito deve desenhar as formas de integração da cidadania nessa tarefa. Isto inclui atribuir formas de



integração ao ciclo subjetivo de realização da Administração de Justiça através do processo penal.

**DECIMA QUINTA.** A democracia pressupõe a responsabilidade jurídica e política dos governantes. São esferas que se comunicam sem que se justaponham. Pode haver coincidência de oportunidade na incidência de ambas. Sem embargo, a responsabilidade jurídica, delimitada pelo Direito, é mais restrita que a política. A defasagem na execução da responsabilidade política não pode levar à indevida flexibilização da responsabilidade jurídica. O âmbito da política se governa por princípios, tempos, mecanismos, dinâmicas e objetivos muito próprios. Por mais corruptas e perenes que sejam as práticas do governo numa sociedade concreta, não será a responsabilidade jurídica que vai sanar esses problemas. Essa classe de resposta não está conformada para substituir a ação política. Os resultados dessa tentativa podem ser, entre outros, a flexibilização dos contornos do Direito Penal e das garantias provenientes do Direito Processual penal e, ao fim e ao cabo, o incremento da desconfiança e desafeição nas instituições e da frustração social.

**DECIMA SEXTA.** Os diversos sistemas jurídicos não são impermeáveis às influências externas. Os institutos do Direito europeu continental e do Direito anglo-saxão são susceptíveis de ter interações recíprocas e assunções de instituições de um para o outro. Assim, é natural a transposição de mecanismos de índole negociada próprios do *common law* para os sistemas baseados no *civil law*. Essa transposição, contudo, não pode ser realizada de forma absoluta e incondicionada. Cada sistema jurídico deve buscar os limites e reservas que representem sua visão acerca da compatibilidade interna e segurança jurídica. Não soa ser adequada tampouco a presunção de que os modelos, com seus ajustes, vão apresentar os mesmos resultados e os mesmos problemas. A formação dos profissionais das ciências jurídicas, a normativa local e o desenvolvimento das práticas em torno dos institutos destacados, segundo as peculiaridades de cada realidade, são dinâmicas condicionantes de como institutos similares previstos em diferentes ordenamentos alcançarão seu ponto de equilíbrio ótimo de funcionamento.

**DECIMA SETIMA.** A previsão de uma política de incentivos para os cooperantes no processo penal não é, em si mesma, um aspeto que desfigura

as garantias processuais ou induz de modo insuperável ao erro —ou ao abuso— na resolução dos conflitos penais. Nos casos de corrupção política, os incentivos são importantes, em particular, aqueles que representam garantias ao cooperante com relação a sua vida laboral o empresarial. A normativa deve prever os requisitos para a admissão da cooperação, para a atuação dos incentivos e para a responsabilidade em caso de má fé. Os incentivos são fundamentais para a consecução de melhores resultados pela Administração de Justiça. Esta não se move somente por exigências de eficiência e de utilidade, mas são importantes os resultados práticos traduzíveis em recuperação de recursos públicos e em reparação de danos coletivos causados pela corrupção política. O Direito não pode cerrar os olhos a essa circunstância.

**DECIMA OITAVA.** A corrupção política se conforma em um ambiente de canalização dos recursos públicos e privados envolvidos na sua dinâmica para destinos supranacionais distintos e sob diferentes estratégias de ocultação. Se se quer uma verdadeira persecução da corrupção política, a cooperação internacional aparece como uma etapa do processo penal indispensável. Uma cooperação que deve contar com garantias de sua fluidez e eficácia. A intervenção de terceiros intermediadores de seu trâmite, vinculados aos governos, somente se justifica com um carácter meramente burocrático. Qualquer apreciação de fundo desses órgãos com respeito aos procedimentos de cooperação internacional é contrária à independência da jurisdição. Isso porque, em tais supostos, o controle da prestação jurisdicional penal dependente da cooperação internacional para seu deslinde se traslada para as mãos do Poder Executivo. Desde outro ponto de vista, quando os sujeitos públicos são o alvo das medidas de cooperação solicitadas, a intervenção do Poder Executivo pode significar a possível impunidade desses criminosos.

**DECIMA NONA.** O Estado democrático de Direito, enquanto uma das más importantes conquistas civilizadoras, não pode ser reduzido a uma questão penal. Assim, se bem que a política não pode ser criminalizada, os políticos devem ser castigados por seus excessos criminais.

**VIGESIMA.** Todos os desenhos institucionais, arquétipos de sistemas de governo e ordenamentos jurídicos são o que são pelas a ação humana, para

o bem e para o mal. É através do aperfeiçoamento da formação, dos valores e compromissos desse elemento humano que os erros e abusos se tornarão cada vez mais uma exceção.